

mientras tanto

87

Verano 2003

consejo editorial Alfons Barceló, Lourdes Benería, M^a Rosa Borràs,
Ernest Cañada, Juan Ramón Capella,
José Antonio Estévez Araujo, Paco Fernández Buey,
Josep González Calvet, José Luis Gordillo,
Elena Grau, Antonio Izquierdo, Julia López,
Miguel Ángel Lorente, Antonio Madrid,
Xavier Pedrol, Alejandro Pérez, Enric Prat,
Albert Recio, Jorge Riechmann, Víctor Ríos,
Jordi Roca, Joaquim Sempere,
Héctor C. Silveira Gorski, Verena Stolcke,
Enric Tello, Josep Torrell

**consejo de redacción
de esta entrega** M^a Rosa Borràs, Juan Ramón Capella,
Xavier Domènech, Antonio Giménez, José Luis
Gordillo, Antonio Madrid, Xavier Pedrol,
Gerardo Pisarello, Enric Prat, Albert Recio,
Joaquim Sempere, Héctor C. Silveira

© Fundación Giulia Adinolfi - Manuel
Sacristán

dirección redacción Apartado de Correos 30059, Barcelona

edita **Icaria** ✿ editorial
Ausias Marc, 16, 3.º 2.ª / 08010 Barcelona
www.icariaeditorial.com

dirección suscripciones Apartado de Correos 857, Barcelona

cubierta y grafismo Josep Maria Martí

imprime Romanyà/Valls, S.A.
Verdaguer 1, Capellades (Barcelona)

Fotocomposición Text-gràfic

Depósito legal B-35.842-79

ISSN 0210-8259

publicación trimestral de ciencias sociales

la revista admite colaboraciones en cualquiera
de las lenguas peninsulares

ÍNDICE

NOTAS EDITORIALES	
La derecha hegemónica.....	5
Rebajas en las pensiones de jubilación	11
Brasil con Lula	17
Cleptocracia	27
Reflexiones sobre el lenguaje por María Rosa Borrás	29
Las razones del movimiento «Nunca Más» por Carlos Amoedo Souto.....	43
Democracia participativa en las organizaciones y los límites del asamblearismo por Xavier Godàs.....	73
Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad por Jordi Borja.....	85
El ferrocarril como columna vertebral del transporte sostenible por José Luis Ordóñez.....	99
Aldo Leopold: Estética de la conservación	121
México: 25 años después. Hacia un nuevo entendimiento por David Barkin.....	135

RESEÑA	
Giorgio Agamben: la lucidez en tiempos de excepcionalidad por Gerardo Pisarello	143
EL EXTREMISTA DISCRETO	
Una vida no muy beata	147
En la muerte de Manuel Vázquez Montalbán	148
CITA	149



Impreso en papel ecológico
(libre de cloro).

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual. Quienes deseen suscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

NOTAS EDITORIALES

LA DERECHA HEGEMÓNICA

I

Hace medio año creímos estar viviendo un proceso de cambio real. La ola de grandes movilizaciones sociales, especialmente en torno al desastre del Prestige y contra la guerra en Irak, parecía recobrar un viejo espíritu de cambio largo tiempo desaparecido del país. Las encuestas electorales mostraban un continuo retroceso del porcentaje de personas dispuestas a votar al Partido Popular, cuyos dirigentes no pasaban día sin cometer algún atropello a la ciudadanía o mostrar el sustrato reaccionario de su ideología.

Todo el mundo se frotaba las manos. La izquierda parlamentaria que, incluido el Partido Socialista Obrero Español, había jugado abiertamente a favor de las movilizaciones calculaba que éstas iban a traducirse en un alud de votos a su favor. Y la izquierda radical no dudaba en presentar las movilizaciones como la cristalización de un proceso de maduración de «los movimientos autónomos» en un movimiento alternativo de enorme profundidad social. Y quizá todos tenían algo de razón, si tomamos en cuenta el amplio sentimiento anti-PP que se palpaba en todas las movilizaciones, o la enorme capacidad de iniciativas espontáneas, puestas en movimiento en la fase más álgida de la campaña contra la guerra.

Después vino el desencanto progresivo. Las movilizaciones decayeron completamente, como ha ocurrido en campañas anteriores. En las elecciones municipales y autonómicas no se produjo la debacle deseada del Partido Popular y finalmente estalló la tormenta en la Asamblea de Madrid. Y el clima político ha cambiado paulatinamente y la coyuntura favorable a un cambio parece haberse evaporado por completo.

No hay una única línea explicativa a esta situación. Cualquier situación coyuntural es la resultante de procesos que actúan en planos diversos, de los que a menudo sólo somos capaces de entender una parte de los mismos, o, peor aún, tendemos a seleccionar los que mejor concuerdan con nuestra visión del mundo o con nuestras tomas de posición. Posiblemente este último ha sido uno de los elementos que más han jugado en los análisis de la izquierda y que conducen sistemáticamente a políticas erróneas.

II

Hay un primer y grave error al extrapolar el papel de la opinión pública y las movilizaciones contra de la guerra (o a escala gallega, la lucha de «Nunca más») y el cambio electoral. En primer lugar aunque las movilizaciones fueron impresionantes, éstas se limitaron a una parte activa de la sociedad, pero no llegaron a alcanzar a buena parte de los sectores sociales menos politizados que son al fin y al cabo los que en gran parte deciden los cambios electorales (la población con opinión elaborada difícilmente cruza la línea derecha-izquierda). En concreto, y al menos por lo que pudimos ver en Catalunya, la «movida» fue más activa en los barrios de clases medias asalariadas que en los barrios de clase obrera. Y mientras en los primeros se ha producido una cierta radicalización del voto (con ganancias para Esquerra Republicana e Iniciativa Verds), en los de clase obrera el Partido Popular ha obtenido mejores resultados. En segundo lugar porque los mecanismos del voto no siguen la línea recta de la reflexión racional. Juegan también otros muchos factores: mecanismos de corte clientelar —que posiblemente han amortiguado la pérdida de voto del P.P. en Galicia—, identificaciones primarias con líderes o siglas (en un mundo tan cargado de procesos de creación de ídolos), de miedo al cambio, de obediencia al poder, de información inadecuada (sólo hay que ver la información que se da en todas las cadenas generalistas de televisión, o preguntarse por qué la prensa más leída es la deportiva y la del «corazón»)... Sin contar que se trataba de unas elecciones municipales en las que la importancia de estos aspectos personales tiene una incidencia mayor. Parece claro que en ellas a menudo juega más el carácter populista del candidato que su proyecto o su programa.

En segundo lugar olvidamos la propia naturaleza de los cambios que han tenido lugar en los últimos años y que configuran un determinado modelo social. A menudo nuestras críticas a las perversidades del modelo social actual nos hacen olvidar la complejidad del mismo y sus efectos para la población. Aunque el paro es un problema irresuelto olvidamos, por ejemplo, que en los últimos años se ha generado mucho empleo e importantes sectores sociales se han enriquecido de múltiples formas. Se trata sin duda de un modelo de desarrollo depredador, tanto en el plano laboral —empleo temporal, precariedad, desigualdades salariales en aumento, proliferación de horarios indeseables y de empleos peligrosos para la salud, explotación de inmigrantes, etc.— como en el social —gravidad del problema de la vivienda, degradación del sistema escolar, consumismo compulsivo— y el ambiental —degradación del territorio, consumo energético desaforado, agotamiento de recursos hídricos, acumulación acelerada de residuos—, pero es un modelo de desarrollo que genera sus adeptos e impulsa inercias sociales a su favor. No es casualidad que el Partido Popular resulte claramente dominante en aquellas áreas o comunidades autónomas que más éxito han tenido en este proceso: el País Valencià, Murcia, gran parte del litoral andaluz, Baleares, Canarias... Un desarrollo que genera además pulsiones muy reaccionarias entre muchas personas, desde la conversión de muchos ciudadanos en «propietarios de bienes inmuebles» más interesados en las cuestiones que afectan al valor potencial de sus fincas que en un desarrollo urbano racional (lo que explica numerosas movilizaciones de oposición a la instalación de determinados equipamientos sociales: tanatorios, centros de tratamiento de drogodependencias, de asistencia a mujeres maltratadas, etc.), hasta la búsqueda de credenciales de distinción que está en la base de la fuga de amplios sectores de capas medias y de clase obrera hacia la escuela privada. El proyecto neoliberal se ha impuesto desde arriba, desde las élites y las grandes instituciones, pero debemos reconocer que está influyendo en amplios sectores sociales que dotan de densidad a estas políticas reaccionarias.

Y en tercer lugar está la gestión por parte del Gobierno del miedo como estrategia dominante. Algo que es también común en otras latitudes y que en nuestro país cuenta además con dos cuestiones específicas: la existencia de una identidad nacional no resuelta, agravada por la contumacia de E.T.A. en mantener una estrategia militar totalmente inaceptable, y la inmigración masiva de extracomunitarios como un fenómeno desconocido en España desde la Edad Media. Aunque se trata de dos cuestiones diferentes, el Partido Popular ha sido suficientemente hábil para presentarlo como una cuestión común, tanto en su aspecto de seguridad como en su idea de la defensa de España. Esto último se hace evidente cuando se intenta plantear a muchas personas de clase obrera (inmigrantes ellos mismos a las zonas industriales en los años cincuentas y sesentas) la similitud de su experiencia pasada con

el proceso que viven actualmente ecuatorianos, colombianos, marroquíes, rumanos, etc., en ámbitos como las condiciones de vivienda, el empleo, el desarraigo, el vivir entre dos mundos etc. (en algunos casos las similitudes son mayores: al menos en Barcelona hasta mitad de los años 50 la llegada de inmigrantes no era libre, a los que no tenían relaciones o referencias se les detenía a su llegada a la estación de Francia, se les enviaba a un centro de paso en Montjuïc y se les devolvía a su pueblo de origen). La respuesta más habitual es que «no es lo mismo, nosotros éramos españoles, ellos no lo son». Es sin duda una respuesta irracional, insolidaria, sesgada, pero que apunta a la creación de una hegemonía que explica la presencia del voto pepero (o algún fenómeno de ultraderecha) entre la clase obrera. Quizá porque se intuye que una mayor ampliación de lo autonómico nos convertiría también a nosotros en extranjeros, o sea en individuos sin o con pocos derechos.

En definitiva, hay muchos aspectos que conspiran en favor del status quo y que explican cómo la extrema derecha gobernante puede contar con un suelo de votos y de hegemonía social. Y que a la vez muestran la frivolidad de muchas izquierdas a la hora de pensar que el cambio social está a la esquina y que es sólo cosa de esperar su llegada. Una actitud en la que a menudo caen tanto los políticos profesionales atentos sólo a pequeños trucos electorales, como los sectores dinámicos de la izquierda radical que se confundieron al ver la indignación social contra la guerra y las manipulaciones del gobierno como un indicio de que el neoliberalismo y la globalización tienen los días contados.

III

En términos realistas el resultado de las elecciones de mayo fue mejor de lo que mucha gente pensó. A pesar de todo, el Partido Popular dejó de ser el más votado, y tuvo algunas derrotas importantes (por ejemplo la provincia de A Coruña). En algunos Ayuntamientos, particularmente en Catalunya, hubo un voto más a la izquierda (no sólo a ICV- EUiA, en muchas localidades votar ERC es para muchas gentes votar más a la izquierda). La verdadera derrota vendría después, en el sucio *affaire* de la Comunidad de Madrid.

Sin duda detrás de Tamayo está el *lobby* constructor y el Partido Popular (la caradura de Esperanza Aguirre declarando que los «interrogatorios del PSOE» son de la época hitleriana, o que se les acusa sin indicios, no necesita comentarios). Sin duda muestra que para la derecha todo vale para mantenerse en el poder (y posiblemente ésta fue una jugada forzada por el miedo no imaginario a perder la próxima cita electoral). Y es evidente que la historia del Partido Popular a nivel nacional, regional o local está trufada de muchos más casos de corrupción que la de los partidos de izquierda, aunque su poder

mediático y el apoyo de parte del sistema judicial les ha permitido salir airoso de muchas situaciones comprometidas (desde el fallo que decretó que las cintas que implicaban a varios dirigentes populares, entre ellos a Zaplana, en el cobro sistemático de comisiones eran ilegales, hasta la actuación escandalosa del actual Fiscal General en defensa de sus amigos políticos). Y resulta palpable que el actual modelo de desarrollo urbanístico y gestión privatizada de los servicios colectivos constituye un caldo de cultivo básico para que la corrupción sea endémica. Pero todo ello ha quedado oscurecido y tergiversado por la jugada maestra de los dos diputados tránsfugas.

Todo el *affaire* le ha servido al Partido Popular para plantear a la sociedad dos ideas fuerza ampliamente rentables para sus intereses. Primera, que el PSOE sigue siendo un partido lleno de corruptos, no renovado. Una idea sumamente interesante porque al final promueve algo más que la condena moral a los corruptos: promueve la despolitización. Porque para mucha gente, y especialmente para la gente humilde que es la principal votante de la izquierda, al final es fácil creer que todos los políticos son iguales, que sólo buscan intereses privados y que de sector público cuando menos mejor. Una idea que corre subliminalmente por la sociedad y que ha constituido uno de los pilares ideológicos del neoliberalismo. Una idea fácilmente asumible no sólo por la experiencia de muchos políticos poco escrupulosos, sino también porque en el clima de bajo perfil democrático de este país mucha gente piensa que ella también actuaría igual si estuviera en situación (es ciego no detectar cuan arraigadas están las culturas del clientelismo, el enchufe, el miedo individual, la evasión de tareas colectivas en nuestra sociedad). Y si todos son iguales, la alternativa simplemente no vale la pena. La segunda, obvia, es que el PSOE no tiene dirección y deja que cualquier chorizo alcance cuotas de poder por falta de una mano dura que imponga una línea única (de nuevo la apelación a los valores reaccionarios).

Y lo peor de todo es la falta de una respuesta clara por parte del PSOE, al menos en los dos campos en los que debiera haber sido contundente. En primer lugar en asumir la propia responsabilidad por mantener a este tipo de gentuza en su seno. Una responsabilidad que corresponde a los responsables de organización, que habrían podido dar un ejemplo inmejorable de cultura democrática de haber dimitido a tiempo (y de paso poner en evidencia a los Cascos, Fragas, Trillos que a diario dan muestras públicas de la más patética insolvencia). En segundo lugar en realizar una explicación clara y nítida de los mecanismos de corrupción urbanística y de las propuestas políticas orientadas a atajarlas. En lugar de ello se han embarrancado en una actuación judicial y parlamentaria tan mal realizada que sólo pueden sacar de ella más costes que ventajas. Posiblemente porque es cierto que el propio PSOE no es ajeno ni a los hábitos generales de la cultura política de la derecha, ni está

dispuesto a ir muy lejos frente al actual *lobby* inmobiliario que al fin y a la postre genera empleo, permite financiar las haciendas locales y también al propio aparato partidista.

IV

Esta crisis agrava una situación ya de por sí crítica, dominada por la falta de proyectos claros de izquierdas. Tanto en el campo socialdemócrata como en el de sus presuntos oponentes antiglobalizadores.

La socialdemocracia hace años que navega sin rumbo. Desde el momento que los grandes grupos capitalistas consideraron innecesaria una política de pactos sociales reformistas, y buena parte de la «intelligentsia» socialdemócrata se rindió a los postulados de la ideología dominante, desapareció cualquier oportunidad fuerte de política alternativa dentro del sistema. Y con ello quedó desorientada gran parte de su base social. Actuaciones criminales como la de Tony Blair no hacen sino ahondar en esta crisis de proyecto y contribuir a fomentar la imagen de que no hay alternativa.

Pero tampoco sus críticos radicales van mucho más allá. Afirmar que «otro mundo es posible» es repetir un buen deseo sin contenido concreto. Muchas de las medidas que se apuntan en estos movimientos (tasas Tobin, rentas universales, etc.) son, como mucho, medidas concretas que no forman parte de un proyecto global alternativo. Es fácil, y justo, rechazar el capitalismo por sus numerosos costes sociales, pero las críticas no suponen de por sí alternativas. Y las posiciones antimercado no pueden olvidar el fracaso y los costes sociales de la experiencia soviética ni perder de vista que cualquier proyecto serio de futuro debe considerar en serio los límites ecológicos de la actividad humana (lo que supone rechazar como insuficientes los proyectos sustentados en una mera redistribución de la riqueza sin considerar el contenido material de la actividad económica). Y es que la realidad no se transforma sólo con buenos deseos, ni existe la posibilidad del cambio súbito radical, sino que exige una praxis cotidiana de transformación que acabe por generar cambios sociales profundos. La misma apelación a la democracia asamblearia o participativa, una de las cuestiones más importantes de los movimientos sociales actuales, exige una seria articulación cuando se pretende convertir en un eje general de organización social.

Todos los fenómenos tienen causas múltiples, pero sin duda la ausencia de grandes proyectos alternativos no sólo limita la profundidad de la crítica o impide la formulación de propuestas de cambio movilizadoras, sino que también contribuye a la fragmentación de los sujetos sociales y, en particular, al

desconcierto social en el que vive una gran parte de la clase obrera industrial y de servicios.

V

Si algo caracteriza el período actual es la rapidez con la que se ponen en evidencia las falsas visiones. Quizá porque el medio social está tan expuesto a la cultura publicitaria que los agentes sociales recurren sistemáticamente a la propaganda como forma de comunicación. Sorprende al respecto la velocidad con la que se han puesto en evidencia las numerosas mentiras del bando neocolonial para justificar la guerra de Irak y cómo se han desvanecido sus propias ilusiones de una ocupación feliz. Pero también nuestras representaciones de una sociedad masivamente movilizada contra un gobierno reaccionario, mentiroso y corrupto se han mostrado igualmente infundadas. Quizá si aprendemos a ser más autocríticos, a elaborar propuestas de transformación que tengan en cuenta la sociedad real en la que se tienen que implantar (con sus mecanismos de poder, sus sistemas de representación, sus dinámicas) y a elaborar en serio proyectos sociales alternativos (que no traten de eludir las cuestiones fundamentales con las que han chocado sistemáticamente las experiencias que nos han precedido) este «desencanto» habrá sido útil. Ésta no es, por fortuna, una sociedad pasiva. Las respuestas sociales de hace un año indican que en el corazón y la cabeza de millones de personas anidan aspiraciones a un mundo más justo, más democrático. Pero para que este potencial se convierta en una fuerza eficaz hay que impulsarla con prácticas y reflexiones que pervivan más allá de 50 telediarios. **A.R.A.**, *septiembre de 2003*.

REBAJAS EN LAS PENSIONES DE JUBILACIÓN

I

Casi en secreto, los partidos firmantes del Pacto de Toledo, han alcanzado un acuerdo de principios para reformar la Seguridad Social, básicamente en la línea de ampliar el número de años de cotización que se van a tomar en cuenta a la hora de calcular la pensión de jubilación. Pocas dudas hay sobre el objetivo buscado: un nuevo recorte en las pensiones medias que cobraremos los futuros pensionistas.

Para justificar tal medida se presentan diversos estudios científicos (básicamente emanados de la Fundación BBVA y de la Fundación Fedea, depen-

diente de la Confederación Española de Cajas de Ahorro) en los que se anuncia la quiebra de la seguridad social en el horizonte del 2050. El núcleo de su argumentación es sencillo y útil para convencer a incautos. Dadas las actuales tendencias demográficas es inevitable el envejecimiento de la población española y el consiguiente aumento del porcentaje de personas que deberán depender de una pensión con respecto a las que están empleadas. Como el sistema español es un sistema de reparto —lo que quiere decir que con las cotizaciones de los ocupados se pagan las pensiones de los inactivos— el aumento de la dependencia hará inviable el sistema. El sistema español de pensiones (número de años que hay que cotizar para tener derecho a pensión, proporción entre lo cotizado y lo que se recibe como pensión) es, según estos análisis (ampliamente jaleados por el Fondo Monetario Internacional, la Organización de Cooperación y Desarrollo Económico y la Unión Europea) tan generoso que nos pone en la vía del desastre. Y como viene siendo la tónica en este mundo neoliberal de soluciones únicas, sólo queda una opción: recortar derechos (aumentar los años de cotización, alargar la edad de jubilación, recortar la cuantía de las prestaciones) y promover un sistema complementario semiprivado basado en el sistema de capitalización. Esto es, invertir estas cotizaciones complementarias en actividades lucrativas que permitan generar rendimientos para pagar parte de las pensiones.

De hecho, llevan tiempo intentando imponer este sistema complementario, con resultados modestos. Las rentas monetarias de la mayoría de personas asalariadas no dan para ahorrar mucho. Además la inversión individual en pensiones es siempre menor de la prevista por el predominio de un comportamiento psicológico bien estudiado (por ejemplo por los premios Nobel de Economía G. Akerlof y D. Khaneman): tenemos dificultades para apreciar lo que ocurrirá en un futuro lejano, lo que se traduce en que en general tendemos a gastar más de lo que aconsejan las técnicas de previsión de ahorro para garantizar rentas futuras (sólo hay que ver el elevado endeudamiento de la gente cuando se ha desarrollado un sistema crediticio que facilita la obtención de préstamos). Por ello resulta evidente que los sistemas de ahorro «forzoso», como de hecho lo son los de Seguridad Social pública, tienen, además de efectos redistributivos, la bondad de que mejoran los comportamientos en este campo. Y se pueden hacer al respecto ejercicios mentales interesantes, como ver qué ocurriría si no hubiera un seguro obligatorio de automóvil. Para desarrollar a fondo un sistema complementario es necesaria una presión política muy fuerte que altere comportamientos y haga imperativo el nuevo sistema. No deja de ser paradójico que las políticas neoliberales, en teoría justificadas por defender la libre elección individual y defensoras de un estado mínimo, sólo pueden llevarse a la práctica con intervenciones «fuertes» del poder político.

II

Frente a esta nueva política de recortes sociales, hay respuestas sencillas que contienen buenas dosis de verdad. Éstas discuten tanto los argumentos que justifican el recorte, como las razones de fondo del mismo.

El recorte de las pensiones se justifica por la necesidad de mantener viable el sistema público. Pero es fácilmente palpable que éste podría reforzarse de diversas formas. Quizá la más directa sería aumentar, no disminuir, las cuotas o, mejor aún, replantear el sistema de financiación pasándolo de meras cotizaciones salariales a una financiación total o parcial vía impuestos (ésta es por ejemplo la situación en Dinamarca). Se propone la rebaja porque se quiere desarrollar un sistema secundario de gestión privada, ya que las clases dirigentes han tomado conciencia de que, al menos por el momento, no va a ser posible imponer el modelo de privatización total imperante en diversos países latinoamericanos. El objetivo parece claro: permitir a los grandes grupos financieros gestionar miles de millones de euros a lo largo de muchos años. Un suculento negocio de comisiones y de poder. Una forma de garantizar que habrá, al menos para un largo período de tiempo, un flujo de dinero fresco que alimentará la especulación bursátil y mantendrá activo el actual modelo de capitalismo financiero.

La justificación en base a las tendencias demográficas es ciertamente importante pero tiene diversas lagunas. Las respuestas más habituales de los defensores del sistema de reparto se basan en discutir el automatismo de la cuestión demográfica. La tasa de dependencia (pensionistas/ocupados) no está determinada automáticamente por la edad: el porcentaje de ocupados puede aumentar por vías diversas: aumentando las tasas de participación en el mercado laboral o fomentando la inmigración. De hecho parece lógico esperar que una sociedad en vías de envejecimiento abrirá numerosas oportunidades de empleo al populoso ejército industrial de reserva existente a escala local y mundial. Por otra parte, vale la pena recordar que a la postre lo que determina la capacidad de repartir rentas es la producción total de la sociedad, no cuánta gente trabaja. De hecho, la improbable utopía postindustrial de un mundo sin trabajo no supone un mundo sin bienes y servicios que consumir, sino un mundo donde la necesidad de esfuerzo humano ha dejado de ser un requisito para el consumo. Los aumentos de productividad ligados al cambio técnico permitirían a menos personas sustentar a la masa de la población envejecida. La combinación de mejoras tecnológicas, cambios en los comportamientos laborales de las personas adultas e inmigración, pueden paliar total o parcialmente los efectos del envejecimiento. De hecho esto explicaría en buena medida el fracaso de los estudios alarmistas que situaban en el año 2000 el momento de descarrilamiento total del sistema. El que las mismas

personas que realizaron tan desaforada previsión sean las mismas que, sin rubor, anuncian nuevos desastres en el futuro, aumenta las dudas sobre la calidad del análisis. Su fallo consistió en no considerar adecuadamente los cambios en el empleo que han tenido lugar a partir de 1994, aunque posiblemente también ha ayudado al superávit de la Seguridad Social el progresivo recorte de pensiones que ha tenido lugar a partir de las reformas iniciadas en 1985.

Existe sin embargo una crítica menos habitual, pero que considero más fundamental. Y que parte ciertamente de reconocer la importancia de los cambios demográficos. Estos generan sin duda problemas a los esquemas de financiación de la Seguridad Social, pero no sólo a los de reparto, también a los de capitalización que se plantean como alternativa. En definitiva, si aumenta la proporción de población que vive de rentas (y que en muchos casos requiere un esfuerzo adicional de cuidados de diverso tipo), éstas deben detrarse del producto total de la sociedad, y van a suponer una parte creciente del mismo, a menos que el crecimiento de la productividad sea tan improbablemente espectacular que nos lleve al reino de Jauja (en este caso cualquier esquema posiblemente funcionaría con éxito). Los defensores del sistema de capitalización se amparan en modelos teóricos que suponen que la tasa de crecimiento de los beneficios está dada. Un supuesto que desmiente la experiencia cotidiana de enormes vaivenes bursátiles, de fondos de pensiones fracasados, cuando no de un verdadero proceso de rapiña empresarial que funde las previsiones en poco tiempo. Los ejemplos están a montones. Desde los megaescándalos de las compañías eléctricas estadounidenses (Enron, Dynegy, etc.) hasta las chorizadas locales de Gescartera o Eurobank, sin dejar de considerar el anuncio de diversas grandes empresas (entre ellas General Electric) de las enormes dificultades de hacer frente a unos planes que se han mostrado mal diseñados.

El sistema propuesto por los reformistas tendrá además un importante efecto sobre las desigualdades sociales. En teoría, el esquema propuesto consiste en combinar una pensión pública de mínimos con una complementaria generada por un proceso de capitalización a base de planes de pensiones colectivos establecidos a partir de la negociación colectiva. Para animar a las empresas y a los asalariados a financiar estos planes complementarios se introducirán seguramente importantes incentivos fiscales, reduciéndose con ellos los ingresos públicos que podrían emplearse en mejorar las pensiones o en otras actividades sociales. La reducción de las prestaciones del actual sistema y la creación de un marco legal adecuado animará posiblemente a la difusión de estos esquemas en la negociación colectiva, limitada actualmente a grandes empresas que ya la habían introducido en los viejos tiempos del franquismo (y que ya protagonizaron historias instructivas, como la de la volatilización

de parte de los fondos de Telefónica o la quiebra de Galerías Preciados, inducida en parte por una política de pensiones demagógica e inviable). Resulta patente que en el actual mercado laboral español, dominado por los contratos temporales, las mil y una formas de subcontratas y las empresas de pequeño tamaño, la introducción de estos fondos colectivos sólo alcanzará a una fracción «privilegiada» de la clase trabajadora: la que mantenga el empleo estable en las grandes empresas, lo que reforzará de nuevo las enormes desigualdades existentes entre franjas de asalariados en función de su ubicación laboral (sólo hay que comparar las condiciones de prejubilación de que gozan antiguos empleados de banca o empresas de servicios públicos, con la del resto de personas que perdieron el empleo al llegar a la cincuentena). La defensa de un sistema público, unitario, de pensiones de jubilación constituye por tanto un punto crucial en la lucha contra la desigualdad.

III

La defensa del sistema público no puede plantearse en términos numantinos. En primer lugar porque cualquier análisis serio del sistema actual muestra enormes deficiencias e injusticias. Es posible que la crítica de que se trata de un sistema relativamente «generoso» tenga algo de verdad, si sólo se considera la situación de algunos grupos particulares: los que han conseguido mantener un empleo estable durante su vida laboral y han tenido un salario relativamente alto, o una gran parte de los cotizantes en regímenes especiales, que han contribuido poco y han recibido proporcionalmente bastante. Pero resulta palpable que ésta no es la situación de una gran mayoría de personas que de forma creciente subsisten en un mundo laboral dominado por la precariedad, o que pierden su empleo en la raya de los cincuenta años y tienen dificultades para obtener un nuevo empleo. Estas personas, a pesar de que pueden haber estado cotizando 30 años, al final sólo percibirán la pensión mínima, al haber sido expulsados del mercado laboral a edad relativamente temprana. Sin duda un factor donde juegan de forma importante las diferencias de género y grupo social. También deben discutirse otros aspectos, como las propias bases de cotización, que por lo general tienden a reducir la importancia de las mismas para los estratos de ingresos más altos. O la política de subvencionar el empleo mediante descuentos de las cuotas, que, a parte de su habitual inutilidad (una reciente revisión del tema publicada en la *Revista Internacional del Trabajo* indica que la mayoría de estas subvenciones son regalos por crear empleos que se hubieran creado igualmente de no haber existido las mismas), está provocando agujeros en los ingresos.

Incluso debe irse más allá de estas revisiones «técnicas», aunque con importantes repercusiones sociales. Hay que tomar en serio las cuestiones que plan-

tean los críticos al actual sistema. Particularmente el tema de la crisis demográfica. Sin duda, las pautas de natalidad y el alargamiento de la vida humana generan numerosas cuestiones y hacen prever que entraremos en un nuevo período de transición demográfica que exigirá numerosos ajustes sociales, no sólo en pensiones (y gasto sanitario), también en necesidades de atención personal. Y una sociedad con una estructura demográfica diferente debe adecuar sus instituciones para hacer frente a estas nuevas demandas. La solución neoliberal es una falsa respuesta al problema, porque se traduce en dejar en la miseria y la marginación a una parte de la población anciana (quizá se confía en que de este modo estos ancianos vivirán menos años y serán una carga menor para el sistema: algo de ello puede explicar la mediocre esperanza de vida estadounidense respecto a la imperante en otros países capitalistas desarrollados). La derrota del neoliberalismo pasa, entre otras cosas, por ofrecer respuestas sociales que se muestren socialmente superiores.

Hay al menos tres campos donde pensar políticas alternativas. El primero es el de los sistemas actuales de distribución de la renta (y de fijación de la participación en el trabajo social). Parece evidente que el sistema actual genera una creciente lotería y desigualdad que afectan tanto al período de participación en el mercado laboral como a la llamada «inactividad» (no sólo la jubilación, también el ejercicio de actividades no mercantiles socialmente útiles, particularmente, el trabajo doméstico familiar). Una política alternativa debe estar encaminada a diseñar sistemas de remuneración socialmente aceptables y que a la vez garanticen a todo el mundo un nivel de bienestar adecuado. El segundo campo es el de las reformas sociales necesarias para facilitar la transición. Ésta debe considerar indefectiblemente tres cuestiones: la relación entre vida laboral mercantil, trabajo doméstico y vida social, la de los procesos migratorios y la de los servicios de atención a la tercera edad. Las dos primeras están relacionadas con la búsqueda de mano de obra para cubrir el vacío laboral de las cohortes actuales (y las necesidades laborales que su cuidado requerirá), pero entraña numerosas cuestiones como las políticas de tiempos, la distribución del trabajo no mercantil, la política de vivienda, de educación, etc. Las últimas se refieren a la puesta en funcionamiento de una verdadera organización social adecuada a las necesidades de una población envejecida y que exige que el debate no se limite al *quantum* de las pensiones, sino a un conjunto mucho más amplio de temas (gasto sanitario, organización de la atención social, de las formas de ocio y relación, de la vivienda...)

Y queda un tercer espacio en el que a menudo vamos por detrás de nuestros oponentes. En gran medida la catastrófica valoración del futuro de las pensiones se relaciona con las posibilidades futuras de crecimiento económico. Éste ha llegado a constituir un imperativo de tal magnitud que lleva a consi-

derar un drama insoportable el debilitamiento del mismo. Esto es lógico si se mide el mundo desde la perspectiva de la empresa capitalista. Pero no lo es en absoluto cuando se contempla desde otros espacios. Ser cada vez más ricos no es necesariamente lo mejor, no sólo por razones ecológicas sino a menudo por mera razón de buen vivir. Sin duda toda sociedad debe preocuparse porque las necesidades básicas estén cubiertas y la vida sea algo digno de vivir. Pero posiblemente ello puede garantizarse de muchas formas y algunas posiblemente no exijan la patológica dependencia del crecimiento. En la propia visión de las contribuciones sociales como un ahorro para el futuro (una acumulación de derechos), en lugar de una transferencia intergeneracional basada en un pacto social básico (del mismo tipo del que recibe la población infantil), está inscrita esta patología del crecimiento. Y cualquier sistema de pensiones que esté basado en la idea de un crecimiento futuro ilimitado puede caer en la misma promesa incumplida que la que se experimenta hoy con los sistemas públicos y privados de pensiones. Por esto la apuesta estratégica de la izquierda debe basarse en la búsqueda de un nuevo modelo institucional. Diseñado para garantizar las necesidades básicas y el desarrollo social de todas las personas antes que la acumulación febril de bienes y riqueza. Y en ellas entra evidentemente una política de apoyo a las personas de edad avanzada. **A.R.A.**, 14 de septiembre de 2003.

BRASIL CON LULA

Ya hace algo más de seis meses que Lula tomó las riendas de Brasil, después del período de transición tras las elecciones presidenciales. Puede ser un buen momento para realizar un análisis de lo que está resultando la experiencia del primer presidente de origen obrero de la historia de esa nación.

La herencia que Lula recibió

Lula heredó un país con muchos y graves problemas, algunos de ellos ancestrales, otros surgidos en los últimos tiempos. El problema más antiguo de Brasil es la enorme desigualdad en el reparto de la renta y la riqueza. El país de Lula ostenta el lamentable «record» de tener la distribución más desigual del mundo. A finales del pasado siglo, el 1% más rico de la población recibía el 15% de la renta y el 35% iba a parar al 5% con más ingresos. Por su parte, el 20% más pobre de la población percibía un poco más del 2% de la renta total y el 80% no llegaba a tener los mismos ingresos que el 5% más rico. Uno de los resultados de esa situación es que más de 30 millones de personas

pasan hambre en un país que se ha convertido este año en el primer exportador del mundo de carne bovina.¹

La desigualdad social, característica histórica de Brasil, se agudizó con las políticas neoliberales de las últimas tres décadas y sus consecuencias se vieron enormemente agravadas por la crisis de la deuda de los años ochenta. Desde entonces Brasil se ha visto obligado a renegociar la deuda externa, a emitir deuda interna para hacer frente a los intereses de aquélla y a solicitar créditos al FMI, sometiéndose a sus draconianas condiciones. En el año 2001, Brasil tenía una deuda externa de 225.000 millones de dólares para un PIB de 500.000 millones, según datos del Banco Mundial. Pero el problema no reside sólo en el volumen de endeudamiento, sino en el montante de los intereses que Brasil se ve obligado a pagar.

En 2001 el servicio de la deuda significó pagos de 43.000 millones de dólares. Según algunos cálculos, Estados Unidos, el país más endeudado del mundo, paga 1'5 dólares anuales por cada 100 de deuda, mientras que Brasil ha estado pagando 17'5. Eso es así porque para conseguir inversores Brasil tiene que «indexar» su deuda y se ve obligado a ofrecer unos intereses reales muy altos. De hecho, al igual que otros países latinoamericanos, Brasil ya ha pagado mucho más dinero que el montante de su deuda original. Se encuentra en una situación parecida a la de los antiguos trabajadores de las *fazendas* que tan bien describe Jorge Amado: esos empleados tenían que comprar alimentos y otros bienes en el almacén de la propia hacienda con lo que se endeudaban y acababan viéndose obligados a trabajar exclusivamente para pagar esa deuda, que crecía continuamente.

Una de las consecuencias que ha tenido el desvío de esa enorme cantidad de dinero ha sido un deterioro inexorable de las infraestructuras y servicios públicos. Las escuelas estatales y municipales están en un estado lamentable, a veces ruinoso. Los maestros reciben verdaderos salarios de hambre. El sistema público de salud carece de recursos humanos y materiales para atender a la población. El transporte urbano es pésimo y peligroso, salvo algunas excepciones como Porto Alegre. Y las carreteras, que constituyen la principal vía de transporte desde que en los años cincuenta se abandonó el ferrocarril, están llenas de baches y remiendos y, en algunos trechos, incluso ha desapa-

1. Los datos e informaciones contenidos en este artículo han sido extraídos fundamentalmente de los periódicos *Folha de São Paulo*, *O Estado de São Paulo* y *Gazeta Mercantil*, de las revistas *Veja e Istoé*, de *Caros amigos*, una de las pocas revistas brasileñas de izquierda de ámbito nacional, de la página web del Banco Mundial y del libro del brasileñista norteamericano Thomas Skidmore: *Uma História do Brasil*, São Paulo, Paz e Terra, 1998, así como de entrevistas y conversaciones llevadas a cabo en Brasil durante el mes de agosto de 2003.

recido el asfalto. Todo eso no era así en los años setenta. Salud, educación y transporte eran servicios con un nivel de dignidad bastante mayor.

De hecho, si uno observa los porcentajes del presupuesto que se destinan a educación y salud se da cuenta que no son especialmente bajos. Pero es que ahí uno topa con otro de los problemas endémicos de Brasil: la corrupción. Recursos hay, pero una buena parte de ellos no llega ni a las escuelas ni a los hospitales, ni a los alumnos, ni a los enfermos. Algunos cálculos apuntan que el 40% de los recursos públicos son «desviados» en forma de sobornos, «comisiones», «sobrefacturaciones» o simples y puros robos. Recientemente «saltó» a la prensa un escándalo de evasión de capitales por un montante de 50.000 millones de dólares (más dinero que el servicio anual de la deuda en 2002) en el que estaban implicados políticos y hombres de negocios. La mayor parte de ese dinero provenía de transacciones corruptas. Corrupción y deuda son los dos sumideros por los que desaparecen los recursos que deberían dedicarse a garantizar la educación, la salud, el transporte y los demás servicios públicos para todos los brasileños.

El deterioro de los servicios públicos ha contribuido a generar un abismo entre las personas pertenecientes a la clase media y los trabajadores manuales, de dimensiones desconocidas en países como el nuestro. Los miembros de la clase media han huido de los servicios públicos, que antes utilizaban, y ahora llevan a sus hijos a escuelas privadas, contratan seguros privados de salud y se desplazan a todas partes en coche. Y no es que la carga impositiva sea baja (especialmente en el caso de los asalariados de mayor nivel de renta, que pagan un 27'5% de impuesto). De hecho, la presión impositiva en Brasil en relación al PIB está entre la de España y la de Alemania. Otra cosa es cómo se reparte esa carga y qué destino se da a los recursos que se recaudan. Algunas personas (especialmente los asalariados de nivel medio y alto) se quejan diciendo que en Brasil se pagan tantos impuestos como en Dinamarca, pero que los servicios que se reciben son propios de un país africano.

Esta situación de desigualdad, drenaje de recursos públicos, pobreza y falta de servicios —que tiene su expresión más angustiosa en las *favelas* de las grandes ciudades y en las tierras secas del Nordeste— ha dado lugar a un enorme incremento de la criminalidad y la violencia. En Sao Paulo mueren asesinadas 900 personas por mes y en Río de Janeiro 600, en una espiral que ha llevado a algunas personas a hablar de una «colombianización» de Brasil. Quienes sufren en mayor grado esa violencia son precisamente las personas más pobres, especialmente quienes viven en las *favelas* bajo el régimen de terror de los narcotraficantes. Las familias de clase media y alta se encierran en apartamentos rodeados de vallas metálicas, con guardias las veinticuatro horas del día, control de acceso, sistemas de vigilancia electrónica y cámaras hasta en el

interior de los ascensores. La seguridad también es un servicio que se ha privatizado. En las páginas de anuncios de coches usados de los periódicos hay incluso una sección dedicada específicamente a automóviles blindados.

La construcción de una base política

La victoria de Lula en las elecciones presidenciales no vino acompañada de la obtención de la mayoría absoluta en el Parlamento (aunque el PT es el partido que cuenta con más diputados). Por tanto, la primera tarea que el nuevo presidente de Brasil tuvo que acometer al inicio de su mandato fue la de crear una base parlamentaria amplia y conseguir los apoyos políticos necesarios para configurar su gobierno. El resultado ha sido una alianza que incluye a todos los partidos de izquierda y centro representados en el Parlamento, con la excepción del PSDB (la formación socialdemócrata del anterior presidente, Fernando Henrique Cardoso), que junto con el partido representante de la derecha, el PFL configuran la oposición parlamentaria. No obstante, dada la fragmentación política (hay 16 partidos representados en el Parlamento) y la escasa disciplina partidaria, los apoyos tienen que negociarse «ad hoc» para cada proyecto legislativo. Así, en la votación de la reforma del sistema de pensiones realizada en agosto de este año, más de medio centenar de diputados de la coalición progubernamental negaron su apoyo al proyecto del gobierno (entre ellos once del propio PT), mientras que una cantidad equivalente de diputados de la oposición lo apoyaron.

Por lo que respecta al gobierno, en él están presentes ministros provenientes de la izquierda «moderada» como el propio Lula, ministros más radicalmente «de izquierdas» (calificativo que a Lula no le gusta que le apliquen) y también ministros de derechas. Esta variedad de tendencias ha conducido a la parálisis en áreas como la de la reforma agraria, a causa de la oposición entre el ministro de agricultura, de tendencia derechista y el ministro de la reforma agraria, próximo a las posiciones del Movimiento de los Sin Tierra (MST). También se ha manifestado una clara contraposición de posturas entre el ministerio de agricultura y el de medio ambiente (cuya titular es una mujer nacida en una *favela*) en el tema de las semillas transgénicas, pues el departamento medioambiental es contrario a su autorización y favorable el responsable de agricultura. Esta diversidad paralizante se pone de manifiesto también en el interior de algunos ministerios en los que determinados puestos clave están ocupados por personas que defienden posturas claramente contrapuestas a las de los respectivos ministros.

Donde el gobierno sí habla con una sola voz es en la política económico-financiera. Esa área está al mando del ministro de hacienda, Palocci, un ex-

trotskista, compañero de fatigas de Lula durante muchos años, que está aplicando unas recetas que, como veremos, son de lo más «ortodoxo».

Esa política económica, primero, y el proyecto de reforma de las pensiones, después, han generado una fuerte oposición interna (aunque minoritaria) en el seno del PT. Como ya se ha señalado, 11 diputados «petistas» negaron su apoyo al proyecto gubernamental (8 se abstuvieron y 3 votaron en contra, lo que probablemente conllevará a la expulsión del partido de estos últimos). Se han redactado manifiestos y se han recogido firmas en favor de los disidentes. La respuesta de la dirección ha sido organizar una campaña de afiliación masiva dirigida por el mismo publicitario que diseñó la estrategia y la imagen que llevaron a Lula al poder. El objetivo explícito de esta campaña es fortalecer el partido de cara a las municipales del próximo año. El propósito oculto, según algunos, es incorporar al partido a un gran número de personas de perfil ideológico moderado para arrinconar numéricamente a los sectores más «radicales» del PT (llamados peyorativamente «chiitas»).

Política económica: la lucha contra la inflación

El objetivo económico prioritario del gobierno Lula durante los primeros seis meses de su mandato ha sido la lucha contra la inflación. Ese hecho lo ha reconocido el propio presidente en su primera entrevista exclusiva, concedida a la revista *Veja*. En sus declaraciones, Lula señalaba que las expectativas de inflación en diciembre de 2002 eran del 40% y que actualmente están en el 7%.

La inflación es un asunto que reviste una enorme trascendencia para la opinión pública en Brasil debido a las recientes experiencias de hiperinflación. Tanto a finales de los ochenta como a mediados de los noventa se alcanzaron cotas superiores al 100% mensual. Una experiencia de hiperinflación de ese calibre resulta traumática para la población y deja una profunda huella (como ocurrió aquí en el caso de Alemania). Las compras diarias se convierten en un asunto de complicada estrategia monetaria para evitar que el dinero del salario o la pensión pierda completamente su valor. Y cualquier pequeña deuda puede llevar a una familia a la bancarrota, pues con tipos de interés del 100% mensual el primer mes la deuda se duplica, el segundo se cuadruplica, el tercero se multiplica por ocho y así sucesivamente. No es raro, pues, que el éxito en la contención de la inflación resulte ser un argumento siempre eficaz para justificar la política del gobierno (le valió la reelección a Fernando Henrique Cardoso) y que el fracaso en ese terreno sea la mejor arma para desacreditar cualquier proyecto gubernamental (Lula denuncia, en la entrevista mencionada, que algunos sectores empresariales promovieron una subida de precios al inicio de su mandato para azuzar la inflación).

El éxito en la contención de la inflación ha tenido, sin embargo, efectos secundarios muy negativos: la economía ha entrado en recesión y el paro ha aumentado durante estos seis meses. Quizá la consecuencia peor ha sido el aumento de la deuda debido a que la principal medida de política económica fue aumentar los tipos de interés ¡hasta un 26%! Como ya se vio, la mayor parte de la deuda está «indexada». Por tanto ese incremento de los tipos ha significado que Brasil ha tenido que pagar 90.000 millones de reales (unos 30.000 millones de dólares) en concepto de intereses de la deuda pública durante el primer semestre de este año. Esa factura ha anulado todos los esfuerzos economizadores del gasto público y ha generado un considerable déficit. La deuda pública ha pasado a tener una dimensión equivalente al 57% del PIB (lo cual no sería excesivamente exagerado si no fuera por los exorbitantes tipos de interés que se pagan por ella). En definitiva, quienes han tenido beneficios «record» durante los seis meses iniciales del primer gobierno de izquierdas de la historia de Brasil han sido, desgraciadamente, los bancos.

La primera consecuencia positiva de esa terapia de choque ha tenido lugar este mes de agosto en que el gobierno ha conseguido reducir los tipos de interés al 22% (en Brasil el Banco Central no es independiente). Esa bajada del 4% supondrá un notable ahorro futuro en los intereses de la deuda y puede suponer un primer paso para conseguir que esos intereses dejen de ser usurarios. Por otro lado, la «buena nota» en política económica dada a Brasil por «los mercados» y las instituciones internacionales mejorará la posición negociadora del gobierno de Lula frente al FMI cuando, en otoño, finalice la vigencia del actual acuerdo. De hecho, el Presidente ha declarado que Brasil está en condiciones de hacer frente a sus obligaciones incluso sin necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario. En cualquier caso algunas fuentes gubernamentales afirman que Brasil podría exigir que se excluyeran los gastos de determinados programas sociales (como «hambre cero» y el asentamiento de los «sin tierra») del cálculo del llamado superávit primario (ingresos públicos menos gasto público excluido el servicio de la deuda) a efectos de la supervisión de cuentas por parte del FMI.

En definitiva, Lula ha estado llevando a cabo una política económica muy «prudente». Otros la califican «de derechas» o como «continuista» de la de Fernando Henrique Cardoso. En cualquier caso, lo que resulta difícil de evaluar, en ésta como en otras ocasiones similares, es qué margen real de manobra tenía el gobierno para haber optado por un camino diferente. Hay que recordar en este sentido los amenazadores avisos que los «mercados internacionales» lanzaron ya durante la campaña electoral acerca del llamado «riesgo Brasil» y el terrible episodio de la crisis de Argentina (muy presente, como no podía ser menos, en la mente de los brasileños).

La reforma del sistema de pensiones

El primer gran proyecto legislativo que el gobierno Lula ha presentado al Parlamento ha sido la reforma del sistema de pensiones. Como ya se señaló más arriba, el proyecto fue aprobado en primera lectura por el Congreso con el apoyo de un buen número de diputados de la oposición y el rechazo de otro tanto de la coalición gubernamental (incluidos 11 del PT). El objetivo más aireado de este proyecto es el de acabar con los «privilegios» en materia de jubilación de los funcionarios públicos (paradójicamente una de las bases electorales y, sobre todo, militantes más importantes del PT). Una de las disposiciones más controvertidas y contestadas del proyecto es el establecimiento de un límite máximo para las pensiones de los funcionarios públicos de 2.400 reales. Si se quiere tener una pensión mayor se deberá contribuir a un fondo de pensiones.

A primera vista, en un país en el que el salario mínimo es de 240 reales y en el que muchas personas (por ejemplo las empleadas domésticas y buena parte de los maestros municipales) es eso efectivamente lo que ganan, una pensión diez veces superior parece un tope razonable. Sin embargo, por las razones que se señalaron al inicio de este artículo, 2.400 reales (800 dólares) pueden no resultar suficientes para un jubilado si tiene que pagar un seguro de salud (que son bastante caros) y comprar de su bolsillo las medicinas, si necesita mantener un coche para poder desplazarse, si ha de contratar a alguien para que lo cuide o si tiene personas a su cargo y si quiere vivir en un lugar seguro. Dada la situación de los servicios públicos en Brasil, muchas de las cosas que aquí son gratuitas para los jubilados o están subvencionadas, allí tienen que procurarse privadamente. Por tanto y, mientras las cosas no cambien, el establecimiento de ese tope y de las nuevas reglas de cálculo de las jubilaciones tendrá como consecuencia que los funcionarios se lancen a contratar planes de pensiones (que, en principio, serán públicos, pero eso es algo que no está definitivamente decidido).

Una de las cuestiones de fondo que plantea esta reforma es la de si los funcionarios públicos son unos privilegiados, como se dice, o si, en realidad, lo que ocurre es que los asalariados del sector privado están discriminados. En este caso, lo que habría que hacer es equiparar éstos a aquellos y no, como se ha hecho, endurecer las condiciones de jubilación de los funcionarios para asimilarlas a las del sector privado. Pues, según el proyecto, la edad de jubilación se postergará, el plazo de cotización aumentará y el cálculo de la pensión se endurecerá (ya no se hará en base al último salario). Y si bien es cierto que hasta ahora los funcionarios podían jubilarse con 57 años —lo cual resulta probablemente una carga muy grande para el erario público dado el aumento de la esperanza de vida—, las demás medidas constituyen pura y

simplemente un recorte de las pensiones. Y ante esa constatación uno puede hacerse la siguiente pregunta: con todos los problemas y desigualdades que tiene Brasil ¿era esa la reforma más urgente que había que acometer o debían haberse establecido otras prioridades?

La respuesta a la cuestión de por qué Lula decidió dar su primera batalla parlamentaria con una reforma de las pensiones de estas características puede encontrarse en la reacción de la derecha «bien pensante» tras el éxito del gobierno en la votación. La revista *Veja*, que durante la campaña electoral azuzaba el miedo contra el «riesgo Lula», saludó la votación como un gran triunfo político del gobierno. Lula había conseguido algo que ni siquiera Cardoso logró a pesar de sus empeños (recortar las pensiones de los funcionarios) y este logro mostraba que el rumbo que pensaba seguir el gobierno era el acertado: el Presidente y su equipo se convirtieron en «personas de confianza».

La reforma agraria

Mientras tanto, la reforma agraria se ha visto postergada. De las 60.000 familias que el PT anunció que iba a asentar este año, sólo recibirán tierras unas 10.000. El resto quedará para el próximo ejercicio, si hay suerte. Todo ello, obviamente, ha desencadenado la furia del MST que ha reiniciado su política de invasiones y ha convocado diversos actos de protesta para septiembre, en ocasiones junto con la CUT (Central Única de Trabajadores, sindicato próximo al propio PT).

A la postergación de la reforma agraria pendiente se suma la insuficiencia de la llevada a cabo hasta ahora por anteriores gobiernos. Los agricultores asentados se quejan de la inexistencia de infraestructuras educativas y sanitarias. También les falta acceso al crédito, a los productos y máquinas agrícolas y asistencia técnica adecuada. Un porcentaje no desdeñable de estos agricultores asentados venden sus tierras (lo que está prohibido) y emigran o vuelven a las periferias de las ciudades.

Quienes se oponen a la reforma agraria desde posturas «tecnocráticas» dicen que lo que ocurre es que el MST defiende una agricultura familiar «de subsistencia» que ya ha sido completamente superada y sustituida por el *agrobusiness*. El «agronegocio» no elimina las explotaciones familiares pero éstas tienen que integrarse en la cadena productiva, criando por ejemplo, pollos de forma intensiva para una agroindustria como la Sadia o cultivando soja transgénica de la Monsanto para venderla a una fábrica de derivados. A este respecto, es cierto que Brasil es muy diferente de la India que retrata

Vandana Shiva con su culto ancestral a las vacas que da cobijo a una auténtica economía rural autosostenible. Sin embargo la disyuntiva entre agricultura familiar de subsistencia y *agrobusiness* es una falsa dicotomía. Existen otras opciones, como la agricultura orgánica (que tiene ya un buen mercado), o las cooperativas desarrolladas por el MST en sus asentamientos del sur del país. El reparto de tierras improductivas no es ningún error fruto de planteamientos trasnochados. Lo que sí parece cierto es que limitándose a entregar tierras no se soluciona del todo el problema.

La integración Latinoamericana

En lo que hace referencia al proceso de integración regional, se dibujan en el horizonte dos proyectos de carácter bastante diferente. Uno es el ALCA (Área de Libre Comercio de las Américas), el otro, el MERCOSUR. El ALCA es un tratado de libre comercio, que ya está en vigor entre USA, México y Canadá y que no prevé estructuras político-administrativas regionales de regulación. El tratado vigente en América del Norte contiene una cláusula que permite a las empresas denunciar a los gobiernos de los países miembros en caso de que adopten medidas políticas o legislativas que disminuyan sus expectativas de lucro. Se trata de la misma cláusula que preveía el AMI (Acuerdo Multilateral de Inversiones) y que causó un escándalo tal, especialmente en Francia, que el AMI tuvo que ser abandonado. En virtud de estas cláusulas tanto el gobierno canadiense como el mexicano han sido ya sancionados a pagar indemnizaciones por adoptar medidas de protección medioambiental. El órgano parajudicial que resuelve este tipo de denuncias está en Nueva York, lo cual es un símbolo suficientemente expresivo del papel absolutamente dominante que tiene Estados Unidos. La extensión del área de libre comercio a todo el continente americano significaría crear una gran mercado libre de trabas para los productos estadounidenses y suministrar abundantísima mano de obra barata para las empresas norteamericanas que instalen sus «maquiladoras» en el sur.

El MERCOSUR es un proyecto de integración regional similar al Mercado Común Europeo de los años cincuenta y que abarca a Argentina, Brasil, Uruguay y Paraguay. La devaluación del real brasileño primero y la crisis argentina, después, supusieron un parón del proceso de integración que, ahora, se encuentra estancado en fases muy iniciales. Este proyecto está bien visto por las multinacionales que operan en Brasil o Argentina, pues la integración les permitiría planificar su producción a escala regional (como de hecho ya han empezado a hacer las empresas automovilísticas como la Ford, la Fiat, la General Motors y la Volkswagen). Es un proyecto que también apoyan los sectores industriales brasileños y la agroindustria de ese país.

La postura de Lula en relación con el proceso de integración latinoamericana es ambigua. En junio, durante su visita a Estados Unidos, hizo una declaración conjunta con Bush comprometiéndose a impulsar el ALCA (que es un proyecto, obviamente, muy contestado por toda la izquierda latinoamericana). Sin embargo, durante el mes de agosto ha realizado una gira por países del MERCOSUR y del otro tratado regional, el Pacto Andino (integrado por Colombia, Perú, Venezuela, Bolivia y Ecuador y que está en estado comatoso) en lo que parece un intento de revitalizar y liderar el proceso de integración latinoamericano.

Uno de los escenarios más optimistas que se puede imaginar sería la formación de un eje Venezuela-Brasil-Argentina que sirviese de centro de gravedad al proceso de integración regional de América del Sur. Con el petróleo de Venezuela y los recursos industriales y agropecuarios de Brasil y Argentina se podría crear un bloque lo suficientemente fuerte y autónomo para servir de polo de atracción al resto de los países latinoamericanos. Y si ese bloque estuviera dirigido por gobiernos de izquierda podría tener la suficiente capacidad de maniobra como para oponerse a las presiones neoliberales y desarrollar políticas sociales. Puede parecer el cuento de la lechera, pero da la impresión de que en estos últimos tiempos Lula trabaja en esa dirección.

Conclusión: hay que esperar

Las realizaciones de los primeros seis meses del gobierno Lula resultan bastante decepcionantes desde una perspectiva de izquierdas. Algunos de los proyectos inmediatos tampoco resultan muy esperanzadores. Así el proyecto de reforma tributaria que se está empezando a discutir no se refiere a los impuestos directos, sino que es un intento de racionalización de los impuestos sobre la circulación de bienes y mercancías y sobre el valor añadido. La única medida que puede tener efectos redistributivos de la riqueza, según como se articule, es la inclusión de la progresividad en el impuesto sobre la herencia, que actualmente es sólo de un 3% sea cual sea su dimensión.

El objetivo a medio plazo de la política seguida hasta ahora es, en palabras del propio Lula, el de generar confianza en los inversores para que la economía se reactive y el estado pueda disponer de los recursos necesarios para los programas sociales y de infraestructuras («hambre cero», reforma agraria, recuperación de la red ferroviaria, políticas de vivienda y servicios en las periferias urbanas, mejora del transporte y la sanidad, etc.) Las intenciones parecen, pues, buenas y para Lula constituiría un estruendoso fracaso personal y político no conseguir poner en práctica esos planes de reforma. De todas maneras, el problema de este tipo de política es que la confianza de los

inversores es muy volátil y puede ser retirada de manera instantánea en cualquier momento, por lo que siempre penderá esa espada de Damocles sobre los proyectos de reforma social.

Quizá el ámbito en el que Lula dispondría de mayor margen de maniobra sería en el de la lucha contra la corrupción. Si lograra acabar con esa lacra, habría hecho más por Brasil que cualquier otro gobernante. En este sentido, el PT es un partido honesto, que no se ha visto envuelto en escándalos a pesar de tener responsabilidades de gobierno en numerosas ciudades y pueblos y en algunos estados. Sin embargo, de momento no parece haber ningún plan de choque contra la corrupción. Lula y sus ministros se limitan a dar ejemplo y han elaborado un código de ética que les prohíbe, por ejemplo, aceptar regalos de valor superior a los 100 reales (unos 30 euros), debiendo donarlos al patrimonio estatal o a campañas como la de «hambre cero».

Las personas que votaron a Lula no parecen estar mayoritariamente desencantadas, aunque se ha perdido el entusiasmo inicial que siguió a las elecciones. Los votantes del presidente «petista» consideran en su mayoría que seis meses es muy poco tiempo para poder abordar los enormes y complejos problemas de Brasil. Están dispuestos, por tanto, a darle más tiempo (aunque no mucho) para empezar a ver resultados palpables. Otras personas, como los miembros del MST son más intransigentes. Pero en su caso es difícil tener paciencia, porque el suyo es un problema de supervivencia. **J.A.E.**, 3 de septiembre de 2003.

CLEPTOCRACIA

El pasado 2 de julio se anunció que un magnate ruso, Román Abramóvich había comprado algo más de la mitad de las acciones de un club de fútbol británico, el Chelsea, desembolsando una suma de 85 millones de euros por ellas. Román Abramóvich es el 49 hombre más rico del mundo según la revista norteamericana Forbes, tiene una compañía de petróleo, es copropietario de la mayor empresa de aluminio de Rusia y posee el 20% de las acciones de la línea aérea rusa más importante: Aeroflot. Nació hace 36 años.

Cuando se leen este tipo de informaciones, surge inmediatamente la pregunta de dónde han surgido estas enormes fortunas en un país en el que hasta hace pocos años no se reconocía la propiedad capitalista. Una primera respuesta se encuentra en los procesos de privatización llevados a cabo en los años noventa bajo la presidencia de Boris Yeltsin. Los bienes públicos del antiguo estado

soviético, resultado del trabajo y esfuerzo de varias generaciones que pasaron enormes penurias, fueron traspasados a manos privadas a precios ridículos. De acuerdo con los datos contenidos en el libro de Rafael Poch-de-Feliu *La gran transición* (Crítica), la mayor fábrica de aluminio de Rusia fue vendida por 9 millones de dólares y una empresa de petróleo que exportaba crudo por valor de 3.200 millones de dólares anuales se «adjudicó» por la módica suma de 35'5 millones. Las privatizaciones fueron auténticos regalos hechos fundamentalmente a personas pertenecientes al círculo próximo del Presidente.

Sin embargo, aunque los precios de venta fueron ridículos en comparación con el valor real de lo que se vendía, también es cierto que nueve millones de dólares es una suma considerable y que por tanto hay que seguir preguntando e interrogarse acerca del origen del dinero de las personas que pudieron participar en el fabuloso negocio de la privatización rusa. Y la respuesta a esta segunda pregunta tiene una respuesta clara: esos capitales iniciales nacieron de la corrupción pura y simple, del robo descarado, o de la obtención de privilegios abusivos. Algunos ejemplos servirán para poner de manifiesto a qué se está haciendo referencia: el viceprimer ministro ruso, Aleksandr Zaverinja se apropió en 1994 de un crédito de 750 millones de dólares que hizo desaparecer a través de una empresa que él mismo había creado. El primer ayudante de Boris Yeltsin, Viktor Iliushin, recibió en 1995 créditos del banco Intermedbank al 10% de interés y colocó el dinero en ese mismo banco recibiendo a cambio un interés del 180%. Mijail Jodorkovski, un exalto cargo del partido comunista, compró una compañía petrolera directamente con fondos públicos procedentes del Ministerio de Finanzas. Y los ejemplos de casos similares podrían multiplicarse, con lo que se puede extraer la conclusión de que el proceso de privatización fue una especie de gran lotería organizada en beneficio de las personas más corruptas del régimen.

La fortuna de Abrámovich se gestó en ese mismo contexto. Poch-de-Feliu no hace mención de él, pero está claro que fue uno de los afortunados ganadores de la lotería. De dónde sacó el dinero para participar en el sorteo no está del todo claro. Lo que sí es cierto es que en 1992 fue investigado por la desaparición de un tren de carburante destinado al ejército ruso y que, en vista de esos antecedentes, Boris Yeltsin le nombró en 1995 director de la empresa petrolífera de la que ahora es propietario.

En el libro de Rafael Poch-de-Feliu, en el que se analizan de manera magistral los últimos años de la historia de Rusia, se califica al régimen de Yeltsin con el neologismo «Cleptocracia». Y el término está muy bien encontrado, pues si la aristocracia es el gobierno de «los mejores» y la democracia, el gobierno «del pueblo», el gobierno de unos «ladrones» no puede designarse sino como lo hace Poch-de-Feliu: como una cleptocracia. **J.A.E.**, *septiembre de 2003*.

Reflexiones sobre el lenguaje

MARÍA ROSA BORRÁS

Lewis Carroll [1] en las aventuras de Silvia y Bruno dice: «érase una vez una coincidencia que salió a pasear en compañía de un pequeño accidente; mientras paseaban, se encontraron con una explicación, una explicación muy vieja, tan vieja que estaba ya completamente encorvada y arrugada, de modo que se parecía más a una adivinanza...». Quizá esta cita sirva para situarnos en la necesidad de recuperar lo que sabemos, aunque muchas veces olvidamos cuando pretendemos entender el mundo presente. Probablemente sea más adecuado decir «tener presente» en lugar de «recuperar», puesto que propiamente se trata, a mi modo de ver, de orientar la reflexión sobre problemas contemporáneos con la ayuda de nociones e ideas elaboradas a lo largo del tiempo que nos permiten, al desarrollarlas y enriquecerlas sin proceder a destruir lo sabido, enjuiciar fenómenos nuevos. Olvidar lo sabido puede conducir a repetir a ciegas lo ya ocurrido.

En este sentido quisiera recordar el nihilismo de Gorgias [2] según el cual la palabra es ambivalente y presenta un carácter contradictorio que sólo conseguimos superar por un acto irracional, a saber: el engaño o la persuasión.

Este nihilismo hoy tiene vigencia como trasfondo que explica, a mi entender, fenómenos como la degeneración del lenguaje al convertirlo en medio para engañar y, sobre todo, para dominar. Es un nihilismo que niega todo horizonte de sentido a la existencia humana, a las sociedades y a la acción política; afirma la irracionalidad como substrato último de las relaciones humanas, de modo que la destrucción e incluso la autodestrucción se justifican como actos de libertad. Está claro que es el débil quien no puede ser libre, mientras que quien tiene la fuerza le impone las condiciones de existencia. Pero le impone también (que es lo que aquí nos interesa entender) las condiciones para pensar, apoderándose del lenguaje y de las reglas del razonar.

Por eso he empezado por referirme a Lewis Carroll, quien, como todos saben, en las aventuras de Alicia describió bastante bien cómo las palabras tienen dueño.

Estoy convencida de que el problema del lenguaje, especialmente de las formas de lenguaje degenerado que hoy se están generalizando en diferentes campos como el político y el cultural, tiene que ver directamente con concepciones y conceptos filosóficos. No intentaré entrar en esta cuestión. La nuestra es una época que siente indiferencia e incluso aversión por la filosofía y quizá, como Jacques Bouveresse [3] defiende, es una época que vuelve a necesitar reflexiones filosóficas. Pero, naturalmente, mis comentarios no entrarán en ese terreno, aunque sí confieso que se inspiran en el problema de cómo interpretar el lenguaje en la perspectiva de desarrollar la capacidad humana de ser libre en un mundo de racionalidad compartida. Y en este sentido, me parece que la degeneración del lenguaje es un fenómeno de dominio sobre las mentes que pretende anular, o neutralizar, la capacidad de pensar y razonar autónomamente.

I

El lenguaje tiene por principales funciones describir e interpretar la realidad (el mundo de nuestro entorno; lo que sabemos o suponemos acerca del mundo). Sirve para comunicar impresiones, pensamientos, sentimientos, estados de ánimo, etc. Pero, a su vez, es un medio que configura el fin, porque es parte inseparable del modo cómo conocemos. Impregna, por así decirlo, nuestra capacidad de percibir las cosas; nos orienta pero también nos condiciona. Es hoy de común conocimiento que no recibimos impresiones ni sensaciones de forma neutra ni pasiva; percibir es, en el aspecto más elemental, focalizar la atención e incluso configurar un esquema de elementos para entender cuanto nos rodea. Y ahí el lenguaje, el lenguaje heredado en primer término, nos proporciona un espacio acotado de significaciones.

Está claro, sin embargo, que la totalidad de las posibles descripciones no está dada. De modo que hechos y fenómenos están siempre abiertos a nuevas descripciones que amplían la capacidad humana de ser diferenciadamente en relación con las demás especies que, para mantener su existencia, se amoldan al medio. Una descripción no es nunca, pues, una copia; incluso el conocimiento científico secciona sus observaciones con toda la carga interpretativa de teorías previas. Para ello cuenta, además con lenguajes específicos, las denominadas jergas que propiamente encierran sus concepciones, sus mediatizaciones para avanzar en verdades que están siempre en revisión.

Esta característica de apertura del lenguaje al cambio, a la evolución, tanto en sus formas más generales como en las más elaboradas y específicas, lo convierte en algo vivo, de modo que la variabilidad de significado le es conatural. Por tanto, la tolerancia semántica tiene que ver con el hecho de que los significados de las palabras tienen límites bastante imprecisos. Y esa flexibilidad permite precisamente comunicar nuevos pensamientos o nuevas formas de ordenar la realidad. Es conocida la reacción de pensadores innovadores de distintos ámbitos ante las dificultades para expresarse por encontrarse con palabras encajadas en esquemas de significación predeterminados que no les sirven para transmitir nuevos enfoques, nuevos descubrimientos, inventos, o innovaciones radicales en el pensar. Y también es conocido, en un orden de cosas bastante más elemental, que la vida de las palabras, sus significados, la terminología, el vocabulario, de una lengua va ligada a los cambios materiales y culturales de los pueblos y de las sociedades. Es más, hay palabras que dejan de servir para la comprensión de las cosas cuando se usan de una manera excesivamente generalizada, cuando se abusa de ellas y se termina por agotar ese difuso límite conceptual que las diferencia de otras. Por ejemplo, el recurso excesivo a términos como «estructura», «superestructura», «dialéctica», en un pasado cercano, acabó por borrar cualquier posibilidad de entender el campo preciso de referencia. El fenómeno del desgaste de las palabras es harto conocido.

Hasta qué punto la capacidad de hablar, el lenguaje, constituye nuestro ser humano social en general y se especifica o concreta en nuestro ser cultural y social en diferenciados espacios lingüísticos, las lenguas, es algo que ha sido estudiado por muchos autores durante el siglo XX. Éste ha sido un siglo en el cual la investigación y reflexión sobre la esencia del habla ha conseguido enormes avances. De entre tantos estudios nos conviene aquí destacar lo que sabemos ya acerca de las conductas discursivas que permiten una explotación del poder del lenguaje para fines del ejercicio del poder social en diferentes campos. Los «dueños del lenguaje» son temibles. Claude Hagège [4], en su excelente obra *L'homme de paroles* dice: «En este último cuarto de siglo, la especie humana está sumergida en un gigantesco océano de palabras y de frases». Son muchas las innovaciones técnicas y científicas que han generado un medio social en el cual el lenguaje es cada vez más el nexo fundamental para el despliegue de la libertad, en su dimensión de creación (¡y de destrucción!).

Es, pues, la elasticidad del lenguaje lo que da lugar a tan diversos ángulos de comprensión y dominio de las cosas; las diferentes jergas o maneras de decir transparentan y potencian diferentes maneras de ser en el mundo, y de entenderlo; el lenguaje configura nuestra representación mental y mediatiza nuestras intenciones. Siendo como es el lenguaje un importante medio de sociali-

zación, no siempre nos permite ser conscientes de su función como enmascaramiento de la defensa de intereses de dominio material y espiritual en las relaciones humanas.

Por supuesto, aquí sólo podemos apuntar esquemáticamente hacia la importancia de ser conscientes de cuantas cosas hay en juego cuando nos encontramos con un proceso de desnaturalización del significado de las palabras: imbuir nuestras mentes de criterios y principios ajenos a nuestros intereses.

Si las principales funciones del lenguaje son describir e informar, en la relación de comunicación y entendimiento entre los hombres, también es una de sus funciones «dar órdenes», como expresión de intenciones para influir y para consolidar un poder social. Además una serie de obstáculos alteran las principales funciones del lenguaje e incluso lo conducen al fracaso, como muy bien señala José Antonio Marina [5]. La confusión, las reservas, la mentira, etc. desvirtúan esa comunidad de sentido; la incapacidad para hacerse comprender, el engaño y el silencio impiden o entorpecen el conocimiento real de las cosas. Aunque es una desviación que con frecuencia sirve para apoderarse de la mente de la gente, para reducirla a ser mero espectador, mero consumidor de ideas ajenas, en una forma de existencia subordinada.

II

Las anteriores consideraciones generales pretenden situar el actual proceso de incorporación al lenguaje de usos terminológicos y formas de razonamiento aparente que pretenden imponer un discurso cerrado, muy ideológico, de los actuales tiranos del mundo. Recurren al poder de las palabras. Conocen perfectamente la influencia del lenguaje en el pensamiento, cuestión tan bien estudiada ya en 1923 por C.K. Ogden e I. A. Richards en *The Meaning of Meaning* [6].

Ese fenómeno de alteración y transformación interesada del lenguaje presenta un primer aspecto bastante elemental. Se trata de la difusión de palabras cuyo significado propio o principal es violentado abusando de la natural polisemia de las palabras. Este proceso puede calificarse de degeneración del lenguaje porque convierte el engaño en lo fundamental de la palabra. Precisamente en el momento en que se afirma que la nuestra es una sociedad de la información y del conocimiento, por los avances técnicos en su procesamiento y transmisión, aparece un núcleo duro de ideólogos, al servicio del principal poder económico y político, que actúa de forma saprofítica al respecto, es decir, que genera un conjunto de recursos discursivos tendentes a sustraer la

libre información y el libre conocimiento de los bienes accesibles a la mayoría de la sociedad. Es una acción cultural, sobre todo, orientada a obstaculizar que el lenguaje común sea medio de ampliación de conocimiento y/o interpretación de la realidad social. Aparece en ese discurso de manera predominante un lenguaje para engañar, para fingir, para manipular, para dominar.

Un primer recurso en la argumentación, que cabe entender como simple método para negar el derecho a hablar, consiste en mezclar inadecuadamente diferentes aspectos de un problema y a continuación calificarlo de complejo, sólo comprensible para expertos. Efectivamente, «no a la guerra» es un eslogan simple, sencillo que no admite la «complejidad» de entender por paz lo que se consigue mediante la guerra, supuesto este último que da por concebible una guerra humanitaria, preventiva, pacificadora, etc. En cambio, decir no a la guerra significa negarse a ser tan ingenuo como para admitir contradicciones tan escandalosas y además significa denunciar quiénes son los verdaderos responsables de la guerra. Esa misma aparente complejidad la introducen en sus razonamientos y análisis los expertos de la empresa Monsanto para defender los «beneficios» generales de sus productos genéticamente modificados. Y además, echan mano del razonar según los intereses defender una cosa u otra. Así lo explica Vandana Shiva [7] al decir: «Cuando las marcas reclaman derechos de propiedad sobre las semillas y las plantas cultivadas, califican los organismos genéticamente modificados (OGM) de ‘originales’. En cambio, cuando estas mismas marcas pretenden negar los riesgos inherentes a los OGM y evitar todo tipo de prueba sobre seguridad, así como los estudios sobre sus posibles peligros, declaran que los organismos transgénicos son ‘prácticamente’ equivalentes a sus homólogos que existen en la naturaleza en estado espontáneo. Pero un organismo dado no puede ser a la vez ‘original’ y ‘no original’. Esta contradicción esquizofrénica en la terminología es una cómoda estrategia para reivindicar a la vez derechos absolutos y una absoluta irresponsabilidad. Por medio de la OMC esa esquizofrenia profunda está a punto de extenderse, a partir de los EE UU, a todo el mundo».

Esa práctica de fragmentar el pensamiento y de articular conjuntos cerrados de validez es, en definitiva, lo esencial de lo que aquí llamamos degeneración del lenguaje, porque lo convierte en barrera de separación en lugar de medio de interrelación, y lo usa para inducir la subordinación en el pensar.

Así podemos interpretar la función que ejercen toda una serie de descalificativos, de carga peyorativa que se acuña como tópico que se lanza en forma de dardo: ingenuo, simplista, dogmático, extremista, radical,

fundamentalista, antiamericano, etc., sin la menor vergüenza ni asomo de recato por el propio fanatismo. Se induce a creer que algunos términos contrarios son los verdaderamente positivos: cauto, complejo, pragmático, moderado, sensato, centrista, realista, proamericano, etc. Naturalmente todo depende del contexto, pero ahí hay un estilo que se ha generalizado y que prefiere descalificar a razonar. Además, es un estilo que difunde prejuicios o «ídolos de la tribu» a fin de bloquear la capacidad de pensar. A ello se añade el empobrecimiento del lenguaje en base a vaciar las palabras de significación específica. Se puede entonces reducir y simplificar fenómenos históricos diversos e incluso a veces contrapuestos con el recurso a un solo término abstracto, en el sentido de vaciado de contenido real: «totalitarismo», «los violentos», «estados canallas».

De ahí que un primer grado del uso del lenguaje para destruir conceptos, vínculos sociales y comunidad de sentido tenga que ver con el simple descalificativo: demagógicos, radicales, doctrinarios, anticuados. Se atribuyen siempre a «los otros», sin matizaciones ni la menor autorreferencia por el modo de proceder. Son términos peyorativos que no se entienden sin tener en cuenta el contexto y la intención del conjunto del discurso que las más de las veces merece los mismos calificativos. Porque según sea el contexto será virtud o defecto ser pragmático, ser radical o moderado, como puede ser defecto o virtud poseer doctrina (o defender principios o criterios morales). Es un procedimiento para postular la superioridad propia; esa superioridad que implica autodefinirse como «mundo libre».

Es necesario esforzarse por descubrir lo que hay debajo del actual proceso de alteración sistemática de los significados de ciertas palabras, del recurso a obvios déficits en el razonamiento y de la paulatina difusión de elementos corrosivos de la cultura democrática. Detrás de las palabras, detrás del lenguaje hay casi siempre intenciones y, en un grado más coherente y de mayor alcance, finalidades. Es ese sustrato el que es imprescindible descubrir.

III

A mi modo de ver, todo este proceso de involución del lenguaje puede entenderse mejor si consideramos tres modelos para explicarlo: 1) la función social del lenguaje fascista, por denominarlo según el título de una obra de Lutz Winckler [8]; 2) el lenguaje propio de la propaganda comercial, y 3) el lenguaje propio del ámbito militar.

En estos tres modelos podemos advertir algo común: reducir los ciudadanos a espectadores, a meros consumidores de ideas, productos o procesos,

sin que tengan capacidad alguna de intervenir o participar, o con una notable reducción de esa capacidad. Son lenguajes que despersonalizan en diferentes campos de actuación (en los campos político, mercantil y militar) en los cuales es fundamental conseguir actitudes de subordinación y de control del pensamiento. Se trata de provocar la adhesión sin reflexión. Aunque hay que reconocer que las técnicas de dirección de las mentes han «progresado» mucho, me parece que estos tres modelos recogen lo esencial del problema.

En realidad, el recurso de decir lo contrario de lo que se pretende es muy viejo. «Paz sin victoria» era el lema electoral antibelicista de Woodrow Wilson, elegido presidente de EE UU en 1916, cuando realmente quería la guerra. Wilson organizó la primera gran empresa estatal de propaganda: el Comité sobre la Información Pública (llamado Comité Creel, por el nombre de su primer director). Información más detallada y valorada la da Noam Chomsky [9] en una conferencia de 1997, donde señala que precisamente desde que ha adquirido tanta preponderancia la propaganda parece haber devenido una palabra «tabú».

Fue el fascismo alemán el que desarrolló la mentira sistemática para ocultar las reales intenciones y para generalizar un contramundo ficticio. Como dice Lutz Winckler: «El lenguaje de Hitler está en gran medida construido sobre el modelo de la lógica instrumental. Se emparenta así con el que Horkheimer y Adorno descubrieron como lenguaje de la información comercializada y de los anuncios. Sin embargo, a diferencia de éste, no domina al hombre en la mediata esfera del consumo, sino en la inmediata de la orden», (página 50 de *La función social del fascismo*).

Es decir, cuando se examina la operación ideológica del fascismo y concretamente sus formas discursivas, se identifican una serie de rasgos estilísticos y de usos terminológicos orientados a la manipulación de las consciencias y a la intoxicación de la opinión pública. Destacan claramente el recurso al lenguaje «congelado», a las meras fórmulas repetitivas, a la expresión que destruye la frase para imponer la consigna. En este estilo, se recurre a la serie de interrogantes retóricos que preparan la respuesta estereotipada. Es un lenguaje agresivo, provocador, de aparente denuncia que insiste en la «natural» desigualdad humana y ensalza el espíritu elitista del guerrero. No podemos aquí entrar en más detalles de esa operación de envenenamiento de los espíritus mediante grandes palabras siempre referidas a la raíz irracional del ser humano. Son muchos los estudios sobre el lenguaje nazi y fascista. Aquí sólo nos interesa subrayar que la confusión y la desinformación cristalizaron en un tipo de discurso apto para conseguir una regresión de la conciencia democrática.

Este fenómeno (la condensación de alteraciones del lenguaje en un discurso) consiste en la independización de un medio, el lenguaje, de su finalidad, la comunicación. Y esa independización se obtiene mediante la separación de las palabras y del razonamiento de su habitual contexto y trasfondo. Se crea así un nuevo contexto y se oculta el nuevo trasfondo: el lenguaje sirve en un contexto de relación de dominio total a fin de facilitar e impulsar la adhesión ciega a la concepción fascista del mundo. Se ataca la política y la democracia, y se oculta la intención de índole política de regir las relaciones mediante la dictadura. Es, pues, un modo eficaz de despojar a los hombres de sus derechos incluso en el terreno ideal, en el terreno de la formulación de ideas. En ese uso de la fuerza del lenguaje para influir en las mentes, cabe situar la perversión sintáctica como recurso. La utilización de «por consiguiente», sin que haya relación alguna de consecuencia en lo que luego se dice, o «tanto más cuanto», sin nexos reales con lo que se dice después. Este tipo de frases era habitual en los discursos de Hitler. Con frecuencia afirmaba que «tanto más cuanto» los judíos son enemigos del pueblo alemán, es necesario destruirlos.

Lo mismo ocurre, en un aspecto muy diferente de las relaciones humanas, en el lenguaje publicitario. Es también una separación del lenguaje ordinario para alterar significados y crear asociaciones de ideas y suscitar deseos determinados. Es un uso del lenguaje ordinario que se separa configurando un universo cerrado de intenciones al servicio de la principal finalidad: vender productos y servicios. El lenguaje publicitario autonomiza expresiones y recurre a todos los medios comunicativos posibles para transmitir un solo mensaje: la bondad (y necesidad) del consumo. Así, pues, se funda, como el lenguaje político del fascismo, en la falsedad de fondo del mundo que presenta. Aparenta transmitir información, pero en realidad sólo apunta a una orden: compre, contrate un servicio, contraiga deudas. Para seducir, presenta escenas de felicidad o de desgracia, que se resuelven en la ficción. Para ser hay que consumir. De algún modo, el mundo conceptual de la propaganda comercial invierte la relación entre hombre y objeto, de modo que es el objeto el que domina al hombre. La mentira, el engaño, la simulación, la exageración y la seducción son normales en el lenguaje comercial. Lo sabemos todos, pero es un lenguaje eficaz (las ventas aumentan). No se trata de que sus afirmaciones sean falsas. Informan efectivamente de cualidades de los productos o servicios promocionados. De lo que se trata es de que su función, como lenguaje propagandístico, excluye toda referencia real que no favorezca exclusivamente su fin comercial.

El problema es, pues, la clausura de un lenguaje de estereotipos y vaciedades. El lenguaje publicitario crea una realidad ficticia, un mundo de potencia y fuerza, de salud y bienestar, de libertad y felicidad que sólo depende

de la capacidad de compra. Fomenta la diferenciación (yo puedo comprar-me lo que otro no puede); fomenta la competitividad (mi consumo me identifica como ser selecto); fomenta el gran engaño de la sociedad de consumo: ser equivale a tener, a poseer, a viajar, a agitarse, a mostrarse. En el fondo, la publicidad comercial fomenta la homogeneidad en las preferencias y en el modo de vida; en cambio, impone la desigualdad como base para «sentirse» libre. Sin desigualdad social no cabe entender la mayoría de ofertas de productos y servicios de lujo. Pero el conjunto de ofertas comerciales, el conjunto de la propaganda comercial y de la publicidad en todas sus formas presupone y afianza una sociedad aculturalizada, una sociedad fragmentada y, sobre todo, despersonalizada. El abuso de estereotipos, la presentación del éxito singular y el encanto, a través del consumo, niega sistemáticamente la realidad del mundo social. Es un mundo de apariencias que crea un discurso cerrado, un discurso de mensajes repetitivos con el nombre de las marcas o empresas promocionadas, o con la «seguridad» y «garantías» de los servicios promocionados. Naturalmente insiste en tópicos: la juventud, la abundancia, la rapidez, la competitividad, la facilidad, la banalidad, etcétera.

Y finalmente una breve referencia al lenguaje militar. Un lenguaje de órdenes, propio de un sistema jerárquico, de línea de mando, en el que se exige la adhesión incondicional y la dimisión del pensar propio, pues es un sistema que distribuye generosamente la irresponsabilidad compartida por la violencia como función del sistema del que se forma parte: evita tener que decidir por sí mismo. La organización militar es una organización al servicio de una sola finalidad: la eficacia en la agresión (aunque se suele hoy denominar «defensa» lo que antes se llamaba «guerra»). En este ámbito, todo adquiere el carácter de estrategia (de mero cálculo). Los hombres son meros ejecutores de un plan previo. La especialización en tareas responde a la eficacia en la acción. En el ámbito militar, se cumplen (o se transmiten) órdenes. Es, pues, un lenguaje reductor que crea también, como en los anteriores casos, un discurso separado del lenguaje ordinario, al servicio de un mundo imaginario en el cual sólo la fuerza, la astucia, la táctica, tienen razón, pues consiguen los objetivos que articulan una estrategia guerrera. Aunque, a diferencia de los casos anteriores, no es un lenguaje orientado a condicionar las mentes mediante el engaño, sino a imponer sin más el pensamiento ajeno en la acción. De ahí que los términos más significativos de ese discurso sean fuerza, potencial, eficacia, objetivo destruido o alcanzado, enemigo, frontera, escenario de batalla, secreto, traición, ataque, destrucción, disciplina, reglamento, etcétera.

IV

Naturalmente no pretendo en unas pocas páginas ir más allá de indicar referentes acerca de un proceso actual de cambios en el lenguaje ordinario que ponen de manifiesto una generalización de un discurso cerrado, de un discurso de la tiranía. Rafael Argullol, en *La Vanguardia* recientemente se refería a la «bruma semántica» en expresiones como «guerra limpia», «catástrofe humanitaria» o «fuego amigo» y consideraba que el secuestro de las palabras nos desarma desde el punto de vista de la conciencia. Y en un artículo anterior, el 9 de marzo de 2003 en *El País* decía: «Si en la primera guerra del Golfo descubrimos, si bien con cuentagotas, las mentiras *a posteriori*, en la actual crisis bélica las oleadas de mentiras *a priori* inundan el paisaje sin que sea posible establecer sólidos diques frente a ellas. Un poder *total* no debe preocuparse por camuflar la falsedad porque un poder de este tipo mira al mundo desde el sitio de la verdad».

A mi modo de ver, éste es un aspecto propio de la desposesión y destrucción en el campo cultural. En ese proceso se incorporan recursos ordinarios del lenguaje común para construir fronteras sociales desde la cultura que oculten la realidad del poder económico y político. Es en este contexto en el que cabe situar buena parte de mecanismos de manipulación en los medios de comunicación. A este respecto, me parecen interesantes buena parte de las recomendaciones de Michel Collon [10] para identificar las estratagemas de la manipulación. Aunque el problema hoy va ya más allá. Es un problema que afecta al propio lenguaje al generalizar denominaciones engañosas. Son denominaciones que incrustan en las palabras y en el razonamiento un sesgo interesado en la forma de conceptuar las cosas. Y esto significa impedir, desde el lenguaje, el conocimiento de la realidad social y política contemporánea. Significa alterar la mente del ser dominado y explotado, como si se estuviera alterando genéticamente su crecimiento intelectual y moral. Significa, en definitiva, someterle mentalmente.

Por eso se puede hablar de degeneración del lenguaje. Porque el lenguaje deja de ser medio para un pensamiento más o menos libre, más o menos autónomo, y se convierte en frontera social, en una falsificación de la realidad. El lenguaje pone orden en nuestras percepciones y sensaciones; configura el pensar. De ahí que en la Grecia clásica *logos* signifique el orden del razonar que se da en forma de palabra comprensible. El lenguaje puede crear sentido y destruirlo; puede parcializar y generalizar. Es decir, puede contribuir a la vida y a la muerte de la cultura. Por ello es importante no perder la capacidad de reflexión y negarse a admitir expresiones vacías, acríticas o incluso políticamente orientadas a dominarnos.

Algunos ejemplos tomados de la prensa reciente

(Prescindo del entrecomillado por comodidad; ya se entiende que esta lista lo es de expresiones inaceptables)

Catástrofe humanitaria. Construcción absurda. Para distinguirla de las naturales, se debe decir humana.

Persona humana. Sin comentarios.

Impacto y pavor. Recuerda literalmente un eslogan nazi en su campaña de aterrorizar las poblaciones con el poderío militar.

Ataques quirúrgicos. Sugiere la existencia previa de una enfermedad que justifica un ataque militar.

Ejércitos humanitarios. Sólo puede calificarse de humanitaria una acción destinada a ayudar a víctimas de las que no haya sido uno mismo el verdugo.

Injerencia humanitaria. Pretende justificar lo injustificable política y moralmente.

Bombas limpias; bombas sucias. Las bombas deben definirse en función del material que las componen y de su potencia destructiva y no con términos de otro orden discursivo.

Bombas inteligentes. Será automáticas o programadas según un plan previo sobre formas de destrucción de objetivos militares.

Daños colaterales. Consecuencias destructivas o negativas, en principio indirectas de una acción militar; en buena medida son previsibles en términos generales, aunque no en su determinación concreta. Es una expresión que pretende eludir la responsabilidad por la propia acción.

Estados canallas. Clasificación arbitraria tendente a ocultar la ilegitimidad de la injerencia en países a los que se somete.

Armas de destrucción masiva. Armas especialmente concebidas para destruir la vida animal o vegetal en función de sus componentes que suelen ser un gas o un material de destrucción genética. Pero la destrucción «masiva» se alcanza también con otro tipo de artefactos y bombas de gran potencial destructivo.

Terrorismo. Denominación reservada a acciones de destrucción que no sean las del propio ejército o sistemas de represión.

En general, las anteriores denominaciones, como tantas otras aquí no recogidas, apelan a la fascinación que habitualmente se experimenta por los artefactos; tienden, esas denominaciones, a disminuir u ocultar la percepción de la real capacidad de destrucción y de causar la muerte de tales artefactos o de

ciertas operaciones de brutal aniquilación, como son los bombardeos de miles de bombas de gran potencia destructiva.

En realidad esta lista resulta interminable. Hasta tal punto estamos en un proceso de alteración terminológica. Habría que incorporar las múltiples formas insidiosas de denominar del campo económico que, desde hace mucho tiempo, han penetrado en el lenguaje común: capital humano, costes de una acción, credibilidad (por confianza), liberalizar (por asegurarse un trato preferencial sin trabas sociales ni políticas para los negocios), desregular (por imposición de reglas beneficiosas a la expansión sin contrapartidas de la explotación), flexibilidad (por rigidez en las formas de contratación), laboratorio de ideas (por centros de producción de ideología), clasificación de documentos (por sustracción al conocimiento público y al control eficaz democrático de documentos que amparan acciones inconfesables o ilegales). En fin, el tema tiene muchas ramificaciones y aspectos, sobre los que convendría reflexionar y proyectar luz periódicamente.

Conclusión

El tema central de estas reflexiones es llamar la atención acerca del contexto y trasfondo del lenguaje. Wittgenstein estudió a fondo los paradigmas de los usos de las palabras, así como de las acciones voluntarias e intencionales. Y de su estudio sobresale, en lo que aquí nos interesa, que «...el significado de una expresión está caracterizado por el uso que hacemos de ella. El significado no es un acompañamiento mental de la expresión» [11].

Es decir, lo que importa es el uso de las palabras, y por ello estamos ante un problema que no tiene que ver con la mera evolución del lenguaje natural, ni con un proceso de creación e intensificación conceptual, sino que tiene que ver con la extensión de una tiranía política, que defiende intereses económicos definidos, al campo del pensamiento. Es mucho lo que nos jugamos en este campo. Si el lenguaje, según Wittgenstein, es como un juego que responde a unas reglas, conviene no permitir que quienes juegan con las cartas marcadas acaben por invertir las reglas del juego.

Bibliografía

1. LEWIS CARROLL, *Logique sans peine*, Hermann, París, 1966, pág. 21.
2. Cf. fragmentos de los presocráticos en cualquier edición. En castellano: KIRK, G. - RAVEN, J. E., *Los filósofos presocráticos*, Gredos, Madrid, 1970. O bien, EGGERS LAN, C.- JULIÁ, V. E. *Los filósofos presocráticos*, Gredos, Madrid, 1979-1981.

3. Jacques BOUVERESSE, *La demanda de filosofía*. Universidad Nacional de Colombia, 2001.
4. Claude HAGÈGE, *L'homme de paroles*, Fayard, París, 1985, pág. 8.
5. José Antonio MARINA, *La selva del lenguaje*, Anagrama, Barcelona, 1998.
6. C.K. OGDEN and I.A. RICHARDS, *The meaning of meaning* (A study of the influence of language upon thought and of the science of symbolism), Routledge and Kegan Paul, Londres, 1972 (La primera edición es de 1923).
7. Vandana SHIVA, *Le terrorisme alimentaire*, Fayard, París, 2001, pág. 168.
8. Lutz WINCKLER, *La función social del lenguaje fascista*, Ariel, Barcelona, 1979.
9. Noam CHOMSKY, *Lo que hace que sean convencionales los medios no convencionales*, Conferencia en Z Media Institute, junio de 1997, Contrastant.net.
10. Michel COLLON, *Cómo defenderse de las manipulaciones*, Contrastant.net.
11. Ludwig WITTGENSTEIN, *Los cuadernos azul y marrón*, Tecnos., Madrid, 1998, pág. 99.

Abril de 2003

Las razones del movimiento «Nunca Más»¹

CARLOS AMOEDO SOUTO

*Os bos e xenerosos
a nosa voz entenden
e con arroubo atenden
o noso rouco son*

*Mais só os ignorantes
E fêridos e duros
Imbéciles e escuros
No nos entenden, non.*

EDUARDO PONDAL
Himno gallego (fragmento)

*A todos los buenos y generosos que ayudaron a
limpiar chapapote.*

Desde el 13 de noviembre de 2002, los gallegos sabemos algo más de ingeniería naval de lo que ya sabíamos por nuestra tradicional condición de pueblo marino. También sabemos algo más de náutica; de la real, que sirve para navegar en el mar, y de la política, que sirve para llevar a buenos o malos puertos a las sociedades en medio de las sordas tempestades que nos asolan por doquier. Porque a las 14:15 del 13 de noviembre de 2002, en el momento en que el capitán del Prestige, Apostolos Mangouras, enviaba un

1. Versiones previas de este artículo han sido sustancialmente mejoradas gracias a las informaciones y opiniones de Carlos Aymerich Cano, Xosé Manuel y Paulo Carril Vázquez. Agradezco sinceramente a todos su colaboración desinteresada.

SOS al centro de control marítimo de Fisterra, dos buques, uno real y otro metafórico, comenzaban a *errar* en medio del intenso temporal de noroeste que azotaba aquel día las costas de Galicia.

El buque real era, obviamente, el Prestige; un buque monocasco construido en 1976 cuyo hundimiento se consumó el día 19 de noviembre —entre todos lo mataron y él solo se murió— a unas 113 millas de las Islas Cíes con una carga en su interior de 77.000 toneladas de fuel-oil pesado.

El otro buque, el metafórico, era toda una concepción del poder político-administrativo: una mezcla de neoliberalismo, neocentralismo y conservadurismo autoritario que ha impulsado la acción de gobierno del Partido Popular en Galicia hasta el punto de darle la consistencia de un *Titanic* político; un partido aparentemente indestructible, que logra cuatro mayorías absolutas consecutivas en el Parlamento gallego desde el *desembarco* de Fraga (1989, 1993, 1997, 2001), que domina desde tiempo inmemorial las cuatro diputaciones gallegas y que logra dominar también en el ámbito municipal... pero que, sin embargo, parece estar al límite de su capacidad de navegación, en riesgo de zozobra permanente, de atiborrada que va la nave de intereses, desgastada su estructura, y viejo el lobo de mar que lo tripula.

La crisis del Prestige fue un auténtico *iceberg* político para este buque metafórico. La virulencia del choque fue intensa; la pericia del capitán del buque en evitarla, nula; la prepotencia en la evaluación de los daños y su remedio, absoluta. Los acontecimientos demostraron que la parte sumergida del iceberg, mucho mayor que la parte visible en superficie, podía hacerlo zozobrar. Sin embargo, las bombas de achique funcionaron óptimamente: «*El barco está a flote, querido amigo, pero hay que aprender la lección*», diagnosticaba Fraga la noche del 25 de mayo, una vez celebradas las elecciones municipales. Con todo, aunque aparentemente la estructura del barco habría resistido el impacto, la *fatiga* —no siempre visible— de sus materiales augura a nuestro juicio un *colapso* estructural a corto o medio plazo.

Los elementos necesarios para explicar la catástrofe del Prestige, la movilización social que ha provocado y sus consecuencias son muchos, variados y complejos. Los últimos meses han sido pródigos en opiniones y análisis al respecto. En este artículo, sin embargo, nos centraremos en un aspecto concreto: el movimiento «*Nunca Más*», la experiencia cívica más importante de los últimos años en Galicia.

Como cualquier otro fenómeno de expresión y organización social, el movimiento Nunca Más (en adelante, NM) no puede ser valorado correctamente sin el análisis de diversos factores y la utilización de múltiples lecturas, todas

ellas igualmente necesarias. Por decirlo sintéticamente, NM es una *reacción*; una reacción ante una catástrofe, ecológica y económica, fabricada por acción u omisión de los responsables político-administrativos y que, por tanto, pudo ser evitada. Una reacción cívica, organizada desde la propia ciudadanía afectada en una plataforma, que alcanza el tamaño de una movilización de masas.

Comenzaremos nuestro análisis describiendo qué es, cómo ha nacido NM. Los puntos segundo y tercero serán dedicados a comprender las razones de NM. El cuarto punto aborda los efectos políticos de la actividad de la plataforma, mientras que el punto quinto esboza algunas ideas sobre el futuro de NM.

Nacimiento, composición y organización de Nunca Más

A nuestro juicio, el nacimiento de NM debe explicarse partiendo de la conjugación de *dos claves fundamentales de análisis*:

- La primera sitúa a NM dentro de la dinámica política gallega, entendida en el sentido anglosajón de *politics*, es decir, en el marco de las luchas de los distintos actores políticos (fundamentalmente los partidos) por consolidar y ampliar sus apoyos sociales de cara a ese momento crucial de las democracias representativas que son las elecciones.
- La segunda sitúa a NM en la tradición del movimiento ecologista como una reacción organizada y crítica de la ciudadanía afectada frente a la toma de decisiones político-administrativas y al diseño de las políticas públicas en materia de riesgos ambientales; es la dimensión de las políticas, de lo que la ciencia política y administrativa denomina *policys*.²

Que la comprensión más cabal de NM surja de la combinación de ambas lecturas, se debe a que *estos dos enfoques atienden a distintas causas del fenómeno NM*, siendo esa pluralidad de causas las que sitúan a esta plataforma ciudadana entre lo global y lo local, entre lo institucional y la acción directa, arrojando iluminaciones pertinentes sobre las posibilidades y límites de políticas localmente contextualizadas dentro de un sistema político oligárquico e institucionalizado.³

2. Cfr. Sobre la distinción Ives Meny y Jean-Claude Thoenig, *Las políticas públicas*, Ariel, Barcelona, 1992, pp. 14-17.

3. Se enlaza así con el importante debate que da título al número 86 de Mientras Tanto.

Comencemos, pues, por los datos más conocidos del nacimiento de NM. El nacimiento oficial de la plataforma tuvo lugar el 21 de noviembre de 2002, dos días después del hundimiento del Prestige y cuatro días después de que la primera marea negra inundase el litoral de la Costa da Morte el 17 de noviembre. El 25 de noviembre se constituye en Santiago la *Plataforma contra a Burla Negra*, un colectivo de gentes de la cultura que más tarde se integraría en Nunca Más, al compartir sus objetivos esenciales, aunque ha continuado trabajando con autonomía en el campo de la cultura. Más tarde se constituirían otros colectivos sectoriales, como *Area Negra*, colectivo de maestros de enseñanza primaria y secundaria.⁴

NM no nace ni como partido político ni como asociación ecologista, sino que comparte rasgos de ambos tipos de mecanismos de acción colectiva; en cierto sentido, también cabría afirmar que tiene algo de asociación de consumidores y usuarios: no de productos o servicios sino, como veremos, *de políticas públicas*. NM no nació para gestionar el masivo voluntariado que se allegó a las playas para limpiarlas, sino para alcanzar tres grandes objetivos, reflejados en su manifiesto fundacional: *exigencia de responsabilidades políticas, reparación de los daños causados y puesta en práctica de medidas efectivas de seguridad para el litoral gallego que impidan catástrofes similares*.⁵ En los puntos siguientes de este trabajo ahondaremos más en estas reivindicaciones.

Como organización, estamos ante una plataforma plural y abierta, que integra a todas las personas y colectivos que acepten estos objetivos reivindicativos y deseen trabajar voluntariamente en su consecución. Desde su creación no ha cesado la entrada de asociaciones de afectados (cofradías, asociaciones de mariscadores, percebeiros, minoristas, etc.), asociaciones ecologistas, culturales, vecinales y estudiantiles; también han entrado asociaciones de empresarios, sindicatos y partidos políticos.⁶ La lista de integrantes de NM es, a día de hoy, sencillamente impresionante, pues reúne a más de trescientas asociaciones de todo tipo, además de personas individuales.⁷ Su variedad es testi-

4. Vid. www.plataformanuncamais.org, www.burlanegra.org, www.areanegra.org, www.chapapote.org.

5. El manifiesto fundacional de NM puede verse en la página web de Nunca Más. Téngase en cuenta que para entrar en NM es necesario aceptar los postulados de ese manifiesto.

6. Cabe destacar la presencia de los sindicatos CIG (Converxencia Intersindical Galega), CUT (Central Unitaria de Traballadores), CGT Galicia, CNT Galicia, CC.OO y UGT (estos dos últimos entraron, tardíamente, en enero, y no tardaron nada en aparecer con sus propias pegatinas «nunca más»). Entre los partidos hay que señalar la integración del BNG, Esquerda Unida, Frente Popular Galega, Galiza Nova, Partido Comunista do Povo Galego, Partido Revolucionario dos Traballadores-Esquerda Revolucionaria. Del PsdeG-PSOE sólo se integraron las agrupaciones locales de Fene, Mondariz, Pontearreas, Muxia, y Xuventudes Socialistas de Galicia.

7. Puede consultarse en línea en la página www.plataformanuncamais.org/quensomos.php.

monio de algo muy importante: el *carácter difuso de los intereses afectados por la catástrofe del Prestige*. A diferencia de otros movimientos ciudadanos dirigidos contra la acción pública, más concretos en su foco de atención y, por tanto, más reducidos en cuanto a su alcance social —la crisis de las vacas locas, la colocación de antenas de telefonía, la fijación de trazados de carreteras, etc.—, las propias características ecocidas de la catástrofe ensancharon el abanico de personas y colectivos que se sintieron afectados, conjunta o parcialmente, en tres planos: en sus intereses económicos directos, en sus intereses difusos —los ambientales en primer lugar, pero no sólo— o, simplemente, en su *dignidad* como ciudadanos sujetos al poder político-administrativo.⁸

El funcionamiento de NM carece de una regulación plasmada en documentos estatutarios. Territorialmente se estructura en dos niveles, comarcal y nacional, siendo la organización en ambos idéntica: una asamblea o «plenario» y una gestora de naturaleza ejecutiva elegida por la asamblea. Aunque las decisiones sobre las movilizaciones se adoptan en plenarios —en función de su ámbito, nacional o comarcal⁹—, la ejecución de los acuerdos le corresponde al órgano de carácter ejecutivo, la gestora, suficientemente abierta, transparente y plural. Cualquier miembro puede plantear ideas y discutir las en la correspondiente asamblea comarcal o nacional, o ante la gestora, cuyas convocatorias se hacen boca a boca, oreja a oreja y por internet. El alto ritmo de movilización de los primeros meses mantuvo el funcionamiento de NM en un estado magmático, en el que nadie se paraba a discutir cuestiones organizativas internas, que no eran prioritarias para el propio movimiento que NM trataba de expresar: intentar regular con precisión los mecanismos de agregación de voluntades hubiese sido contraproducente en aquel momento, dada la propia pluralidad de intereses, sensibilidades y tradiciones políticas que NM alberga en su seno. A partir de enero, los órganos ejecutivos comenzaron a distinguir responsabilidades internas: un coordinador, un responsable de finanzas y un responsable de relaciones con los medios. Pese al mucho trabajo que supone NM, su organización posee un bajísimo grado de burocratización, es decir, el trabajo es en ella fundamentalmente voluntario. Cabe añadir en este sentido que el asamblearismo de los primeros meses sirvió para aglutinar de manera efectiva a gentes que propusiesen ideas y contribuyesen a la articulación de las movilizaciones.

8. Por el hecho de haber supuesto un entrenamiento para la defensa de la dignidad ciudadana frente a la imposición autoritaria de medidas por parte del poder político, el movimiento Nunca Más fue, a nuestro juicio, un caldo de cultivo idóneo para el éxito de las movilizaciones contra la guerra de Irak. Será difícil que vuelva a producirse un clima de contestación social tan reiterado y masivo como el producido durante los meses de diciembre de 2002 a marzo de 2003.

9. Hay que destacar también la constitución de asambleas de Nunca Más en Barcelona y Madrid y la presencia de grupos organizados en Andorra, Bruselas, Londres, París y Suiza.

Expuestos los aspectos más descriptivos del nacimiento y funcionamiento de NM, para este momento hemos dejado la respuesta a uno de los asuntos más polémicos de NM: su *filiación política*. Aceptando que la *madre* de NM es la propia ciudadanía afectada de una u otra manera por la catástrofe, es decir, todas las gentes anónimas que asumieron el contenido de la plataforma y aportaron su trabajo, esfuerzo e imaginación en la articulación de todo lo anterior, ¿cabe atribuirle la *paternidad* de la idea a alguien en concreto?

La respuesta es, a mi juicio, clara: el *impulso* para la creación de la plataforma NM partió de una reunión que tuvo lugar en la sede nacional del Bloque Nacionalista Galego en Santiago el día 19 de noviembre, el mismo día que el Prestige se hundía en el Atlántico.

En aquella reunión, distintas personas pertenecientes a los movimientos sociales nacionalistas (responsables del BNG y de la Convergencia Intersindical Galega, CIG, gentes de la cultura gallega) deciden impulsar la creación de una plataforma reivindicativa para denunciar la gestión de la catástrofe. La idea no era original en la experiencia histórica de las organizaciones nacionalistas gallegas, dado que la creación de este tipo de plataformas sectoriales forma parte de la «hoja de ruta» seguida desde la transición por la Unión do Povo Galego y, a partir de 1982, por el BNG, para vertebrar políticamente la sociedad gallega y aumentar su capacidad de movilización social.¹⁰ A esta tradición se le sumaba otro motivo, más coyuntural, pero no menos importante: el desgaste de los partidos políticos institucionalizados, en especial las acusaciones de que «todos son iguales», de que sólo son burocracias que atienden a intereses propios, y a corto plazo; acusaciones que ya han comenzado a hacer mella en el BNG. La creciente institucionalización y moderación experimentada por el BNG desde mediados de los noventa ha traído como contrapartida no sólo la proliferación de esa acusación entre sectores

10. El BNG es heredero de la estrategia y táctica frentista de la UPG, partido marxista-leninista que junto a otras organizaciones (Esquerda Nacionalista, Inzar, Colectivo Socialista y Partido Nacionalista Galego) y militantes independientes integra actualmente el BNG. Entre 1972 y 1982, la UPG centra su actividad en la organización de plataformas de masas para lograr un «campo multiorganizativo» de movilización y penetración social del nacionalismo. Tal es el origen de organizaciones hoy mayoritarias en sus respectivos ámbitos de actuación: Sindicato Labrego Galego, los Comités Abertos de Facultade, Convergencia Intersindical Galega, Comisiões Mariñeiras, Asociación para a Defensa Ecoloxista de Galiza, Mesa pola Normalización Lingüística, etc. Vid. al respecto el estudio de Xosé Luis Barreiro Rivas, «Da UPG ao BNG: o proceso de organización do nacionalismo galego», en Xosé Manuel Rivera Otero (coord.), *Os partidos políticos en Galicia*, Xerais, Santiago de Compostela, 2003, pp. 121-124. Este trabajo de «autoorganización» social y política de la sociedad gallega sigue siendo uno de los principales campos de actuación del nacionalismo político y sindical en Galicia.

antisistema que votaban anteriormente al BNG, sino también una disminución de su tradicional capacidad de conexión con los movimientos sociales más vivos y alternativos. Desde esta clave de lectura, NM puede verse como un intento de recuperación de esa capacidad de conexión en un momento de crisis de las opciones estratégicas del BNG,¹¹ crisis abierta tras las elecciones autonómicas de octubre de 2001, y sólo aplazada en la Asamblea Nacional de abril de 2002.

El papel de militantes del BNG en importantes aspectos del funcionamiento de NM —ese ingrato trabajo de fontanería, tan decisivo para que algo funcione— no puede ser, pues, negado. Lejos de ser un homenaje a la poesía de Edgar Allan Poe, el nombre de «Nunca Más» fue propuesto por Anxo Quintana, coordinador de la ejecutiva nacional del BNG, reciclando para la ocasión un grito que ya había sido pronunciado en manifestaciones posteriores al desastre del Mar Egeo en la bahía coruñesa (1993). Del mismo modo, la bandera de NM, icono más visible del movimiento, es una creación de Xosé María Torné, diseñador de una empresa de publicidad con sede en A Coruña que, entre otras cosas, se hace cargo de las campañas electorales del BNG. El dominio web de la plataforma fue registrado a título particular por un responsable del BNG.

Pero que NM no sea una ONG virginal no implica que NM sea un apéndice del BNG, por más que algunas personas compartan militancia y responsabilidades en ambas organizaciones. Aunque ese protagonismo entraña riesgos para la autonomía de NM, la criatura ha crecido satisfactoriamente, sin el ahogo de utilizaciones partidarias *pro domo sua*, gracias a la generosidad de

11. Las opciones estratégicas del BNG experimentan un cambio decisivo a partir de las elecciones autonómicas de 1993, en que se alcanzan 13 diputados en el Parlamento gallego, y se consigue la incorporación de todas las fuerzas políticas nacionalistas a su seno salvo el Frente Popular Galego y algunos otros grupúsculos radicalizados. A partir de ahí, el frentismo nacionalista se dirige, por un lado, a consolidarse internamente como fuerza capaz de afrontar el gobierno gallego a corto plazo, y por otro, a consolidar y ampliar sus apoyos entre los sectores sociales de «centro», donde se juega la victoria electoral en nuestro sistema político. Esto significa una apuesta por la moderación ideológica de las subculturas de izquierda de las fuerzas y militantes del Bloque y, correlativamente, un mayor acento en el eje ideológico del nacionalismo. Ambos aspectos están funcionalmente dirigidos a posibilitar la adquisición de capacidades y cuadros de gestión, y la absorción de votantes del PSOE y del propio PP. Esta táctica mostró su acierto en las autonómicas de 1997, en las que el BNG se convierte, con 18 parlamentarios, en la fuerza mayoritaria de la oposición, adelantando al PSOE (con 13 parlamentarios), y en las municipales de 1999, en las que se consigue un importante avance (alcaldías de Ferrol, Pontevedra y Vigo, pactos de gobierno con el PSOE en Lugo y Santiago). Sin embargo, las elecciones autonómicas de 2001 supusieron un jarro de agua fría a esta estrategia, jarro que volvería a caer con las municipales de 2003.

todos sus integrantes y, en especial, de los militantes del BNG.¹² Gracias a ello, NM ha podido expresar unos sentimientos cívicos que de otra manera —especialmente a través de las organizaciones políticas tradicionales— no habrían sido canalizados a un nivel masivo en el proceso político propio de las democracias. El acierto de la fórmula NM reside justamente en esa capacidad para cobijar bajo un estandarte común (unos objetivos claros) y propio a sensibilidades personales y colectivas adscritas a distintas tradiciones políticas, o directamente no adscritas a ninguna, habida cuenta de la desafección ciudadana frente a esta modalidad de acción política que es el partido «integrado» o institucionalizado, dirigido mayormente a la captura de voto electoral. Por eso los ataques del PP contra la plataforma NM han sido, como veremos, tan pródigos en virulencia, demagogia y falsedades malintencionadas.

El contenido reivindicativo de Nunca Más

El principal contenido de NM es tan simple como poderoso: se trata de un grito de repulsa, de indignación, de «basta ya» dirigido contra las políticas de la Xunta de Galicia y del Ministerio de Fomento; no sólo en cuanto a su concepción o diseño, sino también contra su gestión y ejecución en la práctica. La propia existencia de la plataforma es presentada por sus integrantes como una muestra de dignidad, de autoestima frente a la tópica imagen de una sociedad gallega sumisa y resignada.

A lo largo de los meses, la actividad reivindicativa de NM y el propio curso de los acontecimientos fueron decantando *tres grandes planos ideológicos*, configuradores del *triángulo* en cuyo interior podemos situar las reivindicaciones concretas de NM. Los lados de ese triángulo son: a) una crítica de la gestión política partidista de la catástrofe; b) una crítica a la marginación de los intereses de Galicia; c) una crítica a la degradación de los servicios públicos. Como veremos a continuación, la razonabilidad de estas críticas iba siendo

12. De hecho, las comisiones gestoras han sido muy escrupulosas a la hora de controlar que las cabeceras de las manifestaciones no fuesen copadas por partidos políticos o sindicatos. Esas manifestaciones eran encabezadas por representantes de las cofradías, marineros, mariscadores, etc. Ello ha sido posible gracias a la generosidad de todos los participantes de la plataforma, conscientes de la importancia de una acción robusta y unitaria. Es decir, sin sectarismos. Lejos de argumentaciones demagógicas, de rancia tradición autoritaria —que consideran a los militantes de partidos políticos corruptos profesionales o agitadores de la confrontación social—, el papel de los militantes y responsables del BNG en el nacimiento y desarrollo de NM no es sólo un síntoma de buena salud o de reflejos de una organización política frentista entre cuyas características históricas destaca la de su gran capacidad de movilización social, sino también un ejercicio de estricta responsabilidad al servicio de la articulación política de la sociedad.

fortalecida día tras día no sólo por los propios hechos que íbamos descubriendo, sino sobre todo por las conductas de los responsables de la catástrofe; rasgo éste muy importante para evaluar el masivo apoyo de las movilizaciones, sobre el que volveremos después de repasar los tres planos señalados.

La gestión política partidista de la catástrofe

Se trata de una acusación dirigida contra una concepción frecuente del ejercicio del poder político en las democracias liberales, en las que el proceso político, y en especial el momento electoral, determina buena parte de las decisiones y omisiones del poder ejecutivo. Si lo que de verdad importa es el respaldo electoral, la acción de gobierno será en sí misma electoralista, es decir, deberá estar enfocada a transmitir una determinada imagen, que es lo que el votante medio percibe y valora, con independencia de los resultados materiales que la acción de gobierno cause. *Lejos de dirigirse a afrontar problemas sociales mediante decisiones lo más racionales y eficaces posible, la acción de gobierno se convierte en marketing.* Un marketing que, como la crisis del Prestige ha demostrado —y antes, la crisis de las vacas locas, a finales de 2000—, se alimenta a sí mismo hasta el punto de convertir la política gubernamental en un auténtico *show de Truman* en el que, a diferencia de la película, muchos sabemos que estamos siendo manipulados. La gestión política partidista de la catástrofe no ha escatimado medios materiales ni procedimientos inconfesables —incluida la mentira más impúdica— para lograr doblegar la voluntad de los «protestantes» e imponer la visión que más le interesaba al Partido Popular. El siguiente inventario testimonia la inquietante versatilidad del PP gallego en la utilización de mecanismos de poder destinados a alcanzar tal objetivo: minimización de los hechos, apagón informativo y puesta en marcha de la maquinaria de propaganda, limitaciones a los derechos fundamentales de la ciudadanía movilizada, criminalización de NM y manipulación política del conocimiento experto.

La minimización de los hechos

Muchos rasgos de la acción gubernamental durante las primeras semanas ponen de manifiesto que la consigna política básica de Fraga y Alvarez Cascos era la de minimizar e ignorar el problema.¹³

De lo que se trataba era de «despejar el balón» fuera del área, para así no sufrir un desgaste político partidista. Sólo así se puede explicar el hecho de

13. En este sentido, cfr. Xosé Luis BARREIRO RIVAS, «Viaxe cara ningures: unha visión politolóxica do caso Prestige», en ELÍAS TORRES FEIJÓO (ed.), *Prestige: a catástrofe que despertou a Galiza?*, Santiago de Compostela, Editorial Candeia, 2003, p. 32.

que durante el fin de semana del 17 al 19 de noviembre ambos políticos, junto con Xosé Cuiña y Carlos del Alamo (Conselleiros de Ordenación del Territorio y de Medio Ambiente de la Xunta de Galicia) se fuesen de cacería a Toledo: si no pasaba nada y estaba todo controlado, no debía hacerse nada que transmitiese la idea de que algo pasaba.¹⁴ Sólo así, atendiendo a esta lógica política partidista,¹⁵ se puede explicar el rumbo errático del barco, que durante seis días fue llevado en distintas direcciones con las miras puestas en pasarle la pelota a los franceses, a los portugueses, o a «nadie», en aguas internacionales, que es lo que a la postre sucedió.

Ni que decir tiene que esta pasividad e irresponsabilidad fue una causa fundamental de la lentitud o inexistencia de una respuesta gubernamental que paliara los efectos más inmediatos de la marea negra. Pero lejos de provocar el reconocimiento de los errores cometidos, con la consecuyente rectificación, la incuria de los responsables políticos en la percepción y valoración inicial de la magnitud de la catástrofe provocó una huida hacia delante, consistente en la acumulación de medidas y estilos de gestión que insistían con soberbia intransigente en la utilización de un arsenal de medidas demagógicas, que no son sino cifra misma de la seudodemocracia —de la postdemocracia, podría decirse— en la que vivimos.

El apagón informativo y la puesta en marcha del aparato propagandístico

El apagón fue ejecutado mediante el férreo control de la TVG, cuyos telediaris sobrepasaron, y ya es difícil, las tácticas manipulatorias y el ímpetu defensivo del gobierno de los telediaris de TVE urdidos por Urdaci. Al margen de la televisión, la maquinaria de propaganda en red fue puesta en marcha tardíamente mediante el uso de las páginas web de la Xunta de Galicia. También hay que señalar en este apartado el cambio de línea informativa de *La Voz de Galicia*, principal diario de Galicia, que se mostró crítico con la gestión de la Xunta hasta finales de enero, coincidiendo con la celebración del Consejo de Ministros del día 24 de enero en A Coruña.¹⁶

14. A la cacería, organizada por el presidente del Corte Inglés, Isidoro Alvarez, asistieron, además de Fraga y Carlos del Alamo, Fernando Fernández Tapias, «Fefé», propietario de los remolcadores que asistieron al Prestige, y el presidente de Repsol, Alfonso Cortina. También estaba Alvarez Cascos.

15. Xosé Luis Barreiro, en el artículo anteriormente citado, denomina a esta lógica «lógica de la indecisión, que hace que todas las actuaciones se orienten a) a alejar el problema de manera compulsiva; b) transferirlo de mano en mano», (op. cit., p. 31).

16. Se ha especulado sobre las contrapartidas de este cambio de línea informativa, pero hasta el momento lo único documentable es lo siguiente: en la página web www.acontrafio.com/confidencial/ figura una copia del expediente de modificación presupuestaria y transferencia de crédito de la Consellería de Presidencia a *La Voz de Galicia* por un importe de 360.607 euros, con cargo al programa «Imprevistos y funciones no clasificadas», bajo la justificación de realizar un convenio de

La limitación de los derechos fundamentales de la ciudadanía movilizada

La calculada erosión del ejercicio de los derechos fundamentales se muestra claramente en la acumulación de hechos como los siguientes: el entorpecimiento de la manifestación del 23 de febrero en Madrid por parte del Delegado del Gobierno en Madrid; la denominada «guerra de los tabloneros», desatada a mediados de marzo, tres días antes del comienzo de la guerra contra Iraq, a causa de unas «Instrucciones de la Dirección General de Centros y Ordenación Educativa sobre publicidad y propaganda en los centros educativos y otras cuestiones formuladas en relación con su funcionamiento y régimen jurídico», en las que se ordena a los directores de los centros educativos públicos y privados concertados la retirada de cualquier «propaganda» ajena a los fines exclusivamente propios de los mismos, así como la prohibición de que un centro docente recabe o emita «por cualquier medio» declaraciones sobre cuestiones «ajenas al ámbito que competencialmente le es propio»: bonita forma de educar en la libertad de expresión y en los valores constitucionales de pluralismo y pacifismo internacional que la propia LODE, la LOGSE y la Ley Orgánica de Calidad de la Educación acogen como valores transversales del proceso educativo. Por último, la polémica «Circular» de la Junta Electoral Central de 22 de mayo de 2003, en la que se insinuaba, sin proclamarla abiertamente —dejando a cada presidente de Mesa la potestad última de valoración— que los carteles de Nunca más situados en los colegios electorales o en los pechos de los interventores y apoderados constituían propaganda electoral.

La criminalización de la protesta

Recordemos algunas de las tácticas de criminalización utilizadas: denuncia del sindicato «Manos Limpias» ante la Audiencia Nacional por delito de estafa, que es admitida a trámite, y archivada el 17 de abril de 2003;¹⁷ acusaciones de Fraga o de Paco Vázquez de que NM está manipulada por el Bloque Nacionalista Galego, buscando ambas organizaciones *batasunizar* (sic) Galicia. Y, por último, como diremos más adelante (en la nota nº 44), la acusación de que miembros de NM o de partidos políticos integra-

colaboración para la edición de un «Atlas turístico», a entregar en doce fascículos. Este expediente es de finales de diciembre. La noche anterior a la celebración del Consejo de Ministros anteriormente citado se celebró una cena entre Mariano Rajoy, Santiago Rey —propietario de la Voz— y Bieito Rubido, director del medio. Según *A contraño*, una de los temas discutidos fue la garantía de la concesión de la publicación del Diario Oficial de Galicia, por la que la Voz obtiene cerca de ochocientos millones anuales.

17. Además de la denuncia del «sindicato» Manos Limpias, tramitada por el Fiscal General del Estado con presteza digna de mejor causa, no me resisto a citar aquí el comentario publicado en *La Razón* de 18 de enero de 2003: «Excelente trabajo de Urdaci en TVE al hacerse eco de la indignación de los españoles por los manejos de la Plataforma ‘Nunca Más’...»

dos en la plataforma estaban detrás de ciertos atentados contra sedes del PP.

La manipulación política del conocimiento «experto» de los técnicos

La crisis del Prestige ha puesto de nuevo de manifiesto la vital importancia del control político del conocimiento experto a la hora de afrontar no sólo el diseño de políticas públicas, sino también las crisis ecológicas. Precisamente por ello, el único conocimiento técnico fiable durante las primeras semanas de la catástrofe era el que provenía del CEDRE francés y del Instituto Oceanográfico de Portugal.

Negada la apertura de comisiones de investigación en el Parlamento español y boicoteada sistemáticamente por el PP la comisión abierta en el Parlamento gallego, poco o nada más que conjeturas sabíamos respecto de la responsabilidad concreta de la decisión de alejar el barco. Y es que la opacidad es la táctica preferida por el calamar en su huida, especialmente cuando hay posibles responsabilidades penales y civiles por medio. La tinta del calamar que desde el primer día suministraba el Gobierno sólo nos dejaba ver los bultos de un grupo de personas, políticos y técnicos del Ministerio de Fomento, pero no sus papeles respectivos.

La versión oficial era que la decisión, la mejor posible, había sido tomada tras consultar un par de *informes técnicos*. Informes que el Ministerio se negó reiteradamente a trasladar al Juzgado de Instrucción de Corcubión —encargado de instruir las causas penales abiertas contra los responsables de la decisión de alejar el barco— alegando que esos informes habían sido evacuados de *forma verbal*. Sin embargo, durante la instrucción de esas causas hemos podido avanzar algo gracias al interrogatorio de los personajes de esta novela ciertamente negra. En sus declaraciones, el Director General de la Marina Mercante, José Luis López Sors, se autoinculpó de la decisión. El Delegado del Gobierno, Arsenio Fernández de Mesa, ha declinado cualquier papel en la toma de decisiones, al afirmar que se limitó a leer lo que media hora antes le escribían los técnicos. Los técnicos que evacuaron sus informes verbalmente, sin preocuparse de trasladarlos por escrito, fueron el capitán marítimo del Puerto de A Coruña, Angel del Real, y el inspector marítimo Serafín Díaz, que subió al Prestige para arrancar los motores y alejarlo de la costa. Quizá por su fidelidad al mantener la tesis oficial han sido ascendidos respectivamente a presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol y a capitán marítimo del Puerto de A Coruña... Los supuestos informes técnicos no han sido remitidos al Juzgado de Corcubión, pero por declaraciones del único experto consultado antes de tomar la decisión de alejar el Prestige —José Manuel Martínez Mayán, profesor de seguridad marítima y lucha contra la contaminación de la escuela de Náutica

de la Universidad de A Coruña—, sabemos que lo que le consultó el capitán marítimo Angel del Real fue si era posible realizar un trasvase en alta mar; pero nada se le consultó sobre si el alejamiento del petrolero impediría la solución del problema.¹⁸

Impasible el ademán, el Ministro de Fomento, máximo responsable de la decisión, no sólo no dimite, sino que insiste en la bondad de su gestión y acusa a Polanco y a *El País* de estar al servicio de la mafias petroleras y los buques basura (sic).¹⁹ Por su parte, y en la línea de premiar a los «fieles», la Xunta de Galicia concedió el 10 de junio de 2003 la medalla de oro de Galicia al Ministro Alvarez Cascos y a la Comisaria de Transportes Loyola de Palacio.

Los mecanismos clientelares: el neocaciquismo

Estamos ante una masiva aplicación de la vieja receta política caciquil consistente en gestionar el dinero público, como si de dones graciabiles del poder se tratasen, para obtener de su receptor la contraprestación de la fidelidad política y/o del silencio: es el «*pan fresquiño*» que, según Jaime Pita —Conseleiro de la Presidencia más conocido como *Pita-bull* por la ferocidad de sus mordiscos verbales anti-oposición, sólo parangonable a la de Alvarez Cascos—, Aznar nos iba a traer debajo del brazo en sus miríficas visitas a Galicia. Este mecanismo político básico, que ha permitido conservar y consolidar los apoyos de la derecha gallega durante decenios (o siglos), se ha aprovechado, como siempre, de la precaria situación socioeconómica de muchos afectados y, también, de la miseria moral de muchas gentes. Pero conviene referirse a las formas peculiares adoptadas por el dispositivo clientelar tras la catástrofe:

- *Primer paso*: sacar dinero de donde no lo había por virtud del dogma del déficit cero.

Dada la magnitud de la catástrofe, los créditos destinados a cubrir eventos imprevistos en los presupuestos de la Xunta fueron rápidamente agotados. Para diversificar la capacidad de gasto sin que la ampliación descuadrara las cuentas del déficit cero, se creó por la Ley 6/2002, de 27 de diciembre,

18. De hecho, en unas declaraciones publicadas en *La Voz de Galicia* de 6 de marzo, Martínez Mayán se mostró especialmente crítico con la decisión de alejar el petrolero, hasta el punto de afirmar que «no creo que exista un profesional en el planeta que quiera ser medianamente honrado y que aconseje llevar el barco mar adentro».

19. Vid. las surrealistas notas de prensa «El Gobierno informa», en www.mfom.es. Por ejemplo, la de 7 de marzo.

de presupuestos generales de la Comunidad Autónoma Gallega para 2003, un *Fondo extrapresupuestario* de 100 millones de euros. El segundo paso fue constituir la *Fundación Arao*; una fundación privada en mano pública, constituida mediante escritura pública otorgada ante notario el día 30 de diciembre de 2002 por miembros del gobierno gallego²⁰ para, según el artículo 6 de sus estatutos, «promover, incentivar y ejecutar cuantas acciones se orienten a la recuperación ambiental de Galicia así como a la recuperación de los daños causados por el Prestige», *canalizando* las ingentes ayudas públicas y privadas (es decir, las millonarias y, por supuesto, «altruistas» donaciones de las empresas, cajas de ahorro y bancos privados) que para este fin se destinasen.

En los anales de la capacidad para sacar dinero de la chistera merece mención singular el denominado «Plan Galicia» del Gobierno central, complementado con el Plan de Dinamización Económica de la propia Xunta. Ambos son programas de gasto nítidamente electorales, sin plazos fijos, sin compromisos claros y, lo que es más grave, con una desmedida apuesta por un modelo económico desarrollista, consistente en taponar la boca a la gente con una marea de hormigón, destinada a carreteras y vías férreas de alta velocidad. En los trípticos publicitarios del Plan, su cuantía asciende a la astronómica cifra de 12.459 millones de euros, equivalente a la inversión del gobierno central en Galicia para los próximos 15 ó 20 años. Hasta el momento, el Plan sólo se ha traducido en una mayor laxitud para el establecimiento de instalaciones de acuicultura en zonas de alto interés ecológico,²¹ y en la proliferación de grandes carteles publicitarios estratégicamente situados en las carreteras, para que la gente los vea a narices, en los que se anuncian todo tipo de nuevas pistas y carreteras... En definitiva, un «maná» de dinero que llevó a algún responsable político del PP a afirmar que el Prestige había proporcionado una oportunidad histórica para que Galicia avanzase en el camino de la modernidad.²² Lo dicho, el show de Truman.

20. Concretamente, Manuel Fraga Iribarne, Jaime Pita Varela, José Antonio Orza Fernández, José Cuiña Crespo, Jesús Pérez Varela, José Carlos del Álamo Jiménez, Corina Porro Martínez y Miguel Ángel López Sieiro

21. Es el caso de la macrogranja de rodaballos que la multinacional «Pescanova» está construyendo, sin licencia y con todas las bendiciones de la Xunta, en Cabo Touriñán, una zona de alto valor ambiental incluida en el plan «Natura 2000» de la Unión Europea.

22. Por eso Carlos Blanco, un famoso actor y humorista gallego, decía en una actuación que a lo mejor, como sostenía el PP, lo que pasaba era que estábamos equivocados, y que lo que debíamos hacer los gallegos era fabricar unas banderas que pusiesen «Outro Máis», sacándonos previamente el carnet de mariscadores.

– *Segundo paso*: el reparto clientelar del dinero público.

Centradas en ciertas zonas y en ciertas actividades,²³ las ayudas destinadas a paliar los efectos de la catástrofe —financiadas en un 75% por la Xunta de Galicia²⁴— fueron importantes y necesarias, pues contribuyeron a amortiguar sus efectos socio-económicos más inmediatos; pero fueron al mismo tiempo la punta de lanza de un intenso clientelismo, es decir, de un reparto de dineros públicos en función de la obtención de apoyo político, arte en el que los responsables del PP demuestran ser unos maestros consumados.

Para entender por qué estas ayudas, en principio razonables, acabaron siendo utilizadas como moneda de intercambio clientelar hay que tener muy presente las condiciones de vida de una zona depauperada y envejecida, el litoral atlántico de Galicia, cuyos habitantes dependen de un sector en reconversión, la pesca, o de transferencias corrientes de las Administraciones (subsidios de desempleo, pensiones).²⁵ Demasiadas fuentes de inseguridad, a las que se añade la incertidumbre derivada del Prestige. Demasiado miedo: el territorio propicio al clientelismo y el populismo *aggiornados* del Partido Popular.

Para empezar, el dispositivo de ayudas tenía una duración de tres meses, prorrogables por otros tres si la situación lo demandaba. Este último plazo remataba, qué casualidad, el 26 de mayo.²⁶ La incertidumbre en la duración de las ayudas generó consecuencias perversas perfectamente calculadas por los responsables de la Xunta. Así, por ejemplo, la falta de colaboración de los perceptores de las ayudas en las labores de limpieza, puesto que cuanto más se prolongase el paro, más tiempo se cobrarían los subsidios.

Al dispositivo de ayudas debe añadirse la contratación *digital* de afectados para la limpieza del chapapote. Esto fue posible gracias a la mediación de

23. Algunos colectivos resultaron arbitrariamente excluidos como, por ejemplo, los comercializadores minoristas que se abastecen en lonjas «no cerradas por decisión administrativa» o, lo que resulta bastante más grave, los numerosos marineros y mariscadores que, pese a no contar con «papeles», vivían de esta actividad. Por el contrario, en muchas familias cercanas al poder municipal o corporativo de turno hubo quien se enroló como profesional de la pesca o del marisqueo con posterioridad al accidente para poder acceder a las ayudas.

24. Dato relevante para entender las prisas mostradas por la Administración gallega para levantar la prohibición de pescar y mariscar, aun contra las abrumadoras conclusiones de estudios realizados por organismos oficiales como el Instituto Español de Oceanografía desaconsejando la vuelta a la actividad dada la persistente contaminación de las aguas y de los fondos marinos.

25. La Costa da Morte tiene uno de los índices más altos de emigración de población joven, que ha engrosado los contingentes de mano de obra en el sector de la construcción en las Canarias y en Andorra.

26. Los Reales Decretos—Ley que las instituyeron (7/2002 y 8/2002) las establecieron por tres meses prorrogables por otros tres: es decir, de noviembre de 2002 a mayo de 2003.

TRAGSA, megaempresa pública estatal sometida al derecho privado que encuadró mediante contratos laborales a un número creciente de afectados en las labores de la limpieza. Los pescadores de las cofradías del sur (O Morrazo, O Grove, etc.) se negaron a ser contratados porque no querían cobrar individualmente por la limpieza a través de TRAGSA, sino a través de una partida específica que repartiesen las cofradías, para evitar los conflictos entre los que cobran porque han sido contratados por TRAGSA y los que no cobran,²⁷ es decir, los voluntarios. Sin embargo, las cofradías de A Coruña firmaron el 20 de diciembre un acuerdo con TRAGSA y SASEMAR para que los marineros cobrasen por la limpieza: 36 euros por día a cada marinero y 60 a cada armador que arriesgaba su barco en la limpieza. En tierra, en la Costa da Morte, muchos habitantes en paro forzoso fueron contratados por TRAGSA.

Esta política generó múltiples tensiones entre los voluntarios y los «vecinos», dado que éstos veían en aquellos a idealistas burgueses con tiempo libre que venían a hacerse la foto, a hacerles «competencia desleal» y, en definitiva, a fastidiarles el chollo (en el doble sentido de oportunidad y de trabajo) en una situación de necesidad. Este *clivage* sociológico (gentes solidarias cuyo idealismo colisiona con el materialismo de la gente trabajadora que más sufre las consecuencias del problema) contribuyó a reforzar las tácticas desincentivadoras del voluntariado dispuestas por la Xunta, la Dirección General de Costas y la propia TRAGSA, primero alegando la carencia de un seguro que cubra los daños personales que puedan sufrir los voluntarios y, después, el daño que estas personas de buena voluntad pero inexpertas podían causar en el medio ambiente.²⁸

Crítica a la marginación de los intereses de Galicia en la gestión de la catástrofe

NM entraña una crítica a lo que se entiende como irresponsable dejación de funciones propias de la Xunta en manos de un gobierno central indolente, que reclamaba el ejercicio de competencias para excluir a los demás, pero que al mismo tiempo se inhibía en el ejercicio de las mismas. Esta indolencia afectaría, más allá de esta catástrofe de gigantescas proporciones, a políticas públicas vitales para Galicia (como la seguridad del transporte marítimo, o la pesca) que no encuentran un impulso suficientemente decidido en las agendas estatales o comunitarias competentes. Se trata de una crítica de los efec-

27. La Voz de Galicia de 15 de diciembre de 2002. El titular de la noticia es: «Las cofradías del sur hacen frente común contra la firma pública TRAGSA».

28. Vid. «¿Qué pinta TRAGSA?», Carta al Director de Mari Carmen García Rivas, *La Voz de Galicia* de 29 de diciembre, p. 18.

tos del centralismo tradicionalmente proyectado sobre gallegos y gallegas, efectos agravados por obra y gracia del neocentralismo característico de la segunda legislatura en la que el Partido Popular ha contado con mayoría absoluta en las Cortes Generales (2000-2004). Veamos por qué.

Un mínimo de sentido común democrático aconseja que decisiones cuyos efectos se van a sentir en una determinada Comunidad Autónoma sean adoptadas colegiadamente por los responsables del Ministerio de Fomento y de la administración autonómica, que poseen competencias exclusivas o compartidas en pesca interior, acuicultura, protección civil, ambiente, sanidad, etc. Pese a ello, las decisiones fueron tomadas unilateralmente por el gobierno central, que utilizó su competencia exclusiva en marina mercante y seguridad marítima como *excluyente* de los demás,²⁹ siendo sorprendente la insistencia del Estado central a la hora de reivindicar unas competencias cuyo ejercicio fue tan lento como displicente —por ejemplo, en el remolque del buque—, además de descoordinado con las Administraciones concurrentes (autonómica y local).

Todo ello no puede ser explicado sino en clave partidista interna. Según la Xunta, su pasividad a la hora de reivindicar políticamente la defensa de sus competencias en la toma de decisiones se justificaba en la debida lealtad constitucional al Estado central. Sin embargo, más que una lealtad constitucional se trataba de una *lealtad estrictamente política* y, más concretamente, *partidista: la sumisión del PP gallego al PP madrileño*, con la correlativa transmisión de esa sumisión a la adopción de decisiones administrativas.

29. Parece que el único interés político consultado fue el del alcalde socialista del PP, Francisco Vázquez, que se apresuró a denegar su apoyo a la entrada del buque siniestrado en el puerto coruñés, único gallego que posee un pantalán para la descarga de crudo, destinado a la refinería de Repsol en A Coruña. Posteriormente, Paco Vázquez ejerció de atento anfitrión del Consejo de Ministros celebrado en el palacio municipal de María Pita el 25 de enero de 2003, con los manifestantes alejados doscientos metros y bajo un férreo cordón policial. El gobierno de Aznar le concedería pocos días después a Paco Vázquez la medalla de Isabel la Católica...y alguna otra cosilla más: el apoyo del PP al faraónico y ecocida proyecto de puerto exterior de A Coruña; un proyecto que ha recibido una desfavorable valoración de impacto ambiental y unos informes técnicos que desaconsejan su ubicación, pero que permitiría liberar grandes cantidades de suelo en el centro de A Coruña y, dicho sea de paso, proseguir así el medro de las promotoras urbanísticas a las que el propio Paco Vázquez está vinculado a través de su mujer, miembro del Opus Dei. No cabe duda, está todo atado y bien atado: Alvarez Cascos visitó A Coruña a mediados de junio para conceder su apoyo al puerto exterior. Vid. *La Voz de Galicia* de 10 de junio. Esta política de apoyo al Gobierno llevó a que Paco Vázquez sufriera un severo voto de castigo en las elecciones municipales, donde conservó la mayoría absoluta por sólo 148 votos, bajando de 17 a 13 concejales. El Bloque pasó de 3 a 6 concejales, y el PP mantuvo los 7 concejales de 1999.

En efecto, la adopción de esta postura de respeto al gobierno central por parte de la Xunta provocó el tensionamiento máximo del PP gallego, tradicionalmente escindido entre los defensores del «giro madrileño» (Mariano Rajoy, Romay Beccaría), y los defensores de un desmarque autonomista frente a la dirección y el gobierno de Madrid. De hecho, el cabecilla tradicional del ala galleguista y autonomista del PP, Xosé Cuiña —que incluso llegó a defender en el Consejo de Gobierno extraordinario del día 31 de noviembre que el PP gallego encabezase la manifestación convocada en Santiago por Nunca Más el 1 de diciembre— sería defenestrado el día 16 de enero de 2003 gracias a una calculada puñalada urdida desde calle Génova, consentida por Fraga y ejecutada a través de TRAGSA.³⁰ Gracias a este golpe de mano, Rajoy y sus apoyos tomaron el mando de PP gallego con el beneplácito de Fraga. La nueva correlación de poderes derivada de estas luchas intestinas se habría de poner de manifiesto en la remodelación del Gobierno gallego de 18 de enero, en la que los hombres y mujeres de Rajoy coparon nuevas parcelas de poder, consolidando así la posibilidad de que Mariano Rajoy —o una de sus mujeres, Ana Pastor— acabe siendo el sucesor de Fraga.

Crítica a la degradación de los servicios públicos

Si observamos con detenimiento los motivos reivindicativos de NM, percibiremos un hilo común a todos ellos: se trata de una *crítica de la degradación de los servicios públicos que tuvieron que afrontar la gestión de la crisis del Prestige*. Esta auténtica *maladministración pública* constituye uno de los objetos más importantes de la crítica dirigida a los responsables políticos, cuya gestión incompetente ha sido vista como una de las causas determinantes de que una situación de grave riesgo acabase degenerando, a la postre, en una catástrofe ecológica de enormes proporciones. Tal imputación no es, en sustancia, distinta de la que dirigimos los ciudadanos cuando individualmente tenemos que padecer las consecuencias de quince años de degradación neoliberal de los servicios públicos: una lista de espera en la sanidad pública, el impago tardío de una beca compensatoria, la rebaja de calidad de la enseñanza universitaria o de la televisión pública, la proliferación de accidentes de medios públicos de transportes, etc. ¿Quién es aquí,

30. Se trataba de un contrato de suministro de material de limpieza (8.500 trajes y 3.000 palas) firmado entre TRAGSA y Gallega de Suministros Industriales, una empresa del grupo familiar de los Cuiña, el popularmente denominado holding Isolina (la madre de Pepe Cuiña, que aparece como administradora del holding). El precio del contrato era de 41.000 euros, cifra irrisoria en el conjunto de subcontratas de este grupo empresarial con la Xunta o el Estado. La noticia fue filtrada a la Cadena Ser.

en cada caso, el responsable? ¿Quién nos ha conducido a este estado tan lamentable de cosas?

Esta importantísima cuestión política es susceptible de múltiples respuestas, que pueden sintetizarse en dos a los efectos que ahora nos interesan.

La respuesta neoliberal, la que ha venido dominando desde hace años entre expertos, clase política y, por metástasis, entre buena parte de la ciudadanía, atribuye la responsabilidad de esta degradación a los propios servicios públicos y, más específicamente, a las «rigideces» del funcionamiento en clave de derecho público y a la indolente burocracia funcionarial. Esta culpabilización ideológica de las víctimas, retórica política básica de conservadores de toda laya, ha propiciado una generalizada privatización y liberalización de los servicios públicos, así como la laboralización de la función pública, en busca de una supuesta mayor eficacia, ni que decir tiene, al servicio de los ciudadanos: todo legal.

Pero existe *otra respuesta*: la que *imputa la degradación a la propia política neoliberal*. Esta es la respuesta que más se ajusta a la realidad. Lejos de haber cumplido sus promesas, la privatización y liberalización de los servicios públicos y la laboralización de la función pública no ha traído ni un mejor funcionamiento de la cosa pública ni unos mejores servicios para la ciudadanía. Antes al contrario, ha aumentado la dependencia de la acción político-administrativa respecto de la *pinza* formada por los intereses de los responsables políticos y de las empresas privadas, de tal modo que el servicio a los intereses generales, al que idealmente se deben las Administraciones Públicas (art. 103 CE) se desplaza en la práctica por el servicio a los intereses reales de parte a cuyo servicio se toman las decisiones públicas. Esta visión proporciona solidez teórica y práctica a la acción reivindicativa de muchos movimientos sociales —ya sean de defensa de los servicios públicos (sanidad, educación), ya del ambiente, ya de control del mercado, etc.— que se esfuerzan en poner de manifiesto el carácter ideológico de la respuesta neoliberal y, muy especialmente, las consecuencias perversas de esa ideología para el conjunto de la acción pública.

Por gracia —o mejor dicho, por desgracia— de la catástrofe del *Prestige*, la *visibilidad de la degradación generalizada de los servicios públicos y, muy especialmente, de sus efectos perversos en cadena respecto del conjunto de la acción público-administrativa, así como de sus causas puramente políticas*, ha alcanzado *proporciones masivas* entre la ciudadanía, y desde luego el movimiento NM ha sido fundamental para lograr esa visibilidad masiva; visibilidad que, además, tenía la ventaja de aparecer limpia de connotaciones «partidistas», lo que aumentaba su potencial de penetración en la ciudadanía.

La ineficacia de las políticas públicas de control del tráfico marítimo de mercancías peligrosas

El corredor marítimo de Fisterra es una autopista atiborrada de tráfico peligroso sin una ley y orden eficaces. Las pruebas más irrefutables de la ineficacia de las políticas públicas de control del tráfico marítimo de mercancías peligrosas ante las costas gallegas son los propios hechos. La simple enumeración de los accidentes marítimos que desde hace treinta y pico años asolan periódicamente una de las costas más bellas y más productivas de todo el mundo, causa buena parte de la impotencia e indignación que nutren el grito de «nunca máis»:

- El 5 de mayo de 1970, el Polycommander encalla en las Islas Cíes, y vierte 20.000 Tm de crudo en la Ría de Vigo. Mueren sus 23 tripulantes.
- El 31 de octubre de 1973 el carguero Erkowit choca a la altura de Cabo Vilán contra el carguero alemán Dortmund. El Erkowit es transportado a la ría de A Coruña, donde se vierten 2.000 bidones de insecticida altamente tóxico.
- El 12 de mayo de 1976, el petrolero español Urquiola embarranca a la entrada de la ría de A Coruña, vertiendo un total de 100.000 toneladas de crudo. Muere el capitán del buque. Es probablemente el mayor accidente ecológico hasta el Prestige.
- El 31 de diciembre de 1978, el superpetrolero Andros Patria sufre una brecha de 21 metros por encima de su línea de flotación cuando navegaba a la altura de Cabo Fisterra. Para evitar el naufragio, se vierten al mar 47.000 tm de crudo. Se niega la entrada a puerto, y posteriormente se realiza un transbordo del crudo restante —casi 150.000 tm— al sur de las Azores. Un caso muy similar al del Prestige, como vemos.
- El 4 de diciembre de 1987 el Casón embarranca en la costa de Fisterra con un total de 1.100 toneladas de productos químicos altamente peligrosos en su interior. Mueren 23 de los 31 tripulantes. Se evacúa a la población circundante, alrededor de 15.000 personas.
- El 3 de diciembre de 1992, el petrolero Mar Egeo encalla frente a la Torre de Hércules, cuando se disponía a entrar en el puerto de A Coruña. Se vierten alrededor de 75.000 tm de crudo. Se trata de una zona golpeada años atrás por el Urquiola, debiendo notarse que, en 1992, los pescadores y mariscadores de la ría coruñesa aún no habían cobrado la totalidad de las compensaciones derivadas de aquel desastre. Las compensaciones

provenientes del Mar Egeo se están cobrando en este año 2003, once años después.

La simple lectura de esta lista explica que NM entrañe una crítica contra el inicuo *reparto social de los riesgos* derivados del transporte marítimo de hidrocarburos.³¹ Históricamente, las indemnizaciones han llegado tarde y mal, y no han bastado para reparar todos los daños efectivamente producidos en el ambiente y en los sectores sociales más vulnerables. Por supuesto, el tráfico marítimo de mercancías peligrosas —y entre ellas, de los hidrocarburos— constituye un problema cuyas causas no dependen sólo del Estado. La fabricación del riesgo, por seguir la terminología de Ulrich Beck, depende íntimamente de causas globales de tipo infraestructural —la dependencia que las sociedades capitalistas y desarrollistas tienen de las fuentes de energía basadas en hidrocarburos;³² la dinámica altamente competitiva y casi depredadora de las compañías de transporte marítimo— y de tipo superestructural.

Entre estas causas superestructurales, donde la acción del Estado es ya perfectamente visible y, por tanto, responsable, hay que destacar la ineficacia y descoordinación de las políticas de control de ese tráfico marítimo. Unas políticas que vienen desarrollándose desde hace muchos años con escaso éxito y, por cierto, a golpe de catástrofe —pero *ex post*, no *ex ante*— tanto desde el Estado como desde la Unión Europea.³³ Por supuesto, la catástrofe del Prestige ha estimulado la elaboración de nuevas normativas en el seno de la Comisión Europea. Pero ello no significa que esas normativas cobren eficacia automáticamente, porque de nada valen las Directivas, los Reglamentos y las Leyes si después:

31. Sobre el reparto desigual de los riesgos entre la población y la importancia de una gestión pública del riesgo en la que tenga cabida la participación social en la evaluación y en el reparto de los mismos, cfr. José Antonio López Cerezo y José Luis Luján, *Ciencia y política del riesgo*, Alianza Editorial, Madrid, 2000, pp. 173-185.

32. Estas causas infraestructurales son las más resistentes a las políticas públicas. No sólo por depender de decisiones adoptadas por muchos más actores que el Estado, sino por basarse en dependencias reales de la gente: la dependencia de movernos en coche, por ejemplo, creada las más de las veces, ciertamente, pero no por ello menos adictiva. Mientras esas dependencias no cambien, las políticas públicas de control del tráfico de hidrocarburos sólo actuarán como paliativos al nivel superestructural; paliativos necesarios y a los que no podemos renunciar, por más que sea importante mantener la consciencia de que son eso, paliativos frente a causas más profundas cuyo cambio debe afrontarse de una manera tan realista como decidida.

33. Los «paquetes» Erika I (marzo de 2000) y Erika II (diciembre 2000) son significativos en este sentido: sus medidas protectoras —aumento del rigor de las inspecciones, doble casco— carecen aún de eficacia, gracias al grupo Popular del parlamento europeo y del propio Consejo de Ministros de Transportes, que no apoyó los plazos propugnados por la Comisión para la sustitución de los petroleros monocasco.

- Regulamos las inspecciones técnicas de los buques civiles de tal manera que permitimos la delegación de un poder tan público y tan importante como el inspector técnico naval en compañías privadas,³⁴ las compañías de clasificación de buques, que hacen de la inspección una actividad lucrativa, con los riesgos añadidos que ello conlleva (connivencia con la empresa inspeccionada: caso Enron, por ejemplo, en el sector energético norteamericano).
- Los servicios de inspección de las capitánías marítimas están cubiertos por personal designado libremente por el responsable político,³⁵ y que no llega, por otra parte, para cubrir el trabajo de inspección de manera continua, motivo por el cual, como sabe toda la gente del mar, si tienes una carga peligrosa o un buque hecho polvo, lo mejor es hacer puerto en fin de semana, período en el cual los inspectores descansan...
- La tripulación de los buques carece muchas veces de la titulación requerida y trabaja a destajo por salarios ínfimos, con lo que aumentan los peligros de siniestralidad laboral y de naufragios. La seguridad laboral en el mar sigue siendo una asignatura pendiente, tanto más grave cuanto más se «globalizan» las tripulaciones para así escapar de los derechos laborales nacionales más exigentes.

La ineficacia del servicio público de salvamento marítimo

La gestión de este servicio público fue entregada por el art. 89 de la Ley de Puertos del Estado y la Marina Mercante de 1992 a la Sociedad Estatal de Salvamento y Seguridad Marítima (SASEMAR), entidad pública empresarial, de capital íntegramente público, que actúa conforme al Derecho Privado.³⁶

34. Vid. Real Decreto 1837/2000, de 10 de noviembre, por el que se aprueba el reglamento de la inspección y certificación de buques civiles. La responsabilidad de tutela del sistema recae en el Ministerio de Fomento, que debe autorizar a las organizaciones y compañías clasificadoras, conforme lo que disponía el Real Decreto 2662/1998, de 11 de diciembre, sobre reglas y estándares comunes para las organizaciones de inspección y control de buques y para las actividades correspondientes de las Administraciones marítimas, Real Decreto sustituido en lo que se refiere al reconocimiento e inspección desarrollada por sociedades de clasificación, qué casualidad, por el Real Decreto 90/2003, de 24 de enero (BOE de 4 de febrero de 2003).

35. El actual Capitán Marítimo de A Coruña, Serafín Díaz, es un subinspector imputado judicialmente en un sumario en el que se investiga la falsificación de permisos de navegación. Como en el caso de Ángel del Real —su antecesor en el cargo y actual Presidente de la Autoridad Portuaria de Ferrol-San Ciprián—, la única razón de su promoción parece estribar en haber formado parte del «gabinete de crisis» creado en los primeros momentos de la crisis en la Delegación del Gobierno en A Coruña y, por tanto, de conocer o haber tomado parte en la decisión de alejar el barco y de marcarle, después, su errático rumbo. Lógicamente, como demuestran sus declaraciones ante el Juzgado de Corcubión que investiga las causas de la catástrofe, tanto uno como otro no han olvidado que el silencio es el precio de estos ascensos.

SASEMAR contrata a su vez estos servicios con Remolcanosa, sociedad anónima dominada por «Fefé» Fernández Tapias, compañero de la cacería de Alvarez Cascos y Fraga durante el fin de semana del 17 al 19 de noviembre de 2002. El matrimonio de esta fórmula de gestión con las diferencias que en derecho marítimo comporta el remolque del salvamento fue una de las causas de la demora en la actuación contra la situación de riesgo; algo que ya se había denunciado en el Parlamento gallego con motivo del accidente del Casón en 1987.

En efecto, como dicen las Ordenes del Ministerio de Fomento que regulan las tarifas de SASEMAR, las asistencias marítimas y los remolques *«se realizan en régimen de concurrencia y su prestación, por consiguiente, debe compensarse con el pago de las correspondientes tarifas»*, que los usuarios aceptan desde el momento en que solicitan los servicios de remolque.³⁷ Por su parte, *el salvamento de la vida humana en el mar y la lucha contra la contaminación del medio marino* constituyen prestaciones de servicio público, como no puede ser de otra manera en puridad de principios. Esto significa que deben ser prestadas por SASEMAR sin contraprestación del usuario.

Ahora bien, permanece vigente la regla de la Ley de Auxilio y Salvamento de 1962 conforme a la cual en el salvamento marítimo,³⁸ con independencia de la naturaleza pública o privada del prestador del mismo, el buque salvado está obligado a conceder un premio al buque salvador; premio que oscila, en

36. Conforme al artículo 53 de la Ley 6/1997, de organización y funcionamiento de la Administración General del Estado, las entidades públicas empresariales son organismos públicos a los que se encomienda la realización de actividades prestacionales, la gestión de servicios o la producción de bienes de interés público susceptibles de contraprestación. Estas entidades se rigen por el Derecho privado, excepto en la formación de la voluntad de sus órganos, en el ejercicio de las potestades administrativas que tengan atribuidas y en los aspectos específicamente previstos por esta Ley, por sus estatutos y por la legislación presupuestaria. El actual diseño de SASEMAR se debe a los art. 89 y ss. de la Ley de Puertos del Estado y de la Marina Mercante de 1992.

37. Vid. Orden de 2 de marzo de 1999, BOE nº 62, de 13 de marzo, cuyas tarifas fueron actualizadas por la Orden de 4 de septiembre de 2002, BOE nº 220, de 13 de septiembre.

38. Vid. Convenio Internacional para la unificación de ciertas reglas en materia de asistencia y salvamento en el mar, hecho en Bruselas el 23 de septiembre de 1910, al que España se adhirió en 1923; y la vigente Ley 60/1962, de 24 de diciembre, por la que se regulan los auxilios, salvamentos, hallazgos y extracciones marítimas. El art. 6.2º de esta Ley menciona los siguientes criterios a tener en cuenta por el TMC para fijar esta remuneración: a) naturaleza y el grado del peligro corrido, (b) valor de los bienes salvados, (c) la medida del éxito logrado por el salvador, (c) la pericia y los esfuerzos desplegados por los salvadores para salvar el buque, otros bienes o vidas humanas, (d) riesgos que hayan corrido los salvadores, (e) el tiempo empleado y la prontitud con que se hayan prestado los servicios, (f) los gastos efectuados y las pérdidas sufridas por los salvadores, (g) el riesgo de incurrir en responsabilidad o (h) la disponibilidad y utilización de buques o de otros equipos destinados a operaciones de salvamento, y el grado de preparación y la eficacia del equipo del salvador, así como el valor del mismo.

función del riesgo corrido en el salvamento, entre el 10 y el 30% del valor del buque y su carga. Es decir, en el caso del Prestige, unos 20.000 millones de pesetas (13.000 del petrolero y 7.000 de la carga). De modo que, concretando cifras, el salvamento ascendía, en la situación de riesgo evidente que se corría, a unos 6.000 millones de pesetas, frente a las tarifas mucho menores a que obligaba la consideración de las tareas como de mero remolque o asistencia marítima. Esta es la razón por la que durante la noche del día 13 de noviembre los propietarios de los remolcadores que acudieron a la zona (Ría de Vigo y y Remolcanosa) se enzarzaron con el armador del Prestige y sus aseguradoras en un cruce de ofertas y contraofertas, sabedores de que el tiempo (y el mal tiempo de la mar) jugaba a su favor, puesto que enviaba el barco hacia los acantilados y aumentaba el riesgo del salvamento (y por tanto el premio).³⁹ Curiosa *lex mercatoria* ésta, vigente en materia de salvamento marítimo, que incentiva la fabricación de riesgo y, a su calor, la fabricación de millones de pesetas en beneficios para empresas privadas.

Finalmente, el Prestige cogió el remolque, cuando estaba a sólo tres millas de la Costa da Morte, por un precio de 5 millones de dólares. Pero como posteriormente los hechos se encargarían de demostrar, las horas perdidas en tan obscena búsqueda y rifa del beneficio del remolque o del salvamento, fueron preciosas. Como también fueron preciosas las horas perdidas por mor de la incapacidad de los remolcadores españoles para remolcar; pues ni el Alonso de Chávez, ni el Ibaizábal I, ni el Ría de Vigo ni el Charuca Silveira tenían potencia suficiente para dirigir con eficacia al Prestige en medio del temporal. La carencia de medios de SASEMAR —denunciada por el BNG durante años sin resultado— para hacer frente a la seguridad marítima en el corredor de Finisterre se puso de manifiesto cuando tuvo que acudir un remolcador chino desde Francia... La propia Xunta ha convocado en junio de 2003 un concurso internacional para adquirir un remolcador y un buque de apoyo de tamaño medio con capacidad de lucha contra la contaminación marina por hidrocarburos.

A las dos anteriores circunstancias, régimen jurídico mercantilizado y *estrangulamiento* de medios, se le añadió posteriormente lo más grave e irresponsable: el rumbo errático del remolque del Prestige hacia mar abierto, primero en dirección noroeste y luego en dirección suroeste, a la búsqueda del

39. A esta puja también concurría Smit Tak, la compañía holandesa especializada en rescates marítimos, que era la que el armador del barco había contratado para rescatarlo. Hay que tener en cuenta, por otra parte, que el remolcador Ría de Vigo negoció con Smit Tak su integración dentro del dispositivo de remolque de la compañía holandesa, con la autorización de SASEMAR. Aunque la materia siga siendo objeto de instrucción penal, vid. el capítulo «Comienza el negocio», del libro de Luis Gómez y Pablo Orgaz, *Crónica negra del Prestige*, Ediciones El País, Madrid, febrero de 2003, pp. 35 ss.

«quinto pino», según cuentan que dijo el Ministro Alvarez Cascos, es decir, tratando de sacudirse el problema de encima metiéndolo debajo de la alfombra, más concretamente a una profundidad de 3.850 metros... Y las responsabilidades gubernamentales no se detienen ahí, porque pese a que, desde hace ya 11 años, el artículo 87 de la Ley de Puertos de 1992 prevé la aprobación del Plan nacional de servicios especiales de salvamento de la vida humana en la mar y de la lucha contra la contaminación del medio marino, instrumento básico de coordinación de recursos del Estado y las Comunidades Autónomas en esta materia, el Plan no ha sido publicado.⁴⁰

La ineficacia del servicio público de protección civil

Dada la alta siniestralidad marítima de las costas gallegas, lo esperable de cualquier gobierno diligente es que se hubiese ocupado de diseñar un plan específico de actuación en caso de catástrofe, mediante las herramientas propias del servicio público de protección civil, regulado en la Ley estatal 2/1985.

Sin embargo, una vez producido el accidente, ni la Xunta ni el Gobierno estatal activaron plan de emergencia alguno. El Ministerio de Interior no tomó decisión alguna, pese a que la Ley 2/1985, de protección civil, le otorga la posición de autoridad coordinadora de los planes de protección civil ante este tipo de catástrofes.⁴¹ Esto provocó que los ayuntamientos de la Costa da Morte directamente afectados —ayuntamientos débiles, sin potencial de gasto ni de gestión— tuvieran que afrontar la tragedia desde la improvisación y la carencia de medios, únicamente paliados por la colaboración de otros ayuntamientos mayores como el de Pontevedra. Sin medios materiales ni humanos suficientes, y ante la dejación de funciones por parte de los poderes públicos competentes, las cofradías tuvieron que autoorganizarse para hacer frente a la catástrofe.

¿A qué esperaban las autoridades competentes? Muy sencillo: a que TRAGSA, una empresa estatal que funciona en régimen de derecho privado con una alta opacidad (lo cual, dicho abruptamente, significa que contrata a quien quiere y

40. En la página dedicada por la Xunta de Galicia al Prestige (<http://www.cemmm-prestige.cesga.es/>) aparece una Orden de 21 de febrero de 2001, no publicada en BOE, del Ministerio de Fomento, por la que se aprueba tal Plan Nacional de Contingencias por Contaminación Marina accidental. Sin dudar de su autenticidad, es más que dudosa la eficacia de un plan que no se publica. Eso sí, en el BOE del 12 de diciembre de 2002 apareció publicado el Real Decreto 1217/2002, de 22 de noviembre, por el que se regula la Comisión Nacional de Salvamento Marítimo, que se encargará de planificar la materia. Confiamos que lo haga antes del próximo accidente.

41. Art. 13 y concordantes. Jaime Curbet ha sido el primero en poner de manifiesto la dimisión del título competencial de la protección civil en este tema. Vid. «¿Dónde está la protección civil?», *El País* de 20 de diciembre de 2002, p. 24. Por lo que al responsable de protección civil de la Xunta de Galicia se refiere, la pregunta tiene respuesta: el primer fin de semana de la catástrofe se encontraba junto con su esposa, la flamante Ministra de Sanidad, Ana Pastor, descansando en el Parque Nacional de Doñana...

como quiere, a mayor gloria del dispositivo de control político del PP) organizase la limpieza de las playas, para desplazar así a los voluntarios, a las cofradías y a los ayuntamientos de la zona. El 18 de noviembre de 2002, la Dirección General de Costas del Ministerio de Medio Ambiente y el organismo autónomo Parques Nacionales le encomendó a TRAGSA la limpieza de las playas, el servicio de *catering* y el suministro de equipos de protección individual a la denominada «marea blanca» de voluntarios, incorporados espontáneamente a las tareas de limpieza. TRAGSA comenzó así a finales de noviembre la contratación masiva de personas para acometer la limpieza de las playas. A 21 de diciembre, según el propio Roque Manresa, expresidente de TRAGSA, los contratos se elevaban a 1.419.⁴² Es el denominado «negocio» de la limpieza de las playas. Un negocio tan turbio y espeso como el propio chapapote.⁴³

El trabajo de Nunca Más

Armada de tal cúmulo de razones, la actividad de Nunca Más ha tratado de combinar, complementándolos, dos grandes mecanismos de acción colectiva:

- La ocupación del espacio público mediante manifestaciones.

NM ha convocado y gestionado las manifestaciones más multitudinarias de la historia de Galicia, demostrando reiteradamente un alto poder de movilización social. Dos días después de la llegada de la segunda marea negra, el 1 de diciembre se celebra en Santiago de Compostela la más importante: más de 200.000 personas unidas por el grito «nunca más!». El 6 de diciembre, la «Marea Gaiteira» en Compostela (cerca de 20.000 personas); el 8 de diciembre, un millar de personas que se concentran ante el chalé de Fraga en Perbes

42. Según el Presidente de TRAGSA, Roque Manresa («La empresa TRAGSA, en orden», *La Voz de Galicia* de 21 de diciembre, p. 16; este artículo es una contestación a un artículo mío publicado el 19 de diciembre en el mismo diario: «TRAGSA: a privatización encubierta do Estado»). Roque Manresa fue cesado a finales de marzo por el Consejo de Ministros, sustituyéndolo en su cargo Jaime Olmos.

43. Valgan algunas muestras. El caso de Epifanio Campo, propietario de los terrenos de Laracha (A Coruña) donde se depositaron 18.000 toneladas de chapapote durante las primeras semanas de la catástrofe. Aunque según él su cesión de terrenos es puramente altruista, en beneficio de Galicia, sin embargo resulta que facturó a TRAGSA por el depósito un total de 391.333 euros. Ello, en el terreno de las contraprestaciones económicas. Porque otras contraprestaciones pueden ser más importantes: hacerle favores al poder público es fundamental para obtener la impunidad cuando se trabaja en el sector de los residuos industriales y se han acumulado ya tres infracciones ecológicas graves en la gestión de esos residuos, sin contar las múltiples denuncias paradas en el Concello de Laracha, donde el PP tenía mayoría absoluta...Más ampliamente, vid. «El rey del chapapote», *Interviu* n° 1.411, del 12 al 18 de mayo.

para pedir su dimisión. El 11 de diciembre, manifestaciones multitudinarias en todas las ciudades gallegas. El 15 de diciembre, unas 12.000 personas se manifiestan en Barcelona convocadas por Nunca Más de Cataluña; el día 19 tiene lugar en Madrid otra manifestación a la que concurren por lo menos 100.000 personas. Las protestas se extienden por otras ciudades españolas. El 28 de diciembre 15.000 personas participan en la Playa do Orzán, en A Coruña, en un simbólico Velatorio del Mar. El 6 de enero 100.000 personas participan en Vigo en la manifestación encabezada por los «reis magos do Chapapote» (monigotes de Aznar, Fraga, Cascos, Rajoy, etc.). El 22 de enero se despliega una cadena humana de 50.000 estudiantes entre las localidades de Laxe y Muxía. El 24 de enero, ante la plaza de María Pita, en cuyo Palacio Municipal Aznar perpetra el Consejo de Ministros en el que se presenta el denominado «Plan Galicia», se congregan 5.000 personas, rodeadas por un severo dispositivo policial. El 1 de febrero se celebran «conciertos expansivos» en 130 localidades del país. El 9 de febrero, manifestación en A Coruña bajo el lema «salvemos o mar ou só nos queda a maleta», con más de 100.000 personas. El colofón de este ciclo fue la también histórica manifestación del 23 de febrero en Madrid, a la que asistieron unas 350.000 personas.

La labor movilizadora sigue con la «Volta a Galiza» de NM y la multitudinaria manifestación celebrada en Santiago el 4 de mayo (100.000 personas) bajo el lema «Non esquecemos», con el fin de denunciar el intento gubernamental de dar por superada la crisis cuando del «Prestige» siguen saliendo 2 tn. diarias de fuel y la costa y los fondos marinos siguen sin limpiar. El 14 de junio la movilización de NM se trasladó a Bruselas. Durante el mes de junio, *Burla Negra* ha desarrollado el proyecto «País de Nunca Más», una carpa móvil reivindicativa con actuaciones musicales y teatrales gratuitas.

Aunque no faltaran razones para ir más allá, y aunque hubo que aguantar no pocas provocaciones policiales e institucionales, todas las manifestaciones y concentraciones se desarrollaron en un clima pacífico.⁴⁴

44. El autocontrol, sin embargo, no fue nada fácil durante las primeras manifestaciones y concentraciones. Los ánimos estaban muy caldeados, y mucha gente —el que esto escribe incluido— aguantaba con los puños cerrados las exhibiciones de las fuerzas antidisturbios, dispuesta a cargar al mínimo impacto de huevo en sus cascos. Los organizadores eran conscientes de que cualquier brote de violencia iba a dar lugar al inicio de una campaña de criminalización de las protestas, cuya eficacia mediática es tan temible como sus efectos jurídicos. En efecto, no sería difícil que, de insistirse en esta lógica irracional de establecer supuestas conexiones entre «entramados» y organizaciones terroristas, alguien, por ejemplo algún juez de instrucción de la Audiencia Nacional, acabase por decir que NM está al servicio de ETA; de momento no se ha llegado a tanto, pero visto lo visto, no cabe sino ser prudentemente desconfiados, porque el 16 de junio de 2003, en una entrevista en la Televisión de Galicia, el Conselleiro de la Presidencia de la Xunta de Galicia, Jaime Pita, acusó a la oposición de haber querido derrotar a la Xunta de manera antidemocrática, en alusión a las manifestaciones del Prestige y contra la guerra, añadiendo que existía una clara ligazón entre los parti-

– La acción institucional.

Destaca en este sentido el *frente judicial* —querrela criminal presentada el 28 de enero ante el Juzgado de Corcuación contra las empresas propietaria, armadora y fletadora del Prestige, así como contra los responsables del Ministerio de Fomento, por la supuesta comisión de varios delitos ambientales (art. 325 y 330 del Código Penal)— y el *frente parlamentario*, con la promoción de la creación de comisiones parlamentarias de investigación de la catástrofe, con una especial actividad de presión en el seno del Parlamento Europeo, donde el PP no puede imponer su rodillo parlamentario. La «propuesta de NM en materia de transporte marítimo», hecha pública el 23 de marzo de 2003, ha sido presentada el 13 de junio en el Parlamento Europeo.

Los efectos políticos de Nunca Más

La crisis del Prestige y el trabajo de NM se desarrolló a seis meses de distancia de las elecciones municipales de 25 de mayo de 2003; a partir de febrero se añadieron las movilizaciones masivas contra el apoyo de Aznar a la guerra de Irak.

Estos dos hechos generaron la posibilidad —y mucha ilusión—, de que el movimiento de NM y el no a la guerra se tradujesen en un voto de castigo masivo al Partido Popular. Las movilizaciones de NM habían puesto de manifiesto la pluralidad de los apoyos ciudadanos a las críticas dirigidas contra la gestión de la catástrofe, mientras que la paternidad difusa del movimiento —en los términos en que ha sido expuesta— y su desarrollo no sectario hacía presagiar una capitalización electoral del voto de castigo hacia el BNG, pues las movilizaciones habían sido una demostración palpable de que era tan razonable como posible la estrategia política frentista del BNG —reunir a todos los sectores objetivamente interesados en la defensa de la dignidad, de los intereses gallegos, de un funcionamiento democrático de las instituciones, etc.—. La capitalización en votos por parte del PSOE era menos esperable, dada la ambigüedad y no poco oportunismo mostrado por esta fuerza política respecto de NM.⁴⁵

dos de la oposición y la agresión con bombas a las sedes del PP. Por ello, como más vale prevenir que curar, recomiendo la lectura de un reciente libro de Iñaki Lasagabáster Herrarte, catedrático de Derecho Administrativo de la Universidad del País Vasco, en el que pieza a pieza, implacablemente, se desmonta jurídicamente los autos del Juez Garzón sobre la ilegalización de Batasuna y su «entramado» al servicio de ETA, poniendo de manifiesto el crudo envés político de sus decisiones jurídicas. Vid. *Derecho de manifestación, representación política y juez penal (En torno a algunos autos del juez Garzón)*, Instituto Vasco de Administración Pública, Oñati, 2003.

45. Aunque muchos votantes del PSOE se integraron tempranamente en la movilizaciones de NM, el PSOE tuvo una actitud ambigua frente a NM. Apenas se integraron algunas agrupaciones locales

Sin embargo, los resultados electorales del 25 de mayo confirmaron que las ilusiones de una alteración sustancial de los alineamientos electorales en forma de voto de castigo por la gestión de la crisis del Prestige habían sido excesivas. El PP ya había demostrado su capacidad de superar escándalos como el de las vacas locas en las elecciones autonómicas de octubre de 2001, en las que revalidó su mayoría absoluta. El hecho de situarnos ahora ante unas elecciones municipales, en las que se votan a personas concretas por intereses concretos y en virtud de la valoración de una gestión concreta, hacía difícil un masivo voto de castigo puro, explícito.

Ahora bien, ello no significa que la gestión del Prestige no haya pasado factura electoral. Por más que sea difícil establecer correlaciones de causa y efecto, lo cierto es que el voto conjunto al PSOE y al Bloque ha superado por vez primera al PP.⁴⁶ Éste ha perdido un total de 15.000 votos, lo que se traduce en la pérdida de la Diputación de A Coruña, y en un sensible retroceso en la provincia de Lugo. El PP se muestra incapaz de avanzar en las grandes ciudades y capitales de comarca. En cuanto al litoral gallego, hay que diferenciar tres zonas. En el Cantábrico, el descenso del PP fue realmente acusado. En la Costa da Morte se mantiene la correlación de fuerzas alcanzada en 1999: la zona sigue siendo mayoritariamente PSOE-BNG, aunque en Muxía, la denominada zona cero, el PP conserve la alcaldía, perdiendo sólo 25 votos. En las Rías Baixas, el PP resiste en Ribeira y consigue Noia, pero pierde Boiro, Bueu y Moaña.

No es fácil deducir hasta qué punto estos resultados han traducido una crítica a la gestión del Prestige. En cualquier caso, el PP ha puesto de manifiesto la potencialidad de su maquinaria de neutralización de la protesta y la escasa volatilidad de su voto, apoyada en una cultura política conservadora muy arraigada. Las fuentes de inestabilidad de la mayoría del PP podrán manifestarse más plenamente en las autonómicas de 2005, cuando tenga que afrontar el difícil tema de la sucesión de Fraga.⁴⁷ En ese momento, las reivindicaciones de NM pueden seguir jugando un papel muy importante: el papel de la

y las juventudes socialistas. De hecho, en los últimos meses el PsdeG-PSOE «desertó» de actos convocados por NM, por ejemplo, la manifestación de 4 de mayo en Compostela, aduciendo el argumento de que debía evitarse que el «Prestige» interfiriese en la precampaña electoral. Todo ello sin olvidar el papel quintacolumnista de Francisco Vázquez, empeñado en defender al gobierno del PP, como ya hemos dicho en la nota nº 29, sin que ello tuviese más consecuencias en el PSOE que la famosa justificación, acuñada por Touriño, de que la línea política del Alcalde de A Coruña eran «cosas de Paco». El enorme peso político de Francisco Vázquez en el PSOE gallego debe tenerse en cuenta, pues, para valorar la posición política de esta fuerza.

46. De 710.324 votos del PP en 1999 se ha pasado a 695.540 en 2003. De 395.189 votos del PSOE en 1999 se ha pasado a 452.456 en 2003. De 290.187 votos del BNG en 1999 se ha pasado a 325.492 votos en 2003. El mayor aumento electoral le corresponde, pues, al PSOE.

memoria contra la tendencia a la inercia y al olvido de lo que ha sido la gestión del PP en Galicia.

Pero quizá los efectos más importantes que genere NM sean otros, distintos a un simple cambio en las tendencias de voto. Viejas y nuevas generaciones (perdón por la expresión) alejadas, probablemente con razón, de los partidos políticos tradicionales, han iniciado o retomado su socialización política gracias a NM; nuevos contingentes se han formado en la sensibilidad y en la responsabilidad ecológicas. Nos hemos demostrado a nosotros mismos que es imprescindible seguir luchando contra la obscenidad del poder, su sinrazón, su prepotencia, su cinismo, su incompetencia y su estrechez de miras. Esta pedagogía social es, a la postre, lo más importante; lo más duradero del movimiento NM.

Las perspectivas de futuro del movimiento Nunca Más

La plataforma NM seguirá existiendo mientras persistan los objetivos de su programa reivindicativo. Por esta razón, y a la vista de la recalcitrante tendencia de los sucesivos gobiernos a *naturalizar* las catástrofes para justificar su irresponsabilidad en ellas, NM tiene mucho que hacer en los próximos años para que no vuelvan a producirse ecocidios como el del Prestige: será un agente social ineludible a la hora de afrontar *democráticamente* la reparación del daño causado y la gestión pública del transporte marítimo en Galicia. Aunque las posibilidades de articulación organizativa interna y las modalidades de intervención socio-política sean variadas, no parece que se vayan a producir cambios serios de orientación en los próximos meses. Todo indica que se seguirá en la línea de combinar el trabajo institucional de «observación» especializada de la gestión del desastre del Prestige con movilizaciones ciudadanas, inevitablemente más puntuales, que sean capaces al mismo tiempo de respaldar aquel trabajo institucional sin dilapidar el alto capital simbólico que NM ha acumulado en su corta vida.

A Coruña, 7 de julio de 2003

47. De cara a las autonómicas de 2005 es muy posible que la inevitable desaparición de Fraga y su liderazgo carismático reste apoyos al PP, sea cual sea su sucesor. La sucesión, al mismo tiempo, va a agravar las hostilidades internas del PP gallego, dado el peso real que mantienen Cuiña y sus aliados Cacharro y Baltar —«barones» de Lugo y Ourense, respectivamente, y líderes del denominado «PP de la boina»—, quienes sin duda intentarán recuperar terreno frente a Madrid, el «PP del birrete» (y, cabría añadir, del cilicio). El dominio de esta segunda ala puede generar un desgaste de la base socio-electoral del PP por su lado más autonomista y centrista, cuyos votos pueden ir a cualquiera de las otras dos grandes opciones del mapa político gallego, BNG y PSOE, para configurar una alternativa progresista de gobierno en las próximas elecciones autonómicas de 2005.

Democracia participativa en las organizaciones y los límites del asamblearismo

XAVIER GODÀS

La discusión sobre cómo encontrar un modelo de funcionamiento democrático dentro de las organizaciones, que permita el máximo de participación en los procesos de toma de decisiones, se mantiene vivo aproximadamente desde hace cuatro décadas. El debate surgió con fuerza a partir de las ya míticas revueltas sociales de 1968, cuando se empezó a hablar de los nuevos movimientos sociales, y posteriormente se ha ido extendiendo a otras formas de organización cívica o política. Por ejemplo, es algo habitual que hoy en día los partidos políticos progresistas compitan, con mayor o menor éxito, en mostrar a la ciudadanía sus procedimientos democráticos internos.

Frecuentemente, esta discusión se ha presentado como una evolución desde una *democracia representativa* hacia una *democracia participativa*, pero la confusión llega cuando intentamos definir qué entendemos por democracia participativa, y más aplicada a la manera de organizarse de asociaciones y movimientos.

Históricamente hablando, el origen del interés por neutralizar las relaciones autoritarias en las organizaciones se encuentra en una autocrítica de la izquierda. Fijémonos en el hecho de que los movimientos y las organizaciones políticas heredadas de las reivindicaciones de finales de los años sesenta del siglo anterior (por ejemplo, el ecopacifismo, el feminismo contemporáneo o el movimiento autónomo) han sido ideológicamente agrupadas, tanto por activistas como por científicos sociales, en enunciados tales como «nueva izquierda», «izquierda alternativa», «izquierda libertaria» o «antiautoritaria» e «izquierda radical».

A priori, resulta evidente que todos los enunciados señalados comparten dos ideas básicas: una primera, que los nuevos movimientos sociales se inscriben en la tradición política de la izquierda; y una segunda, que rechazan los componentes autoritarios que en ocasiones la han marcado. La idea de fondo que unifica las otras dos es que los nuevos movimientos sociales desarrollan una crítica a la democracia representativa, sobre la base del argumento de que no garantiza la participación sistemática ni el control de la ciudadanía sobre los quehaceres públicos. Consecuentemente, los partidos parlamentarios son percibidos como máquinas burocratizadas, de bajo o nulo contenido democrático. Más concretamente, estos movimientos consideran insatisfactorio el método de movilización política propio de los partidos de izquierda tradicionales, fundamentalmente el de los comunistas, porque entienden que instrumentaliza las reivindicaciones populares.

La distinción entre la izquierda y la derecha, empero, no deja de ser significativa. Lo que se pretende enmendar son los paradigmas leninista y socialdemócrata de movilización política, es decir, los provenientes de la izquierda de buena parte del siglo anterior: del primero, se rechaza la idea de partido como organización de profesionales revolucionarios de vanguardia, orientada instrumentalmente a la toma del poder; del segundo, se rechaza su vinculación casi exclusiva a la gestión correctiva del capitalismo. Como contrapartida, los nuevos movimientos sociales se inclinarían por fórmulas organizativas descentralizadas y participativas, subrayando así el objetivo de autoorganizar la sociedad civil por encima del propósito de tomar el poder. Notad, empero, que este objetivo genérico no desconsidera la política en sí misma, sino que enfatiza su dimensión ético-participativa contra la concepción que la reduce a un simple ejercicio de correlación de fuerzas.

Esta voluntad de democratizar la acción política tiene la virtud de habernos obligado a fijar la atención en las estructuras organizativas —tanto de los movimientos como de otro tipo de organizaciones— y, más en concreto, en el procedimiento de toma de decisiones que las definen. Ahora bien, la cuestión que nos interesa resolver es: ¿cómo decidir qué hacer sin que alguien en particular, o un grupo reducido, tome decisiones de manera más o menos unilateral?

Algunos han pretendido resolver el problema atacando la existencia de cualquier órgano de representación. El espacio de comunicación para contrarrestar o neutralizar la representatividad radicaría en la asamblea plenaria. Sus defensores más destacados promulgan una política contra toda dirección instituida: se trata del asamblearismo o democracia directa, que se opondría al supuesto autoritarismo de la democracia representativa, a la vez que permitiría garantizar un considerable aumento de la capacidad crítica de las perso-

nas; y esto, a su vez, redundaría en un mayor convencimiento en el momento de comprometerse en la acción.

Es necesario matizar que no nos estamos refiriendo a las asambleas como órganos de gobierno de asociaciones, que tienen un mandato estatutario, eligen unos cargos y sancionan unos programas. Tales órganos asociativos se complementan con unos cargos electos y unos sistemas periódicos de rendición de cuentas del órgano u órganos ejecutivos. A lo que nos referimos es a la asamblea plenaria como órgano único de decisión de un colectivo. Es el modelo del asamblearismo, que hace que la reunión donde se reúnen la totalidad de los componentes sea la única instancia con capacidad de decidir hasta su propia convocatoria. Para evitar confusiones en este texto, a partir de ahora cuando hable de *asamblea* me referiré a este órgano único de los movimientos asamblearios.

Frente a la propuesta de los movimientos asamblearios, nos debemos preguntar: ¿La asamblea es condición suficiente para que sus integrantes dispongan de capacidad crítica? ¿Y permite, en cualquier situación, asegurar la eficiencia de la acción? Con relación a ambas cuestiones, en lo que sigue consideraré los aspectos positivos del asamblearismo, y luego me aplicaré a indicar algunas de sus consecuencias negativas.

Organizaciones radicalmente democráticas

Joyce Rothschild-Whitt explica muy bien¹ qué implica el asamblearismo en el terreno organizativo. Rothschild-Whitt estudia las organizaciones que se caracterizan por rechazar la justificación de la autoridad que se desprende de los órganos representativos, y las denomina «democrático-colectivistas». Veamos cuáles son sus dos características fundamentales.

Característica primera: *no hay autoridad fuera de la asamblea*. En las organizaciones de carácter asambleario, la autoridad no deriva de individuos particulares, sean funcionarios, expertos o dirigentes formalmente instituidos, sino del conjunto de miembros comprendidos en la organización. Esto presu-

1. Rothschild-Whitt, Joyce (1979): «The Collectivist Organization: an Alternative to Rational-Bureaucratic Models», en: *American Sociological Review*, 44, Madison (EUA), pp. 509-27. También se puede encontrar una lectura provechosa que trata cuestiones como las aquí expuestas en: Laraña, Enrique y Joseph Gusfield (eds) (1994): *Los nuevos movimientos sociales: de la ideología a la identidad*, CIS, Madrid; Riechmann, Jorge y Fernández Buey, Francisco (1995): *Redes que dan libertad. Introducción a los nuevos movimientos sociales*, Paidós, Barcelona.

pone que éstos aprendan a autodisciplinarse de manera que se desarrolle una dinámica de grupo cooperativa, sin que sea necesario el establecimiento de posiciones jerárquicas en la organización. Al no existir relaciones jerárquicas, las decisiones tomadas son legítimas *sólo si surgen de un proceso deliberativo igualitario*, un proceso que requiere para llegar a alguna conclusión de un consenso sobre las decisiones a tomar. De acuerdo con el modelo, quedan poco definidas las situaciones sobre las que se deben tomar acuerdos: tanto las decisiones como las operaciones que se tengan que efectuar deberán considerar en cada momento la particularidad del caso tratado. De esta manera, se pretende disminuir los ámbitos de la actividad organizacional sujetos a reglas de gobierno explícitas que puedan estandarizar la toma de decisiones.

Característica segunda: *el método es también la finalidad*. El proceso deliberativo igualitario implica que el funcionamiento interno de la organización tenga como guía principal la orientación a un valor supremo, que delimita las convicciones morales de los participantes. En este contexto, la estructura de la organización tiende a la horizontalidad. Fijémonos en algunos de sus rasgos más importantes. Uno: la minimización de cualquier tipo de diferenciación interna, según el objetivo de bloquear las tendencias a la jerarquización de posiciones (y se enfatiza, especialmente, la desdiferenciación entre trabajo manual e intelectual). Otro: los procedimientos de rotación en las posiciones que impliquen una relativa concentración de responsabilidad o protagonismo individual, como las de portavoz, delegado o coordinador. También, el establecimiento de equipos de trabajo («comisiones», en lenguaje activista) dentro de las cuales todo el mundo es responsable por igual de la tarea a realizar. Y finalmente, la «desmitificación» del conocimiento especializado y el intento de difundirlo entre el grupo. En relación con el tipo de miembros que buscan estas organizaciones, lógicamente se valoran las cualidades congruentes con la orientación de valor de la organización en sí, y se conjuga la capacidad de iniciativa con un espíritu colaborador en tanto que cualidad excelente. Sobre esta base, se trabajan atributos tales como las habilidades de coordinación, organización y dinamización de grupos a partir de procedimientos no imperativos.

En resumen, para lo que aquí nos interesa, la característica crucial que unifica las dos precedentes sería que las organizaciones asamblearias constituyen un fin en sí mismas: el sistema de relaciones que se establece en su interior sigue los mismos preceptos normativos que las formas alternativas de organizar la sociedad que propone el grupo. El lema podría ser: «no vale declarar que se aspira a la igualdad y, en cambio, establecer organizaciones autoritarias». Los partidos comunistas de buena parte del siglo XX constituyen un ejemplo claro de las incongruencias que las organizaciones asamblearias pretenden evitar.

A priori, pues, el aspecto más positivo del funcionamiento de los movimientos asamblearios es su carácter pedagógico: si la información fluye por el conjunto de la organización y circula horizontalmente, entonces la asamblea proporciona la posibilidad de discutir fundamentadamente, participar críticamente en la toma de decisiones, comprender cabalmente la complejidad de las problemáticas tratadas. El resultado máspreciado del proceso asambleario es que refuerza el convencimiento de los implicados sobre la acción que desarrollan, y lo que es todavía más importante: consolida la democracia como un referente político ideal, tanto como valor a seguir como en su vertiente procedimental.

Ahora bien, el asamblearismo como método de toma de decisiones también tiene sus límites, que debemos considerar para tenerlos en cuenta. Uno de preliminar es el más evidente: no puede haber democracia directa cuando el colectivo es demasiado grande como para que en el debate puedan participar todos. Un grupo de muchos miles de personas, por ejemplo, no puede formar una asamblea donde se tenga en cuenta el parecer de cada una. Más específicamente, destacaré tres límites. Los dos primeros tienen que ver con condiciones equívocamente asamblearias, es decir: (a) cuando nos encontramos en un escenario donde se ejercen relaciones de poder opacas, o (b) cuando la asamblea acaba limitando las capacidades y neutralizando el carácter proactivo de determinados participantes. Finalmente, el tercero de los límites pone encima de la mesa un problema recurrente: (c) ¿es posible mantener sin restricciones el funcionamiento asambleario cuando las personas implicadas en la acción son muchas?

Con todo querría llegar a dos conclusiones: el asamblearismo no agota las relaciones democráticas ni constituye el paradigma de la democracia participativa, sino que es una parte de la misma; y además, el proceso asambleario no se libra de contener en ocasiones dinámicas paradójicamente antidemocráticas.

Liderazgos opacos contra liderazgos legitimados

La primera limitación del asamblearismo nos permite abordar un tema que la izquierda no ha sabido tratar desdramatizadamente: el del liderazgo. Parece evidente que en todo tipo de acción colectiva hay personalidades que, por un motivo o otro, destacan por determinadas cualidades, sea por los conocimientos que tienen, por una alta capacidad organizativa y de trabajo, o porque presentan una alta sociabilidad. Pero también hay individuos que destilan con naturalidad una cualidad complementaria, aunque bastante más intangible que las precedentes: el carisma. Los individuos carismáticos pueden re-

unir todas o algunas de las cualidades de la dinámica de grupos que facilitan la acción, pero el hecho de que destaquen radica en su capacidad emprendedora, imaginativa e influyente. ¿Quién no ha conocido a alguien que sabe cómo organizar una discusión, facilitar los consensos y los acuerdos, o que transmite confianza mostrando siempre su presencia en la primera línea de acción?

En una relación democrática es ineludible el control del colectivo sobre las personalidades influyentes, que se fundamenta en extender entre los miembros del grupo la actitud crítica y en la circulación horizontal de la información. Esta actitud facilita que quien presenta cualidades de liderazgo se vea obligado a saber delegar y dejarse controlar, a la vez que contribuye positivamente a la dinámica de grupo gracias a sus cualidades proactivas. Estamos hablando del liderazgo legitimado por el colectivo. Desde este punto de vista, resulta más positivo «institucionalizar» las diferentes tareas de mando de la acción colectiva que negarlas. Si existen las figuras del portavoz, del coordinador o del responsable de la comisión de trabajo, por poner algunos ejemplos, al grupo le resultará más fácil controlar a los que desarrollan tales tareas: les podrán pedir cuentas o, si se da el caso, substituirlos. La excelencia democrática de los órganos de representación deriva de la base consensual de la autoridad, que en este sentido denota legitimidad para ostentar el cargo y capacidad para desarrollar las tareas que se le asocian.

Vale la pena aclarar, no obstante, que el tema del liderazgo es complejo y de difícil discusión desde la óptica asamblearia, ya que se cree incorrecto asumir la función de tales personalidades en el marco de un grupo. El problema se puede formular muy sintéticamente: *si asumimos la existencia de líderes, entonces no todos somos iguales*. Esto se vive mal, hasta el punto de que determinadas asociaciones o movimientos sociales, al mismo tiempo que niegan directamente la función del liderazgo, paradójicamente facilitan el surgimiento de situaciones antidemocráticas que bloquean el proceso asambleario. Voy a explicarme.

Cuando se niega de forma «oficial» que haya personas más influyentes que otras, lo que generalmente se consigue es substraer del control colectivo a aquellos individuos que, visiblemente, determinan la dinámica de la acción colectiva. Ahora bien, en lugar de generar más democracia interna, cuando esto sucede resulta fácil establecer relaciones de dominación que minan el carácter democrático de la asamblea; porque la dominación, que en semejantes situaciones se da aunque se niegue, se vuelve opaca en su forma exterior, mientras que en el fondo puede llegar a ser asfixiante. La supuesta ausencia de liderazgo permite que las riendas de la dinámica grupal acaben en manos de alguien difuso sobre quien resulta difícil incidir. Hablamos del liderazgo

opaco de una persona o personas que, con la excusa del *todos somos iguales*, puede controlar información y no difundirla, y puede jugar instrumentalmente con las personas que componen el colectivo según el propósito de perseguir sus propios objetivos e intereses —incluidos los de reconocimiento. En síntesis, la negación en el ámbito discursivo de la existencia de liderazgos puede llevar, contra lo que en principio se pretende, a la utilización de una posición de poder no reglamentada por el grupo, y que no necesariamente tiene que ser bondadosa por el hecho de surgir de un marco asambleario.

Fijémonos, pues, en un detalle interesante: en el marco de una asamblea puede darse una relación democrática o autoritaria. A diferencia de lo que señalábamos en el caso del liderazgo legitimado, un proceso asambleario puede implantar un liderazgo opaco que comporte una relación autoritaria, incontrolable, un liderazgo de hecho basado en cafés y cenas con individuos seleccionados, mantenido gracias al control de la información que no se hace circular.

Dicho llanamente: si se desestima la institucionalización de órganos de representación, por mínimos que sean, el proceso asambleario depende absolutamente de la buena fe de las personalidades influyentes. Estaremos de acuerdo, sin embargo, en que la democracia es un bien suficientemente valioso como para que no tenga que depender absolutamente de la buena o mala voluntad de los individuos. Es necesario tener en cuenta que los liderazgos opacos que generan relaciones de dominación a veces son difíciles de resolver, porque por regla general traban el ejercicio de su poder en una malla de relaciones personales que puede llegar a incluir el ámbito de la intimidad. Aun más, si la función opaca del líder deviene hegemónica, la dinámica del grupo puede empeorar y caer en un modelo de funcionamiento parecido al de una secta. Esta condición es perceptible cuando el colectivo, siguiendo los pasos de alguien, abandona la actitud crítica y autocrítica, delega la propia capacidad de pensar en la de otra persona, adopta una actitud vigilante en relación con los demás sobre su actitud respecto de las personas influyentes, o «traduce» líneas de pensamiento complicadas en simples consignas o ideas esquemáticas y dogmatizadas.

¿Todo el mundo es igual en la dinámica asamblearia?

Otro problema es que cuando la retórica antiautoritaria demoniza la existencia del liderazgo legitimado, es decir, de la persona dinamizadora, proactiva, que quiere y puede asumir responsabilidades, se puede dar una situación en la que aquellas personas con cualidades de liderazgo decidan autocontenerse por temor a parecer interesadas o con afán de protagonismo. Así se bloquean

aportaciones que podrían ser altamente positivas para el funcionamiento del grupo. Si la capacidad de iniciativa llega a estar demonizada, el grupo toma una orientación que puede bloquear el proceso de toma de decisiones y la acción misma. Las discusiones se trivializan y la ausencia de responsabilidades delimitadas deshace el compromiso individual en relación con los demás. En tales situaciones se acostumbra a generalizar un ideal igualitarista ingenuo que no discrimina entre las diferentes habilidades de los miembros de un grupo.

Por otra parte, el asamblearismo capta bastante mal las desiguales condiciones de los potenciales participantes en la asamblea. Para que la participación pueda calificarse de democrática hay que tener en cuenta las desiguales disponibilidades de los miembros del grupo, dadas las diversas condiciones de vida que acostumbran a tener las personas. Principalmente, hay que facilitar la participación de aquéllas que disponen de menos tiempo para implicarse. Generalmente, situaciones como la jornada de trabajo o las obligaciones familiares imposibilitan una implicación más estrecha de algunos individuos con relación a otros.

Si la asamblea es el único órgano de decisión, se puede generar la situación de que quien más horas esté dispuesto a estar sentado en una reunión sin orden del día preestablecido, más capacidad de incidencia tenga. Se genera así la paradoja según la cual en los procesos de toma de decisión únicamente pueden participar de forma sistemática individuos relativamente libres de otros compromisos, mientras que se desmerecen aportaciones menores de personas con escasas disponibilidades horarias.

Por otra parte, vale la pena decir que el mito del «basismo», de la espontaneidad en el momento de actuar, no presenta ninguna alternativa a la política convencional porque resulta extremadamente ineficaz. El espontaneísmo es la antipolítica, la idea ingenua según la cual la organización y cualquier órgano de representación destruyen la capacidad creativa de los movilizados. Fijémonos en la evidencia histórica de que todos los movimientos sociales que más han influido en el ámbito de la política desde la II Guerra Mundial siempre estuvieron eficazmente organizados, desde el movimiento norteamericano por los derechos civiles hasta las movilizaciones europeas contra la proliferación de armamento nuclear de los años ochenta del siglo anterior. El mayo de 1968 en Francia o las movilizaciones contra la guerra del Vietnam en los Estados Unidos contaban entre sus filas con decenas de organizaciones que facilitaban las movilizaciones. Hoy mismo, es cosa de risa que los medios de comunicación insistan en afirmar el carácter espontáneo de las grandes manifestaciones contrarias a la guerra de Irak, cuando en Barcelona, por ejemplo, la Plataforma que las ha impulsado ha constituido, en la práctica, el ámbito de coordinación de más de doscientas organizaciones de todo tipo.

Hay que superar el mito según el cual, contrariamente a las organizaciones estructuradas, estos movimientos salen «de la calle» a partir de ciudadanos anónimos, como por generación espontánea. Así, en el caso de la protesta contra la guerra de Irak, la mayoría de personas dinamizadoras de las movilizaciones centrales, o bien son responsables de otras organizaciones, o bien son antiguos dirigentes de algunos movimientos desarrollados anteriormente.

Asamblearismo y movimientos sociales

Vamos ahora a tratar el tercero de los límites que indicábamos, los problemas de ineficiencia del asamblearismo cuando desarrolla la acción frente a un público ciudadano con el propósito de recabar apoyos. Fijémonos, por ejemplo, en un dilema que aparece sistemáticamente en la dinámica de los movimientos sociales. El impacto o éxito de una determinada campaña es la consecuencia de la capacidad cuantitativa y cualitativa de movilización ciudadana conseguida. Pero frecuentemente el incremento del número de participantes en las acciones no guarda una relación automática con la total asunción, por parte de éstos, ni del discurso de base del movimiento ni del conjunto de sus métodos. Entonces, debe hacerse frente a la opción de «pragmatizar» tanto el discurso como las decisiones prácticas, a fin de aumentar el número de participantes, o bien mantenerlos sin alteraciones para garantizar una relación de congruencia bien trabada entre las finalidades que se declaran y lo que se realiza en la práctica.

Fijémonos en los siguientes dos ejemplos para verlo más claro. El movimiento de objetores insumisos planteó acabar con el servicio militar sin contar exclusivamente con sus propias fuerzas: desarrolló una tarea intensa para extender el mensaje antimilitarista entre la ciudadanía, como también negoció con otras organizaciones, incluidos los partidos parlamentarios, con el propósito de favorecer sus objetivos. El movimiento *squatter* u okupa, en cambio, presenta como prioridad defender «espacios liberados» de la especulación inmobiliaria, donde sus ocupantes puedan realizar sin restricciones sus inquietudes ideológicas o estilos de vida; pero por regla general, parten de posturas absolutamente innegociables que les dificultan la relación con otros actores sociales.

Ambas opciones —que, con mucha simplificación y un poco de broma, podríamos caracterizar como «pragmática» y «congruente»— en el momento de actuar tienen efectos diferentes en su estructura organizativa, efectos que determinan el grado en que el procedimiento asambleario de toma de decisiones constituye un método operativo.

La opción primera, la del «pragmatismo», presenta resultados organizativos suficientemente conocidos: a mayor número de participantes en un movimiento social, toman más importancia los aspectos organizativos formales; es decir, aumenta la necesidad de algún sistema de representación, así como de un mayor grado de disciplina interna vinculada a las tareas de coordinación de la acción. En tales circunstancias, constituye un problema el tiempo que requieren las relaciones democráticas basadas en el consenso asambleario. Ciertamente, tanto la comunicación horizontal como la toma de decisiones por consenso producen un elevado grado de compromiso moral con el grupo, así como una mayor adaptación de éste a las soluciones de problemas complejos; pero el proceso decisional resulta lento, hasta el punto de que se da el peligro de bloquear el potencial de movilización. Por lo tanto, la cuestión relevante sería: ¿estamos substancialmente de acuerdo en lo fundamental como para que las decisiones que se tomen en el día a día puedan recaer en algún tipo de órgano de representación?

La opción segunda, la de la «congruencia», presenta el problema de que el modelo del consenso, en condiciones de movilización política, produce un efecto con un potencial democrático discutible: la generación de situaciones donde se neutralizan las diferencias de opinión para no hacer peligrar la actividad que se lleva a término. Dicho de otra manera: el impulso sostenido de la acción unificada únicamente es posible si los individuos están a priori substancialmente de acuerdo en todo. Esta segunda opción garantiza, en principio, una mayor capacidad de combate que la primera, pero tendría como probable consecuencia que el grupo tomase un carácter exclusivo o autorreferencial, que expresase más un ideal de vida que una actividad política orientada al cambio social. Aquí la cuestión relevante sería: ¿qué es prioritario, conseguir los cambios sociales que se proclaman o mantener intacta nuestra idea de las relaciones grupales?

En síntesis, el dilema quedaría expresado de la siguiente manera: el «peligro» de la opción «pragmática» radicaría en crear una lógica organizacional no plenamente asamblearia, aunque adquiriendo una mayor capacidad de respuesta en un entorno político dinámico; mientras que el «peligro» de la opción «congruente» se expresaría en el hecho de que probablemente resultará ineficaz una organización de la acción colectiva que esté muy ajustada normativamente a las finalidades declaradas, no obstante el alto nivel de combatividad que pueda ofrecer. Pero, hay que decirlo, el movimiento de actores insumisos (que en ningún caso puede ser calificado de moderado, «reformista», o no suficientemente democrático en lo que respecta a sus objetivos y relaciones internas) fue un factor decisivo en la superación del sistema de levas, aunque el militarismo no haya desaparecido de escena; en cambio, la influencia del movimiento okupa para neutralizar la especulación inmobilia-

ria es, hoy por hoy, muy residual, aunque se haya producido en alguna medida una discusión pública en relación con el problema de la vivienda.

Conclusión: la democracia participativa bien entendida

Llegados a este punto, propongo retener del conjunto de lo dicho la siguiente conclusión. La deliberación asamblearia constituye un principio democrático ineludible que ninguna organización que se considere a sí misma democrática puede omitir. Esto significa que todos los miembros de una organización deben poder participar del proceso de toma de decisiones, incluida la deliberación. Las asambleas como órganos de gobierno de las asociaciones tienen esta función, permiten a todos los miembros participar y están reguladas por unas normas que dan garantías a los participantes. Igualmente, estas normas deben garantizar también el rendimiento de cuentas de las personas elegidas para llevar a buen puerto una responsabilidad dada.

Los sistemas de participación democrática necesitan de una revisión constante, razón por la cual resulta necesario seguir profundizando en métodos que permitan un mayor acceso a la información, una participación más plena en los procesos deliberativos y una mejor capacidad de respuesta a retos inmediatos. Las nuevas tecnologías están siendo ya un laboratorio interesante para profundizar en estas vías.

Ahora bien, profundizar en el funcionamiento democrático de una organización no significa extender el método asambleario a toda dinámica que ésta pueda generar. Llegar a acuerdos gracias a un proceso deliberativo bien informado es importante en el momento de fijar el programa general de actuación y tomar decisiones que afecten el carácter moral de la organización. Pero la dinámica cotidiana de la organización debe seguir criterios de eficiencia y eficacia si pretende favorecer algún tipo de cambio social, y no rediscutir de nuevo lo ya discutido y aprobado según un proceso circular que conduce al bloqueo de la acción. Es en este sentido que los órganos de representación adquieren relieve: no substituyen la deliberación asamblearia, sino que la concretan dotándola de eficiencia. La democracia participativa debe ser, en alguna medida, un punto intermedio, dinámico, entre la democracia representativa estricta, donde la participación se reduce a la votación y la delegación, y el asamblearismo sistemático y sin restricciones, donde algunos pueden mandar efectivamente sin tener que rendir cuentas a nadie.

Los derechos en la globalización y el derecho a la ciudad

JORDI BORJA

Los derechos humanos, un desafío global¹

La globalización ya no es lo que era, o lo que pensamos en la década de los noventa lo que era o podría ser. Ni los optimistas ni los pesimistas, ni los neoliberales ni los críticos fuimos suficientemente lúcidos para apreciar lo que se nos venía encima. Este inicio de siglo es también el fin de la ingenuidad global. Hay que agradecer al actual gobierno de EE UU, precisamente el que lidera un presidente del cual hay razones serias para pensar que es una mezcla de idiota y fanático, con pulsiones criminales incontrolables al tiempo que es utilizado por intereses económicos tan poderosos como poco confesables, el que haya desvelado cruelmente la realidad de la globalización tal cual es hoy, y por ahora no conocemos otra.

Pensar el mundo actual a partir de la dicotomía entre excluidos e incluidos, propia de la visión crítica o pesimista de la globalización, sin ser incorrecta no parece la mejor manera de entenderlo. ¿Los iraquíes o los palestinos son excluidos? Más bien ocupados, oprimidos, pero no excluidos. ¿Los pueblos más pobres y atrasados acaso no sufren por estar globalizados, por ejemplo por la utilización de la mano de obra infantil y aparecen como excluidos por no ser demanda solvente para los mercados, por ejemplo de los medicamen-

1. Además de las bibliografías citadas, ver los siguientes documentos: Charte Européenne de la Citoyenneté (1996), la Charte Urbaine Européenne (1993), la Charte Européenne des femmes dans la Cité (1994), box 2 sobre la Carta Europea de Salvaguarda de los Derechos Humanos en la Ciudad (2000), la Declaración de los Derechos Humanos de NN UU (1948) y el Informe sobre los Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Porto Alegre (Observatorio DESC, Barcelona 2003).

tos? ¿Los inmigrantes, sin derechos ni papeles, son excluidos o ejército de reserva de mano de obra barata y sobreexplotada? Los globalizadores excluyen pueblos y territorios sólo aparentemente, como hizo el capitalismo salvaje primero con las masas populares expulsadas de las zonas rurales y luego con las colonias, sin olvidar las diversas formas de esclavismo.²

Tampoco es ahora muy útil pensar la globalización como una redistribución de cartas a nivel mundial en la que pueblos y territorios tienen una nueva oportunidad para situarse y conquistar algunas posiciones o nichos ventajosos. ¿Las ciudades europeas mediterráneas, como Barcelona, que han apostado por hacer de este mar un lugar de intercambio económico y cultural privilegiado cómo se podrán resituar después de las dos guerras del Golfo y de la ocupación norteamericana? ¿Las secuelas de la guerra del 2003 no afectarán por ejemplo a las posibilidades de reposicionarse en los mercados internacionales de países tan potentes como Francia y Alemania?³

La globalización hoy no es solamente un proceso económico-financiero y cultural-comunicacional propiciado por la revolución digital. Es también una realidad político-militar imperial, una dominación ejercida por el gobierno de la única superpotencia existente, que hoy no tiene contrapeso alguno y que ha unido una cruzada mesiánica a la realización descarnada de los negocios por parte de grupos económicos multinacionales.

Ante esta realidad la tendencia que puede manifestarse más espontáneamente es la de la reacción defensiva, proteccionista, aislacionista, que encontrará en los valores «nacionalistas», «localistas», «identitarios» o «indigenistas» sus bases de cohesión y legitimación. Una reacción que parece tan lógica como inevitable en muchos casos y que hoy se expresa, entre otras formas, en la crisis de legitimidad de los gobiernos estatales y de los partidos políticos.⁴

No deben desmerecerse los aspectos positivos y renovadores de estas reacciones que como ya hemos visto antes revalorizan territorios y colectivos sociales, tanto en ámbitos urbanos como regionales. Aunque también son propicias a la recuperación de valores culturales y formas de poder anacrónicos y escasamente democráticos y estimulan en ocasiones actitudes xenófobas o racistas. Y, sobre todo, no nos parecen suficientes para afrontar los efectos perversos de la globalización unilateral actual.

2. Harvey, D. (2003).

3. Borja, J. (2003)

4. Castells, M. (2003). Ver también box 1 sobre legitimidad política e identidad territorial.

La globalización imperial-capitalista nos plantea el desafío intelectual de revalorizar, reconstruir y ampliar el universalismo democrático que pugna por ser cultura común de la humanidad desde el siglo XVIII hasta nuestros días. No se trata de inventar ni de repetir fórmulas eurocentristas, o de maquillar el «american way of life», como los macdonalds se maquillan con algunos productos típicos del lugar. La cuestión es renovar la cultura de los derechos humanos, definir unos valores básicos como horizonte común posible de la humanidad y hacer todo lo necesario para que se formalicen en los marcos jurídicos internacionales, estatales y locales o regionales.

Aunque no sea el tema específico de este texto nos permitimos seguidamente apuntar siete líneas de desarrollo democrático de los derechos humanos en la globalización que en gran parte se inspiran en la reflexión de un grupo de trabajo del Institut de Drets Humans de Catalunya.⁵

- a) Los elementos básicos de la vida, definidos desde la Edad antigua, parecen hoy más necesarios que nunca: el agua, el aire, la tierra y el fuego (la energía). Estos bienes, en el marco de la globalización, deben ser de propiedad pública, no ser objeto de comercialización y su acceso debe estar garantizado a todos los habitantes del planeta. Lo cual supone:
 - la socialización del suelo (sin perjuicio que se pueda arrendar para usos específicos como el agrícola o para cooperativas de viviendas);
 - la propiedad pública del agua, gestionada por agencias internacionales independientes, y su distribución gratuita para la cobertura de las necesidades básicas (y la venta para otros usos);
 - la protección de la calidad aire, prohibiendo la venta del derecho a contaminar, por medio de agencias internacionales con capacidad de gestión y de sanción;
 - la socialización de la propiedad de todas las empresas productoras y distribuidoras de energía y el acceso a la misma de la población mundial con los mismos criterios que el agua.
- b) El derecho a la justicia, a la seguridad y a la paz para todos los pueblos e individuos. Supone combinar el acceso universal a tribunales internacionales y la potenciación de todas las formas de justicia local (incluida la

5. El grupo de trabajo sobre derechos emergentes del IDHC se ha constituido para elaborar una propuesta de diálogo por encargo del Forum Universal de las Culturas (Barcelona 2004). Este grupo está presidido por el director del IDHC, José Manuel Bandrés y por Victoria Abellán, Jordi Borja, Victoria Camps, Ignasi Carreras, Montserrat Minobis, Daniel Raventós, Xavier Vidal Folch y Joan Subirats, siendo Rosa Bada la secretaria técnica del grupo.

mediación, conciliación, arbitraje, juicios por equidad, etc.). La seguridad y la paz deben estar garantizadas internacionalmente por organismos del sistema de NN. UU. y las acciones unilaterales de intervención por la violencia o la coacción deberán ser impedidas o sancionadas.

- c) La protección y el desarrollo de los derechos individuales y colectivos es posiblemente una de las cuestiones más complejas, puesto que en nuestra época, por una parte, los valores universales (más o menos formalizados en Cartas y tratados) son más actuales que nunca y en ellos se expresa la progresiva valoración de las libertades, derechos y autonomías personales, que corresponde a la nueva complejidad de las sociedades urbanas y a la personalización o individualización de la vida social. Por otra, la globalización genera una reacción revalorizadora de las identidades nacionales y, como ya dijimos, de las locales y regionales especialmente. Las sociedades locales hoy, para complicar más la cuestión, tienden a ser multiculturales, lo que produce una compleja imbricación de los derechos individuales y los colectivos.

Solamente la formalización jurídica de los valores universales podrá permitir discriminar lo que son diferencias culturales de comportamientos atentarios a los derechos individuales. Las democracias del siglo XXI son necesariamente plurales y los ordenamientos legales (estatales o supraestatales) deben garantizar los derechos culturales y políticos, incluidos la autodeterminación o el autogobierno de cada colectividad. Pero paralelamente deben protegerse los derechos individuales de todas las personas que habitan un territorio, sea cual sea la identidad cultural dominante y la organización política peculiar del mismo.

- d) La igualdad de todas las personas que habitan un territorio requiere políticas positivas respecto a las personas que históricamente sufren discriminaciones de algún tipo, en especial las mujeres. La igualdad de género es un valor universal que no admite hoy que se cuestione. Así mismo las políticas públicas, las normas legales y las pautas culturales deben posibilitar la igualdad real de las personas «ancianas» y de los niños. En este caso consideramos que el niño debe ser sujeto pleno de derechos desde su nacimiento, sin perjuicio de la protección tutelar que pueda ejercer la familia durante su infancia.
- e) Los territorios y las colectividades humanas que los habitan tienen derecho al desarrollo, a permanecer en el lugar donde tienen memoria, vínculos y proyectos, a progresar según sus valores y las formas de vida que elijan. Aunque sean comunidades más pobres o más marginales respecto a los centros de poder. La globalización, como el viejo imperialismo, en

vez de facilitarles medios adecuados para ello tiende a destruir sus recursos materiales y culturales, a romper su cohesión interna y a provocar procesos disolutorios.

Ante todo hay que proclamar el derecho a la seguridad alimentaria, a la protección de la producción propia, a la garantía de acceso para todos a una producción diversificada y una dieta suficiente, a la libertad de exportación y a la supresión de aranceles (mucho más importante y justo que las «ayudas al desarrollo»). La preservación del entorno físico y cultural (que no sea un obstáculo para un progreso beneficioso para todos del territorio) es una garantía de futuro. Criterios similares deben aplicarse a territorios y colectividades enclavados en países desarrollados que sufren a la vez procesos agresivos y de abandono o relegación de los entornos.

- f) Los inmigrantes y otras poblaciones que sufren discriminación o marginación, especialmente las personas desocupadas o sin recursos económicos monetarios, deben ver reconocidos sus derechos mediante políticas activas de integración, mientras que ahora acostumbra a ser lo contrario. Son víctimas muchas veces de procesos globalizados respecto a los cuales no tienen posibilidad de defenderse y que provocan su emigración o su desempleo.

En relación al inmigrante es preciso garantizar algunos derechos básicos que ahora les son negados: la libre circulación, la igualdad político-jurídica en el país en el que fijen la residencia, el mantenimiento de su identidad cultural al tiempo que se facilita su inserción socio-cultural. Es el reconocimiento para cada persona del derecho a sobrevivir y a mejorar, a forjarse un proyecto de vida.

La población sin recursos económicos o sin empleo debe recibir siempre un «salario ciudadano» así como promover su inserción en programas de formación continuada o de apoyo a pequeños emprendimientos. Se puede discutir si el salario ciudadano debe generalizarse a toda la población o no, o si debe vincularse a participar en tareas sociales, pero no parece posible proclamar libertades y derechos para todos si una parte de la población no tiene recursos económicos que le proporcionen a la vez medios elementales de vida y autonomía individual.

- g) El derecho a la información. La globalización supone un enorme movimiento de informaciones en todas las direcciones pero las que muchas veces afectan a la mayoría de las poblaciones del mundo no les son accesibles. Las organizaciones sociales y cívicas de todo tipo, los centros de estudios y de investigación, los sindicatos y cooperativas, etc. deben po-

der acceder a las informaciones políticas, financieras o culturales que ahora están reservadas casi siempre a las minorías de poder económico o político. Las actuales tecnologías de comunicación lo permiten, los privilegios de los gobiernos y de los grupos económicos lo impiden.

Si los lectores permiten una licencia al autor nos parece que sería una buena iniciativa estimular a la humanidad a inventarse causas que se convirtieran en derechos. El derecho a ser diferente, el premio a la originalidad, el derecho a la tranquilidad de espíritu, o a que te dejen en paz, el derecho a no reunirse. Y el derecho a ser felices o a hacer la revolución. La que más guste, la que más les guste. (Un texto no es serio si el autor se lo toma muy en serio).

Volvamos al tema, a la ciudad, al derecho a la ciudad.

El derecho a la ciudad

En el texto que sigue proponemos un catálogo, obviamente no exhaustivo, de derechos urbanos como contribución a la renovación de la cultura política en el ámbito de la ciudad y del gobierno local. La legitimización de las demandas locales y la síntesis entre valores universalistas y prácticas políticas territoriales requiere la formulación de derechos que permitan desarrollar un combate democrático por la justicia en la ciudad.

1. *Derecho al lugar.* La gente tiene derecho a mantener su residencia en el lugar donde tiene sus relaciones sociales, en sus entornos significantes. O a tener otro de su libre elección. Todas las personas que viven en un lugar que han contribuido a construir, en el que están arraigadas y que proporciona sentido a su vida, deben poder continuar viviendo en él y tienen derecho al re-alajo en la misma área si ésta se transforma por medio de políticas de desarrollo urbano o de rehabilitación de hábitats degradados o marginales. Las autoridades locales protegerán a las poblaciones vulnerables que puedan sufrir procesos de expulsión por parte de las iniciativas privadas.
2. *Derecho al espacio público y a la monumentalidad.* La ciudad es hoy un conjunto de espacios de geometría variable y de territorios fragmentados (física y administrativamente), difusos y privatizados. El espacio público es una de las condiciones básicas para la justicia urbana, un factor de redistribución social, un ordenador del urbanismo vocacionalmente igualitario e integrador. Todas las zonas de la ciudad deben estar articuladas por un sistema de espacios públicos y dotadas de ele-

mentos de monumentalidad que les den visibilidad e identidad. Ser visto y reconocido por los otros es una condición de ciudadanía.

3. *Derecho a la belleza.* El lujo del espacio público y de los equipamientos colectivos no es despilfarro, es justicia. Los programas públicos de vivienda, infraestructuras y servicios deben incorporar la dimensión estética como prueba de calidad urbana y de reconocimiento de necesidad social. Cuanto más contenido social tiene un proyecto urbano, más importante es la forma, el diseño, la calidad de los materiales...
4. *Derecho a la identidad colectiva dentro de la ciudad.* La organización interna del espacio urbano debe facilitar la cohesión sociocultural de las comunidades (barriales, de grupos de edad, étnicas, etc.). La integración ciudadana es más factible si las personas están también insertas en grupos referenciales próximos. La ciudadanía es pluridimensional y requiere de integraciones colectivas múltiples, bien para adherir, o participar o confrontarse. Para los «excluidos» la integración grupal conflictiva es indispensable para conseguir su reconocimiento.
5. *Derecho a la movilidad y a la accesibilidad.* Hay que tender a igualar las condiciones de acceso a las centralidades y la movilidad desde cada zona de la ciudad metropolitana. Estos derechos son hoy indispensables para que las llamadas libertades urbanas o posibilidades teóricas que ofrece la ciudad sean realmente utilizables. El derecho a moverse con facilidad por la ciudad metropolitana debe universalizarse, no reservarse a los que disponen de vehículo privado. La accesibilidad de cada zona es indispensable para existir para los otros.
6. *Derecho a la centralidad.* Todas las áreas de la ciudad metropolitana deben poseer lugares con valor de centralidad y todos los habitantes deberían poder acceder con igual facilidad a los centros urbanos o metropolitanos. En la ciudad metropolitana la articulación de los centros viejos y nuevos, el acceso y la recualificación de los centros históricos no sólo de la ciudad central sino también de las áreas periféricas, y la creación de nuevas centralidades polivalentes en sus funciones y mixtas en su composición social son elementos consubstanciales de la democracia urbana. Las centralidades marcan las principales diferencias entre las ciudades.
7. *Derecho a la conversión de la ciudad marginal o ilegal en ciudad de ciudadanía.* Las políticas públicas deben desarrollar políticas ciudadanas en los márgenes, legalizar y equipar los asentamientos, intro-

ducir en ellos la calidad urbana y la mixtura social, promover formas originales de participación ciudadana que se adapten a las características de poblaciones especialmente vulnerables. Los grandes proyectos de infraestructuras de comunicación o económicas que se realizan en las periferias, o los proyectos comerciales o inmobiliarios, deben ser siempre constructores de la ciudad, es decir, incorporar programas de vivienda y de urbanización básica así como elementos de monumentalidad.

8. *Derecho al gobierno metropolitano o plurimunicipal.* Sin perjuicio de la importancia democrática y funcional de los ámbitos nacionales o regionales (federalización de los Estados grandes o medianos) los ciudadanos tienen derecho, por razones de participación y de eficacia de la gestión pública, a un gobierno de proximidad. En las regiones más urbanizadas este gobierno debe tener una dimensión plurimunicipal o metropolitana. No se trata de suprimir los municipios, incluso los pequeños son ámbitos de representación y de gestión (a veces muy limitada) válidos. Pero casi siempre la gestión pública de proximidad requiere ámbitos de planificación y programación, de gestión de servicios costosos y de redistribución de recursos, que abarcan una diversidad de municipios. Debemos plantearnos la elección directa de estos gobiernos para que adquieran una mayor legitimidad democrática. Y para garantizar que se tienen en cuenta más a las personas que a los km².
9. *Derecho a la innovación política.* Los gobiernos locales y regionales deben recoger las demandas sociales para innovar en cuanto a sistemas electorales, mecanismos de participación, instrumentos de planeamiento y de gestión, etc. Por ejemplo, el planeamiento estratégico es una innovación política aún no recogida por el derecho público. Las relaciones entre Administraciones y entre actores públicos y privados deben incorporar cada vez más formas contractuales y no únicamente jerárquicas o compartimentadas.
10. *Derecho al acceso y al uso de las tecnologías de información y comunicación.* Las administraciones públicas no sólo deben proteger y garantizar este derecho sino también utilizar las TIC (tecnologías de información y comunicación) para democratizar realmente al acceso de todos a los servicios de interés general. Derecho al uso social de las actuales tecnologías de información y comunicación, especialmente en las relaciones con las Administraciones públicas (por ejemplo, ventanilla única). Barrios y viviendas tienen, todos, derecho al cableado.

11. *Derecho a la ciudad como refugio.* La ciudad debe asumir áreas de refugio para aquellos que por razones legales, culturales o personales necesiten durante un tiempo protegerse de los aparatos más represivos del Estado, en tanto que las instituciones democráticas no son capaces de protegerlos o integrarlos. Por otra parte estas áreas-refugios forman parte de la oferta urbana como aventura transgresora.
12. *Derecho a la protección por parte del gobierno de proximidad ante las instituciones políticas superiores y las organizaciones y empresas prestadoras de servicios.* El gobierno local debe actuar de defensor de oficio de los ciudadanos en tanto que personas sometidas a otras jurisdicciones y también en tanto que usuarios y consumidores. Esta protección por parte de los gobiernos locales deberá compensar la tendencia a la gestión indirecta o a la privatización de servicios y la consiguiente reducción de la función pública. Por otra parte la complejidad del consumo social aumenta la dependencia de los ciudadanos respecto a las empresas de servicios y de distribución comercial que muchas veces actúan en mercados oligopólicos.
13. *Derecho a la justicia local y a la seguridad.* Hoy la justicia es inaccesible para la mayoría de ciudadanos (por su coste, lentitud, etc.). La seguridad es vista principalmente en términos de represión y se plantean políticas de seguridad sobre todo cuando la «inseguridad» afecta a sectores medios y altos y a agentes y representantes de las instituciones. La justicia local, de base municipal, y la seguridad, como actuación concertada entre la institución local y la sociedad civil organizada, es hoy una demanda inaplazable de las mayorías ciudadanas, en la medida que puede asegurar una prevención más eficaz y si es preciso una reacción sancionadora más rápida.
14. *Derecho a la ilegalidad.* Paradójicamente tanto los colectivos sociales como, a veces, las instituciones locales deberían asumir el coste de promover iniciativas ilegales o alegales para convertir una demanda no reconocida en un derecho legal (por ejemplo, para obtener la reversión de uso de espacio público congelado por una institución estatal). Es decir, se trata de demandas que se pueden considerar «legítimas», aunque no sean legales. Los ejemplos son las sentencias absolutorias de los okupas, la tolerancia oficial en áreas urbanas delimitadas, respecto al tráfico de droga, el uso social efímero o definitivo de espacios privados con vocación pública, etcétera.
15. *Derecho al empleo y al salario ciudadano.* El ámbito urbano-regional debe garantizar un rol social que proporcione ingresos monetarios, es

decir, remunerados, al conjunto de la población activa. Además de las iniciativas generadoras de empleo (por ejemplo, servicios de proximidad, ecología urbana, etc.) es en este ámbito que se pueden experimentar y gestionar algunas formas de «salario ciudadano» y de «formación continuada» para todos. El espacio urbano-regional puede ser un marco de gestión de estas políticas entre gobiernos de proximidad y organizaciones sindicales y sociales.

16. *Derecho a la calidad del medio-ambiente.* Como derecho a una calidad de vida integral y como derecho a preservar el medio para las generaciones futuras. Este derecho incluye el uso de los recursos naturales y energéticos, el patrimonio histórico-cultural y la protección frente a las agresiones a la calidad del entorno (contaminaciones, congestiones, suciedad, fealdad, etc.).
17. *Derecho a la diferencia, a la intimidad y a la elección de los vínculos personales.* Nadie puede sufrir discriminación según sus creencias, sus hábitos culturales o sus orientaciones sexuales, siempre que se respeten los derechos básicos de las personas con las que se relacione. Todo tipo de vínculo personal libremente consentido por ejemplo, parejas homosexuales) merecen igual protección. No hay un modelo de vida personal o familiar que tenga derecho a más protección que otro.
18. *Derecho de todos los residentes en una ciudad a tener el mismo status político-jurídico de ciudadano.* Y por lo tanto igualdad de derechos y responsabilidades. La ciudadanía debe distinguirse de la nacionalidad (que en el marco de la globalización y de las uniones políticas supraestatales debe perder su actual carácter absoluto, es decir, la facultad de proporcionar un estatuto diferenciado). Es la relación con un territorio, con un entorno social, lo que debe determinar el estatuto legal.
19. *Derecho a que los representantes directos de los ciudadanos tanto institucionales (gobierno local y/o regional) como sociales (organizaciones profesionales, económicas, sindicales, territoriales, etc.) participen o accedan a las conferencias y organismos internacionales que tratan cuestiones que les afectan directamente.*
20. *Derecho de los ciudadanos a igual movilidad y acceso a la información transversal* similar al que poseen los capitales privados y las instituciones públicas. Derecho a acceder a todo tipo de información emanada de los organismos públicos y de las empresas de servicios de interés general. Derecho a la movilidad física completa en los espacios políticos y económicos supranacionales en los que se encuentran inmersos.

21. *Derecho de los gobiernos locales y regionales y de las organizaciones a constituir redes y asociaciones* que actúen y sean reconocidas a escala internacional. Este derecho incluye tanto el reconocimiento por parte de las NN UU y de todos sus organismos y programas como de organizaciones mucho menos transparentes (como la Organización mundial del comercio o el Banco Mundial). La regulación de los procesos globalizados no la realizarán únicamente los gobiernos de los Estados y los grandes grupos económicos como el fracaso del AMI acaba de demostrar.

Por una Declaración actualizada de los derechos y deberes de la ciudadanía. Los actuales procesos territoriales, como la segmentación entre municipios ricos y pobres, económicos, como las decisiones de agentes deslocalizados y culturales, como las nuevas formas de racismo y xenofobia, requieren un compromiso solemne de los poderes públicos de garantizar los derechos y deberes de los ciudadanos que incorporen los nuevos derechos urbanos. Véase las recientes cartas y declaraciones de Porto Alegre (1999) y Paris–St. Denis (2000).

El *desarrollo y la legitimación de estos derechos* dependerán de un triple proceso:

- Un proceso cultural, de hegemonía de los valores que están en la base de estos derechos y de explicitación o especificación de los mismos.
- Un proceso social, de movilización ciudadana para conseguir su legalización y la creación de los mecanismos y procedimientos que los hagan efectivos
- Un proceso político-institucional para formalizarlos, consolidarlos y desarrollar las políticas para hacerlos efectivos.

En la medida que en muchos casos estos derechos aparecen como una novedad política y no tienen aún el suficiente arraigo social, el rol de los intelectuales, a la vez como fuerza sociocultural y como colectivo capaz de definir los contenidos y las motivaciones de estos derechos, es hoy fundamental. En esta etapa histórica el desafío que el territorio plantea a la intelectualidad exige un gran coraje moral y una considerable audacia política.

Cuadro 1

Legitimidad política e identidad territorial, M.D. sobre la base del estudio «La crisis de legitimidad política: un análisis comparativo» dirigido por Manuel Castells (UOC, 2003) y en su artículo publicado en El País, el 18 de febrero de 2003.

En nuestro mundo globalizado, a lo abstracto del poder de flujos de capital, tecnología e información se opone lo concreto de la identidad territorial, cultural, lingüística, étnica y religiosa.

Identidad y territorio (mundo)

Un 15% de la gente se identifica con el mundo en general o con el continente en el que vive.

Un 47% como su principal identidad de referencia consideran la región o la localidad, y el 38% al Estado-nación.

Fuente: World Values Survey, analizado por Pippa Norris en *Global governance and cosmopolitan citizens*.

Identidad y territorio (por áreas geográficas)

En los países de la «Europa del sureste», que incluye España, un 64% de la población se identifica en primer lugar con la región-localidad y tan sólo el 23% con su Estado-nación. Un 13% se identifica con el mundo en general.

En América del Norte el 41% se identifica con la región-localidad, 43% con el Estado-nación y el 16% con el mundo en general.

En Europa del Este son el 58% de los que en primer lugar se identifican con la región-local, 34% con el Estado-nación y un 8% con el mundo.

Fuente: World Values Survey, analizado por Pippa Norris en *Global governance and cosmopolitan citizens*.

Identidad y territorio en España / Cataluña

Un 19,7% se sienten más españoles que catalanes, el 37% se sienten sobre todo catalanes y el 36,2% se sienten tan catalanes como españoles, mientras un 6,6% no se identifican con ninguna de las dos identidades.

Cuando se tienen que identificar con un territorio, el 14% lo hacen con España, 32% con Cataluña, 22% con la ciudad donde han nacido, 19,4% con la ciudad donde viven y menos del 10% con Europa o con el mundo.

Pero cuando se pide que la gente designe sólo una fuente de identificación, el 56% cita a la familia, mientras tan sólo un 8,9% escoge a su país, su cultura o la lengua. Un 8,7% se define individuo en primer lugar.

Fuente: *Projecte Internet Catalunya* (2002), dirigido por Manuel Castells e Imma Tubella.

Legitimidad política de los gobiernos (en el mundo, 2002)

Un 62% opina que su país no está gobernado por la voluntad del pueblo.

La percepción del gobierno por parte de sus ciudadanos es el 40,8% como corrupto, 39,1% como burocrático y un 9,9% como eficiente.

Fuente: Gallup International.

Legitimidad política de los gobiernos (por áreas geográficas, 2002)

El 66% de la población mundial según otro estudio opina que su país no está gobernado por la voluntad del pueblo y un 78% opina lo mismo en América latina. En la UE el porcentaje es 61%, y en los EE UU el 52%.

Fuente: Gallup International y Environics International para World Economic Forum.

Legitimidad política de los partidos políticos (por áreas geográficas)

Los ciudadanos que expresan no mucha o ninguna confianza en los partidos políticos (año 2000 y 2002) en Argentina son el 93%, en Japón 81,8%, en la UE 73%, y en España 67%.

Fuente: World Values Survey, Eurobarómetro (para Europa).

Legitimidad política de los partidos políticos vs. otras instituciones

El 24% de población de España expresa su confianza en los partidos políticos, mientras el 69% expresa su confianza en las ONGs, el 36% en los sindicatos y el 58% en las NN UU.

Fuente: Eurobarómetro 2002.

El ferrocarril como columna vertebral del transporte sostenible

JOSÉ LUIS ORDÓÑEZ

Las propuestas de política ferroviaria expuestas en este texto quizá no coincidan, punto por punto, con las utilizadas por el Gobierno Español al redactar el proyecto de Ley del Sector Ferroviario que ha presentado al Parlamento, o al obstaculizar sistemáticamente la Política Común de Transportes expresada en el Libro Blanco del Transporte de la Unión Europea y en la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible. La política de transporte sostenible que aquí se describe está guiada por cuatro elementos esenciales: reducir la necesidad de movilidad obligada; promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren; establecer una moratoria en la construcción de autopistas y autovías; y tomar en consideración que alta velocidad, avión, camión y automóvil son medios de transporte generadores de insostenibilidad.

Puede parecer paradójico proponer, desde una política de transporte ferroviario, la reducción de la movilidad, ya que transporte y movilidad han sido conceptos situados en permanente apoyo mutuo. A mayor oferta de transporte más inducción y posibilidades de movilidad. A mayor movilidad mayor necesidad de infraestructuras y servicios de transporte.

De esa forma la movilidad obligada ha sido el factor esencial del éxito de los trenes de cercanías. Con especial incidencia en la conurbación de Madrid, donde se realizan 900.000 viajes diarios en dichos trenes. Este conjunto de desplazamientos entre vivienda, puesto de trabajo, centro de estudio y quehaceres cotidianos, representa, cada día, más del 50 por ciento de los viajes realizados en los trenes de cercanías de toda España.

Los trenes de cercanías se han convertido en la auténtica revalorización del ferrocarril en nuestra sociedad. La actividad productiva, social y cultural de nuestro ámbito se había acostumbrado a la pérdida del papel del tren, a la desaparición de los tranvías en el paisaje urbano, a la reducción de las inversiones hasta cifras insignificantes en el transporte ferroviario, y a considerar barreras infranqueables las líneas férreas cuando las calles se convertían en autovías y las autopistas en calles.

Pero lo cierto es que cuando ahora abordamos la Ley del Sector Ferroviario, la Ley Reguladora del Contrato de Concesión de Obras Públicas y la decisión de Alemania y Francia de comenzar a equilibrar las condiciones de concurrencia entre los diferentes modos de transporte estableciendo cánones a los camiones por el uso de las carreteras, para presentar una política coherente sobre el ferrocarril, éste, el ferrocarril, ha de situarse inmerso en un sistema de transporte, integrado y multimodal, que se encuentre embebido en una adecuada vertebración del territorio y en una lógica distribución de la población, donde la necesidad de desplazarse se reduzca al mínimo.

El establecimiento de tasas ecológicas, por parte de Alemania y Francia, al transporte por carretera son coherentes con el camino marcado por la Política Común del Transporte de la UE, en la estrategia de que el ferrocarril se sitúe en el lugar que le corresponde por sus ventajas económicas, sociales y ecológicas, y contribuya al cumplimiento del Protocolo de Kioto y a la reducción del consumo energético.

Cuando se trata de presentar una política coherente sobre el ferrocarril es necesario replantearse el Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, con extensión presupuestaria hasta el año 2010, que promueve el Gobierno Español, donde se declara el objetivo de lograr una cuota del 30 por ciento para el ferrocarril, en un nuevo reparto modal entre los servicios de transporte. El objetivo es ambicioso y tentador, pero, con sensatez, hemos de ser conscientes de que la proclamación de dicho objetivo no está basada en una evaluación estratégica del conjunto de factores ecológicos, económicos, sociales y culturales que influyen en las posibilidades de cumplir dicho objetivo.

El citado replanteamiento del programa de infraestructuras ferroviarias también deberá abordar dos aspectos de carácter crucial; por un lado, la concepción centralista expresada en una red básica ferroviaria convergente en la ciudad de Madrid y, por otro lado, la distribución de los 6 billones de Fondos Estructurales destinados a infraestructuras, que se sumarán a los Fondos de Cohesión, préstamos del Banco Europeo de Inversiones y créditos del Fondo

Europeo de Inversiones, que el Gobierno General del Estado ha previsto aplicar en el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007.

Una coherente redistribución de dichos fondos podría conducir a una mayor racionalidad de las inversiones si se destinara mucho más de lo previsto, hasta ahora, a la adaptación de la red básica ferroviaria a velocidades medias de 160 km/h, se consideraran suficientes los cerca de 164.000 km de carreteras existentes, se abandonarían las inversiones en líneas de alta velocidad para circular a velocidades de 350 km/h, y se desprogramara la inversión de 39.700 millones de euros (6,6 billones de pesetas) en autopistas y autovías. Inversión insostenible que figura en el Plan de Infraestructuras para el Transporte hasta el año 2010.

Respecto a la concepción excesivamente centralista de la red básica de 7.200 km de líneas remozadas y nuevas líneas que contempla el programa de infraestructuras ferroviarias, en el primer esquema de red dibujado por el Gobierno Español se nota, entre otras ausencias, la falta de una línea transversal en el eje de la Cornisa Cantábrica, el olvido de la línea norte-sur correspondiente a la vía de la plata, y las omisiones en Andalucía del eje transversal Huelva-Sevilla-Bobadilla-Granada-Almería y del eje costero Cádiz-Algeciras-Málaga-Almería. A estas líneas transversales se deben añadir, para poder avanzar en un cierre conveniente de la malla, enlaces como Jaén-Granda-Almería, Ourense-León, Ávila-Salamanca, Burgos-Logroño-Gasteiz-Vitoria, Teruel-Cuenca o Teruel-Valencia. Todo el mundo del transporte conoce los aportes beneficiosos del denominado «efecto red» que se logra con un engarce adecuado de la malla.

Ese primer esquema ha sufrido una destacable rectificación al incluir, como consecuencia del desastre del Prestige, la propuesta de generar una transversal ferroviaria en la cornisa cantábrica, desde Ferrol hasta la frontera francesa pasando por Galicia, Asturias, Cantabria y País Vasco. Este Corredor Cantábrico apareció oficialmente el 24 de enero de 2003 en el Plan Galicia, o Plan del Chapapote, y es una gran victoria de la movilización social y política a favor de la cohesión de la red ferroviaria.

En realidad, el esquema de la red ferroviaria básica propuesta por el Gobierno General del Estado no es coherente, pues se desmarca del principio de proximidad, incrementa las distancias entre el mundo rural y el mundo urbano, y considera que Madrid es el centro de toda nuestra actividad económica, social, cultural y política. El Gobierno, con dicho esquema, promueve una red básica extraordinariamente alejada de principios tan elementales como son los de descentralización, multipolaridad y multifuncionalidad.

Como se ha demostrado claramente en la explotación de la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, y está previsto en la nueva línea Barcelona-Zaragoza-Madrid, el Gobierno propone la reducción del número de estaciones en la red básica, pretende utilizar un máximo de tres o cuatro tipos de trenes, no considera la creación de un amplio abanico de servicios ferroviarios en consonancia con la gran variedad de necesidades de transporte que tenemos, y no se preocupa de establecer horarios que favorezcan los enlaces e intercambios rápidos en los nudos de la red. Respecto a este último concepto, Suiza, por ejemplo, tiene interconectadas por ferrocarril las 11 mayores ciudades de su territorio con trenes que coinciden en las estaciones durante 5 minutos, favoreciendo el enlace de las diferentes y sucesivas etapas de un viaje y el rápido intercambio entre los diferentes trenes.

La promoción de los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren

Como ya señalábamos más arriba, una política de transporte coherente, además de reducir las necesidades de transporte, debe promover los desplazamientos a pie, en bicicleta y en tren. Para ello debe imbricarse en una política territorial de población y actividad productiva, social, cultural y política distribuida en numerosas ciudades de carácter medio, capitales comarcales y aldeas, donde el urbanismo sea compacto y multifuncional. Una política que abandone la insostenible pretensión de conformar por todas partes grandes aglomeraciones y conurbaciones, tipo París, Londres, Nueva York, México, Shanghai, Buenos Aires, Bombay o São Paulo.

En la actualidad, y con circunstancias totalmente desfavorables, en grandes metrópolis como Barcelona o Madrid el 50 por ciento de los desplazamientos se realizan a pie. Si dichas ciudades disfrutaran de una dimensión más humana, este tipo de movilidad se incrementaría. En lo que respecta a la bicicleta, en España, dada la preponderancia que tiene en las infraestructuras viales urbanas el uso del automóvil, la moto, el camión y el autobús, no ha sido posible desarrollar el desplazamiento mecánico no motorizado que representa la bicicleta. Pero todos los expertos conocen el gran potencial que encierra este modo de transporte, aunque se encuentre condicionado, hoy por hoy, por la ausencia de una tranquilidad suficiente en el tráfico urbano.

Además de los desplazamientos a pie y en bicicleta, en el ámbito urbano es necesario promover el uso del transporte público colectivo, como el metro de superficie, el metro subterráneo y el tren de cercanías. Sin embargo, no debe olvidarse que en una evaluación estratégica del impacto ambiental generado por el metro de superficie (metro ligero o tranvía), y comparando los resulta-

dos con el metro subterráneo, el tranvía ligero moderno se comporta de forma más ecológico que el metro convencional.

El metro de superficie, además de presentar un mayor respeto al medio ambiente urbano, necesita menos inversión de recursos y provoca menos consumo energético, menos generación de gases de efecto invernadero y menos reducción de la calidad del aire. Al mismo tiempo, el metro de superficie presenta la capacidad de incrementar el espacio público urbano, la extensión de las zonas peatonales y los desplazamientos a pie, reduciendo el número de automóviles presentes en calles y plazas, como ha demostrado la vuelta al tranvía en la ciudad de Estrasburgo, población de alto significado en Europa ya que es sede del Parlamento Europeo.

Cuando las Administraciones Públicas estudiaron y analizaron los desplazamientos necesarios entre las ciudades de Alcorcón, Móstoles, Fuenlabrada, Getafe, Parla, Pinto y Leganés, dentro del área metropolitana sur de Madrid, para decidirse por uno u otro medio de transporte público, posiblemente ferroviario, terminaron inclinándose por el metro subterráneo frente a otras dos posibles alternativas, que son el metro de superficie y el tren de cercanías. Pero lo cierto es que esos estudios previos no tuvieron en cuenta en su auténtica dimensión la necesaria evaluación estratégica del impacto ambiental.

Los análisis incluyeron reconocimiento de la demanda, origen y destino de los viajes, características geológicas del terreno, alternativas de trazado, estudios económicos y financieros del proyecto, y sistema de transporte a proponer al Consorcio Regional de Transportes de la Comunidad de Madrid. Sin embargo, olvidaron contemplar el impacto ambiental, ecológico y social, que la línea 12 del metro de Madrid, o Metrosur, conllevará, y el diferencial en costes externos que presentaban los diferentes modos y medios de transporte en liza.

En contradicción con la incipiente Política Común de Transportes de la Unión Europea, que propone el trasvase de transporte desde la carretera al ferrocarril, en los documentos de la Comunidad de Madrid se afirma que el metro de superficie, metro ligero o tranvía, implica una alta ocupación del viario urbano, generando una reducción del espacio ahora destinado al automóvil.

Esta curiosa afirmación ha quedado reflejada en las conclusiones de los estudios realizados para el anteproyecto de Metrosur, dentro de los argumentos que justifican la opción aprobada por el Gobierno Autónomo de construir un ferrocarril urbano subterráneo, en vez de una línea de metro de superficie o líneas para trenes de cercanías. Al mismo tiempo, cuando se refieren a la afición al automóvil, se atreven a señalar que es tan importante el espacio

de la calzada dedicado al movimiento de los vehículos como el espacio dedicado al aparcamiento.

En la citada documentación, se acusa al tranvía de obstaculizar los desplazamientos transversales de los automóviles y se califica esta supuesta dificultad con un nombre espectacular: «efecto barrera». En los mismos documentos se presenta la señalización semafórica con prioridad de paso para el tranvía como otro elemento más de la agresión del tranvía al automóvil. En este aspecto, el Gobierno Autonómico de la Comunidad de Madrid coincide con el Gobierno homólogo de la Comunidad Valenciana, dado que los tranvías de Valencia, que desde Burjassot, pasando por Pont de Fusta, conectan con la playa de la Malvarrosa, no pueden usar el sistema de prioridad semafórica, instalado tanto en los vehículos como en los equipos que regulan la circulación de dicho metro de superficie, para que no reciba un trato de favor el transporte público colectivo respecto al transporte privado en automóvil.

El anteproyecto de la línea 12 del metro de Madrid, o Metrosur, señala, también, que no ha sido posible identificar viario alguno, suficientemente continuo, como para facilitar el establecimiento de soluciones ferroviarias de superficie. Mas, conociendo las bases fundamentales del pensamiento utilizado, y los criterios urbanísticos y de transporte que se encuentran en los documentos antes referidos, esta afirmación deja muchas preguntas en el aire. Parece cierto que es inútil esperar gran cosa de quien ha establecido como axioma, o premisa, evitar las molestias al automóvil.

Dentro de ese mismo discurso, y en contra de lo que la experiencia ha mostrado reiteradamente, parece ser que el metro de superficie no presenta una capacidad suficiente para integrarse en el sistema de transporte vigente, pues impide, al sistema actual, ganar en capacidad, fiabilidad, disponibilidad, accesibilidad y vertebración. Es decir, según los gestores de la Comunidad de Madrid, el metro de superficie no reúne mejores características ecológicas y sociales que el automóvil, sino que, muy al contrario, el tranvía es un elemento desestabilizador, incapaz de interconectar las áreas de mayor densidad de población, e incapaz de dar servicio de transporte a equipamientos generales, como universidades, hospitales, establecimientos comerciales y zonas de ocio.

Haciendo honor a las contradicciones que suelen encontrarse en este tipo de documentos, los estudios del anteproyecto de Metrosur resaltan en otro lugar, y con todo vigor, que la mejora del transporte público colectivo induce a una mayor utilización del mismo, y que la mejora de los viales, calles, glorietas y plazas, produce el efecto contrario. Esta verdad constatada en todos los lugares del mundo, reviste una espectacular contradicción con la actividad de las

Administraciones Públicas que actúan en el sur y suroeste de la Comunidad de Madrid, pues dichas autoridades, al tiempo que construían la línea 12 del metro de Madrid, construían y proyectaban nuevas autopistas y autovías radiales R-4, R-5, M-501 y Madrid-Toledo, y nuevas autopistas y carreteras transversales de gran capacidad M-45, M-50 y M-60.

Moratoria en la construcción de autopistas y autovías

Ante la situación de transporte en España y ante las correctas propuestas sobre cambio climático, política común de transportes y política territorial, que se vierten en la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible, no queda otro remedio que considerar irresponsable prever en el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007, invertir 25.240 millones de euros (4,2 billones de pesetas) hasta el año 2006, y 39.700 millones de euros (6,6 billones de pesetas) hasta el año 2010, en establecer una red de autopistas del Estado de 13.000 km.

Dice el Gobierno español que estos 13.000 km de vías de peaje y alta capacidad se unirían a otros 10.000 km de autovías y carreteras gestionadas por la Administración General del Estado, además de sumarse a 71.000 km de autovías y carreteras tuteladas por las Comunidades Autónomas, y a 70.000 km de autovías y carreteras cuya construcción y mantenimiento recae en Diputaciones y Cabildos. Es decir, un conjunto de 164.000 km de autopistas, autovías y carreteras, que situarían a España por delante de Francia, Reino Unido, Italia y Alemania. Ciertamente España está en una situación destacada, y así queda evidente con su presencia en el pelotón rezagado, de los Estados miembros de la Unión Europea, en cuanto al cumplimiento de lo acordado en el Protocolo de Kioto. Falta de cumplimiento en abordar el peligro de cambio climático, donde el transporte basado en el automóvil y el camión tiene una gran influencia debido a la alta emisión de gases con efecto invernadero que genera.

Con enorme desequilibrio, el mismo Gobierno Español, señala como objetivo del Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, llegar a disponer de 7.200 km de líneas de alta calidad en una red básica que se sitúe dentro de un sistema ferroviario que sumará 14.000 km de vías. Es decir, 14.000 km de líneas férreas frente a 164.000 km de carreteras. Dichos 14.000 km resultan de la suma de 13.000 km de ferrocarril tutelados por la Administración General del Estado, y 1.000 km de caminos de hierro gestionados por las Comunidades Autónomas (EuskoTren, Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, Serveis Ferroviaris de Mallorca y Ferrocarrils de la Generalitat Valenciana).

Ese espectacular desequilibrio entre ferrocarril y carretera conduce a que la distribución modal del tráfico interno de viajeros, es decir, el realizado sin salir del territorio español, ofrece un reparto de cuotas del 90,2 por ciento para la carretera, 5,2 por ciento para el ferrocarril, y 4,3 por ciento para el avión. Y si nos asomamos a las cifras de las mercancías, el tráfico interior se realiza en un 84,62 por ciento en camión, un 10,08 por ciento en barco y un 3,23 por ciento en tren.

En la red ferroviaria actual se registran 626 millones de viajes anuales, sumando 484 millones Renfe, que representa el 77,3 por ciento, y 142 millones el resto de las empresas ferroviarias, que representan el 22,7 por ciento. En ese resto de empresas de transporte ferroviario, además de las compañías autonómicas ya citadas, hay que señalar la estatal Ferrocarriles de Vía Estrecha, Feve, y la privada Ferrocarril de Sóller.

El gran peso que presenta el ferrocarril autonómico, con un alto número de viajes respecto al número de kilómetros de las líneas que posee, según se desprende de las cifras citadas, es muy probable que se deba al tipo de servicio ofrecido por dichas compañías, más ligado al servicio tipo cercanías y al servicio tipo metro, que a los viajes de larga distancia.

Fijándonos sólo en Renfe, los trenes de cercanías realizan 438 millones de viajes anuales, es decir 1.825.000 viajes diarios. Cifra aplastante respecto a los viajes realizados por los trenes de larga distancia, donde los trenes regionales, más los trenes de grandes líneas y los trenes AVE 101, sólo suman 45,7 millones de viajes anuales, es decir 190.000 viajes/día.

Los trenes regionales de Renfe acumulan 26,3 millones de viajes/año y 109.600 viajes/día. Los trenes de grandes líneas suman 19,7 millones de viajes anuales y 82.000 viajes/día, contabilizando 13,7 millones de viajes anuales en los trenes que se han conocido habitualmente como de largo recorrido, 1,5 millones de viajes/año en los trenes regionales que relacionan Madrid con Ciudad Real y Puertollano en la línea de alta velocidad Sevilla-Madrid, y 1,3 millones de viajes/año en los trenes Talgo 200, de ancho variable, que usan la línea Madrid-Sevilla de ancho normalizado europeo de 1.435 mm, y las líneas de ancho ibérico de 1.668 mm, Málaga-Córdoba, Cádiz-Sevilla y Huelva-Sevilla. El resto de los viajes, 3,2 millones de viajes anuales y 13.300 viajes/día, son realizados por los trenes AVE 101.

Es notable, que por mucha importancia económica, social y cultural que tengan los 13.300 viajes diarios que se realizan en los trenes AVE 101, no será fácil que superen la significación de los 1.754.000 viajes diarios efectuados en los trenes de cercanías.

Tren de alta velocidad, avión, camión y automóvil generan insostenibilidad

En la Unión Europea, el primer Estado en servirse de los trenes de alta velocidad fue Francia, comenzando a funcionar el TGV Sudeste en 1981, 17 años después de que Japón pusiera en servicio el denominado «tren bala», de 1964, en la relación Tokaido Shinkansen que conecta Tokio con Nagoya y Osaka. Pero justamente en Francia entró en crisis, en 1995, el modelo de alta velocidad que aún pretende para el territorio español el Gobierno General de este Estado, caracterizado por la creación de una red básica de nuevas líneas ferroviarias destinadas preferentemente al transporte de viajeros.

El denominado «éxito de la alta velocidad» en Francia, por la espectacular recuperación de tráfico ferroviario que tuvo la línea París-Lyon, trató de ser extendido a las líneas TGV Atlántico, TGV Norte, TGV Este y TGV Mediterráneo. Pero las tasas de rentabilidad económica y social, que en 1992 eran suficientes en Francia, para programar la faraónica creación de una red de líneas TGV, se esfumaron en 1995. Los decepcionantes resultados del TGV Norte y la subida de los costes de construcción de la infraestructura redujeron de forma drástica aquellas optimistas tasas de rentabilidad. Después de tres años de funcionamiento, el número de viajes del TGV Norte, línea que conecta París con Londres y con Bruselas, se situaba un 40 por ciento por debajo de las previsiones. Poco antes, con el TGV Atlántico, las previsiones habían sido alcanzadas pero no superadas. El TGV Norte, puesto en servicio en 1993, y el TGV Bajo el Canal, puesto en servicio en 1994, registraron un 20 por ciento de subida en los costes de la infraestructura. El TGV Mediterráneo, Valence-Marseille, que se puso en servicio el 7 de junio de 2001, ha presentado un incremento del 72 por ciento en los costes de construcción respecto al TGV Norte.

En nuestro caso, el Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007 está siendo elaborado de forma tan oscurantista, tan a escondidas, que no es posible conocer sus tasas de rentabilidad. Además, y para mayor dificultad, ni el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007, ni el sectorial Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, han sido sometidos a la correspondiente evaluación estratégica del impacto ambiental, donde hubieran emergido a la luz los beneficios y perjuicios que representan ambas decisiones políticas.

Lo cierto es que desde un punto de vista ecológico, la política de transportes del Gobierno General del Estado está incidiendo muy negativamente en el reequilibrio territorial, incrementando la atracción de los grandes polos como Madrid y Barcelona, y de las áreas metropolitanas de Valencia, Bilbao, Zaragoza, Vigo, Málaga o Sevilla. También está contribuyendo al aumento de las

emisiones de gases con efecto invernadero, potenciando el transporte por carretera y la ampliación y creación de aeropuertos. En el mismo sentido está generando mayor consumo energético en el transporte promoviendo los trenes de alta velocidad de 350 km/h.

Estas actuaciones las realiza el Gobierno Español haciendo oídos sordos al conocimiento generalizado del papel extraordinariamente negativo que presenta el transporte respecto al cambio climático. Pues contemplando este aspecto a escala mundial, la participación del transporte en las emisiones de dióxido de carbono es del 30 por ciento en Estados Unidos, donde avión y automóvil son los medios de transporte más utilizados. Así mismo, en América Latina el transporte genera el 37 por ciento de las emisiones, ya que son Estados alineados en este sentido con Estados Unidos. En la Unión Europea la participación del transporte alcanza el 25 por ciento en las emisiones, comprobándose la beneficiosa influencia del mayor uso del transporte ferroviario. En Japón, dicha participación del transporte se reduce al 22 por ciento, ya que el ferrocarril supera una cuota del 27 por ciento en el reparto de transporte entre los diferentes modos. En África la participación del transporte sólo alcanza el 17 por ciento, dado el poco peso que allí tienen los desplazamientos motorizados.

En 1995, en la Unión Europea, las emisiones de dióxido de carbono causadas por el transporte terrestre fueron de 800 millones de toneladas, donde la carretera emitió 675 millones, el 84 por ciento, el avión emitió 96 millones, el 12 por ciento, y el ferrocarril y el transporte fluvial emitieron los 29 millones restantes, el 4 por ciento.

Las emisiones españolas de dióxido de carbono se incrementaron entre 1990 y 2002 en más del 30 por ciento, aunque el Protocolo de Kioto sólo permitía a España aumentar en un 15 por ciento desde 1990 hasta 2008-2012.

En lo que respecta al consumo energético, del total de energía destinada al transporte, el 79 por ciento lo consume la carretera, el 9 por ciento el avión, el 5 por ciento el tren y el 7 por ciento restante los transportes fluvial y marítimo. En España, el transporte representa el 40 por ciento del consumo total de energía.

El ferrocarril, para realizar una misma cantidad de transporte, consume 4 veces menos energía que la carretera, porque para transportar una carga de una tonelada en un recorrido de 100 km, la carretera consume 2,2 litros de petróleo equivalente y el ferrocarril consume 0,55 litros. Al tiempo, es necesario tomar en consideración que una vía doble de ferrocarril tiene la misma capacidad de transporte que una autopista de 16 carriles, 8 en cada sentido.

Es evidente que la carretera, además de consumir más energía y emitir más gases de efecto invernadero, ocupa mucho más suelo para alcanzar una misma capacidad de transporte que el ferrocarril.

Pero cuando dentro del ferrocarril se intentan incluir los trenes de alta velocidad, es necesario resaltar el despilfarro energético de estos vehículos. Considerando los datos de los trenes recientemente adquiridos con destino a la nueva línea Madrid-Barcelona-frontera, para alcanzar los 330 km/h de velocidad máxima a la que puede circular el tren AVE 102 (antes conocido como Talgo 350), que tiene una capacidad de transporte de 318 asientos, necesita desarrollar una potencia de 8.000 kW. Así mismo, para circular a 340 km/h de velocidad máxima, el tren AVE 103 (antes conocido como ICE 350 E), de Siemens, con 404 asientos, necesita desarrollar una potencia de 8.800 kW.

El propio tren AVE 101, de Alstom, con 329 asientos, que circula en la línea Madrid-Sevilla a una velocidad máxima de 300 km/h, necesita desarrollar una potencia de 8.800 kW. Cada uno de los trenes AVE 101, al desplazarse por la línea, presenta un consumo energético, medido en kW/h, equivalente al realizado por una ciudad de 25.000 habitantes.

Sin embargo, el tren Alfa Pendular, que presta servicio en Portugal entre Lisboa y Porto, con 301 asientos, sólo necesita una potencia de 4.000 kW para circular a una velocidad máxima de 200 km/h, permitiendo alcanzar una velocidad media de 160 km/h. Dicho tren Alfa Pendular es similar al denominado por Renfe «Alaris». Tren que es utilizado en la relación Valencia-Madrid. Pero hemos recurrido al ejemplo del tren portugués Alfa Pendular en vez de servirnos del tren español Alaris, ya que este último no permite una comparación sencilla de capacidad de transporte, velocidad y potencia, con los trenes de alta velocidad AVE 101, AVE 102 y AVE 103, al disponer de sólo 161 asientos.

Defensa del ferrocarril desde los movimientos sociales

En este ámbito, acumulan mucha razón las organizaciones cívicas que defienden el ferrocarril y combaten la megalomanía del AVE. Dichas organizaciones se reunieron a primeros de marzo de 2003 en Valencia y en el manifiesto por un ferrocarril sostenible, público y social, aprobado por cincuenta representantes de organizaciones ecologistas, sindicales, sociales y plataformas en defensa del ferrocarril, proponen la apertura de un debate riguroso y transparente sobre el futuro del ferrocarril en España que permita decidir colectivamente las soluciones más adecuadas, desde el punto de vista ambiental, económico y social.

Este manifiesto, nacido de la movilización social a favor del ferrocarril, exige la derogación del denominado Plan de Infraestructuras 2000-2007 por ser antiecológico, antisocial y despilfarrador. La derogación de este plan deberá suponer, por un lado, la renuncia a la política actual de construir líneas exclusivamente dedicadas a la circulación de trenes de alta velocidad y, por otro lado, la puesta en marcha de la política de mejora y acondicionamiento de las líneas existentes para conformar una red ferroviaria compatible con los diversos tipos de trenes (trenes de larga distancia, trenes de cercanías, trenes de mercancías, trenes-tranvías, etc.). Las líneas que se han construido bajo el influjo de la moda de la alta velocidad tendrán que ser reconvertidas para facilitar su uso por todos los tipos de tráfico ferroviario existentes, alcanzado de esta forma la debida utilidad social.

El documento citado pretende potenciar el ferrocarril por reunir innumerables ventajas ambientales, económicas y sociales. En realidad promueve un ferrocarril de calidad, accesible, asequible, seguro y fiable, que reequilibre y cohesione el territorio, atienda las diferentes demandas de la sociedad y sobre todo las necesidades de la movilidad obligada, incremente el transporte ferroviario de mercancías, aproveche al máximo las infraestructuras existentes y sirva de instrumento esencial para alcanzar la sostenibilidad de un sistema integrado y multimodal del transporte donde estén contemplados los desplazamientos a pie y en bicicleta.

Estas reflexiones del mundo ecologista critican las fuertes inversiones que reciben automóvil, camión, AVE y avión, que son precisamente los modos y medios de transporte con mayor consumo energético y mayor producción de gases de efecto invernadero. Frente a la continua cantinela del déficit de infraestructuras que se pregona desde los diversos gobiernos, la realidad muestra que en España existen más kilómetros de autovías y autopistas, por habitante y vehículo, que en la mayoría de los Estados miembros de la UE. Sólo hay tres sociedades en el mundo con más kilómetros de autovías y autopistas que España: Alemania, Canadá y EE UU, pero antes de acabar el apunte de Plan de Infraestructuras 2000-2007 habremos rebasado a Alemania. Además, ningún otro país está construyendo vías ferroviarias para alcanzar la velocidad de 350 kilómetros por hora, con un coste desorbitado y con una política ferroviaria que relega las inversiones y el mantenimiento en la red convencional. Y para relativizar aún más el mito de la bondad de las infraestructuras se han publicado numerosos estudios económicos que cuestionan el vínculo automático entre crecimiento del transporte y desarrollo de la actividad productiva. El propio Consejo Europeo, en la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible aprobada en Gotemburgo, en junio de 2001, señaló la necesidad de desvincular el deterioro ambiental y el consumo de recursos del desarrollo económico.

Dichas organizaciones estiman que las líneas de alta velocidad tienen un gravísimo impacto ambiental, ya que la circulación a velocidades de 250 a 350 km/h exige trazados muy rectilíneos, con radios mínimos de curvatura superiores a 5.000 m y pendientes máximas del 2,5 por ciento, o 25 milésimas como se dice en el lenguaje ferroviario, lo que obliga a grandes movimientos de tierras, con construcción de trincheras, terraplenes, viaductos y túneles, y la correspondiente proliferación de canteras y escombreras. Además, el territorio afectado queda destruido y segmentado, con consecuencias graves para el medio natural, y muy especialmente para los espacios protegidos y la flora y fauna más sensible.

Las líneas de alta velocidad, según el quebrado modelo francés que antes hemos descrito, y que aún es reivindicado por el Gobierno Español, constituyen un medio de transporte diseñado para unir grandes ciudades, en competencia directa con el avión, y con muy pocas paradas intermedias. Debido a la finalidad elegida, se convierte entonces en un medio de transporte que margina, incomunica y excluye a las zonas rurales y a las ciudades medias, favoreciendo los procesos de concentración y colonización urbana en unos pocos lugares del territorio. Esas líneas de alta velocidad se convierten en un proyecto antiecológico, antisocial y antieconómico, despilfarrador de recursos, que crea desequilibrios territoriales y favorece un modelo de sociedad injusto e insostenible.

Respecto a la Política Común del Transporte de la Unión Europea puede afirmarse que está en sus albores y que es por ahora un mero enunciado. Dicha política se ha contentado con desenvolver los denominados paquetes ferroviarios, el primero en 2001, con la aprobación de tres directivas relativas a la definición de los conceptos de entidades reguladoras del transporte, administradoras de la infraestructura y prestadoras del servicio o transportistas, que antes quedaban subsumidos en el papel general desempeñado por las compañías estatales tipo Renfe, SNCF, Deutsche Bahn o Ferrovie dello Stato, la concesión de licencias de transporte ferroviario válidas para todos los territorios de la UE, y la libertad de acceso a la infraestructura, con adjudicación de surcos y horarios, y la aplicación de cánones o peajes.

El segundo paquete ferroviario se ha aprobado en el Consejo Europeo, o Cumbre Europea, de la primavera de 2003, donde han comenzado a establecerse los objetivos concretos de la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible en ámbitos de tanta transcendencia como los precios del transporte y de la energía. Estos precios más justos permitirán reequilibrar las cuotas entre el ferrocarril, la carretera y la aviación, además de cumplir el Protocolo de Kioto respecto a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero, y reducir el consumo energético al tiempo que promover las energías renovables.

En la Comisión y en los Consejos de las Cumbres de Barcelona y Sevilla, de primavera y verano de 2002, comenzó el análisis del segundo paquete ferroviario, compuesto por las nuevas directivas que han modificado y acrecentado las que conformaban la Política Común del Transporte de la UE. En este segundo paquete se han modificado las orientaciones comunitarias para el desarrollo de las redes transeuropeas del transporte, se ha aprobado el reglamento creador de la Agencia Ferroviaria Europea y se han actualizado las directivas del primer paquete ferroviario. La Estrategia de la UE para el Desarrollo Sostenible solicitaba el cambio en las citadas orientaciones y señalaba la necesidad de reducir la inversión en carreteras, autovías y autopistas. La Cumbre de la primavera de 2003 también introducirá el debate sobre el transporte ferroviario urbano y metropolitano.

La ausencia de política y criterios integrales y multimodales sobre el transporte en la Unión Europea ha llevado a que las inversiones en infraestructuras para el transporte, entre 1980 y 1996, tomando como base el inicio del período, hayan tenido como gran desglose, en el conjunto de la UE, una inversión del 66 por ciento, 2/3, para la carretera y de sólo el 33 por ciento, 1/3, para el ferrocarril. Esa desproporción inversora ha generado hitos tan significativos como que la inversión en aeropuertos subió hasta el 180 por ciento en 1991, y el ferrocarril bajo hasta el 60 por ciento, respecto a 1980 como habíamos señalado, en 1990.

Uno de los efectos del intento de disponer de una Política Común del Transporte, fue la creación del catálogo de 14 proyectos prioritarios de infraestructuras destinados a construir los eslabones clave que permitieran generar las redes transeuropeas de transporte. Ese catálogo fue aprobado en 1994 en Essen (Alemania) y modificado en 1996 en Dublín (Irlanda) y 1998 en Cardiff (Reino Unido), pero no avanzó con la velocidad estimada. Ahora, tras la definición de la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible, se ha visto que era necesario revisar la orientación de las redes transeuropeas de transporte, además de reducir las aportaciones de Fondos Estructurales, Feder, con destino a la construcción de carreteras. Este cambio, casi radical, de la política del transporte europeo, se debe a que la citada estrategia propone limitar las emisiones de gases con efecto invernadero, transferir transporte desde la carretera al ferrocarril y reequilibrar los territorios potenciando el mundo rural.

Costes externos del transporte

En las conclusiones, objetivos, medidas y procesos descritos en la mencionada estrategia, referidos al cambio climático, sistema de transportes y política

territorial, han influido los análisis sobre los costes externos, sociales y ecológicos, del transporte en la Unión Europea, que se han realizado por parte de diversas entidades durante los últimos diez años, además de los datos aportados por la Agencia Europea de Medio Ambiente, entre los que pueden destacarse los contenidos en el documento titulado «Señales Medioambientales 2001».

Los costes sociales contemplados en dichos estudios están referidos a accidentes, congestión y efectos añadidos en el ámbito urbano. Los costes ecológicos se han referido al cambio climático, reducción de la calidad del aire, ruido, impactos en los espacios naturales, además de los generados durante la fabricación y mantenimiento de los vehículos dedicados al transporte, y durante la construcción y conservación de las infraestructuras.

Los análisis han puesto en evidencia que los automóviles, camiones, autobuses y motos generan el 91,6 por ciento del total de los costes externos del transporte, los aviones generan el 6,1 por ciento, los trenes el 1,9 por ciento, y el transporte fluvial el 0,4 por ciento. Y que estos costes sumaron en España 45.037 millones de euros, en 1995.

Clasificándolos por causas, en los costes externos del transporte en la Unión Europea destacan los accidentes, generadores del 23,6 por ciento del total. En la lista, se coloca inmediatamente después la contaminación del aire con el 20,4 por ciento de los costes totales, la congestión con el 19,5 por ciento, la emisión de gases de efecto invernadero con el 18,5 por ciento, los procesos industriales y de obra civil con el 8,6 por ciento, el ruido con el 5,5 por ciento, el impacto en espacios naturales y paisaje con el 2,4 por ciento, y los costes añadidos en el ámbito urbano con el 1,4 por ciento.

Si la misma clasificación la referimos a España, la causa más destacada es la generación de gases con efecto invernadero provocadora del 28,3 por ciento de los costes externos del transporte español. En segundo lugar se sitúan los accidentes con el 25,8 por ciento, seguidos de la contaminación del aire con el 20,1 por ciento, los procesos industriales y la obra civil con el 10,9 por ciento, el ruido con el 5,4 por ciento, la congestión con el 4,2 por ciento, el impacto en espacios naturales y paisaje con el 3,1 por ciento y los costes añadidos en el ámbito urbano con el 2,2 por ciento.

La comparación de la clasificación referida exclusivamente a España con la dedicada al conjunto de los 15 Estados miembros de la Unión Europea, evidencia que el mayor uso del automóvil, camión y avión en España y el mayor uso del ferrocarril en Estados, como Alemania, Francia o Italia, desemboca en el alto peso que tienen en España los costes generados por los gases de

efecto invernadero, provocadores del calentamiento global y del cambio climático consecuente.

El transporte de la Unión Europea genera unos costes ecológicos de 658.000 millones de euros anuales cerca del 10 por ciento del PIB del conjunto. Esta realidad, junto a la gran cantidad de energía que se consume en el transporte, la influencia de las infraestructuras en las diferencias entre zonas rurales y urbanas, más la congestión existente en aeropuertos, autopistas y autovías de toda Europa, ha llevado a la Cumbre de Gotemburgo, realizada el viernes 15 de junio de 2001, a promover los primeros pasos de la Unión Europea hacia una Política Común de Transportes concordante con el desarrollo sostenible, y estableciendo objetivos, medidas y procesos concretos.

La Unión Europea produce el 14 por ciento del total de emisiones de gases con efecto invernadero, registrando tan sólo el 6 por ciento de la población mundial, mientras que el resto de los Estados miembros de la OCDE generan el 35 por ciento de las emisiones y poseen el 11 por ciento de la población global. Las emisiones mundiales de estos gases se han septuplicado durante el siglo XX. El incremento de emisiones de gases de efecto invernadero previsto en la Unión Europea para el periodo 1990 a 2010 será en el transporte del 45,8 por ciento, aumentando el total de emisiones solamente un 2,1 por ciento. Estas cifras incorporan los efectos positivos previstos como consecuencia de la aplicación de varias medidas políticas como la Directiva relativa a vertederos, el acuerdo voluntario de los fabricantes de automóviles para reducir las emisiones de dióxido de carbono, la Directiva referida a la promoción de las energías renovables, y la Directiva relativa a la prevención y control de la contaminación.

El rápido crecimiento de la demanda de movilidad se satisface en gran medida con el aumento del transporte en automóvil, camión y avión. Entre 1970 y 1998 la demanda de transporte en la Unión Europea creció más del 100 por ciento en el caso del transporte de personas, cuantificado en viajeros/km, al igual que el transporte de mercancías, cuantificado en toneladas/km. Y en la actualidad las emisiones de gases con efecto invernadero, que genera el transporte, crecen a un ritmo mucho más acelerado que las de cualquier otra fuente.

Además de las diferencias referidas a los costes externos generados por los gases de efecto invernadero, entre España, donde alcanzan una cuota del 28,3 por ciento sobre el total, y el resto de los Estados miembros de la UE, donde sólo suman el 18,5 por ciento, lo que representa que las emisiones de dióxido de carbono en España suponen un 53 por ciento más que las emitidas en la media de la UE, hay otros costes donde también España destaca negativamente, como son los costes externos generados en los procesos in-

dustriales y obra civil, los añadidos en el ámbito urbano o los creados por el impacto en espacios naturales y el paisaje.

Los costes ecológicos y sociales del transporte añadidos en el ámbito urbano representan en España el 2,2 por ciento del total, mientras que la media de la UE, más Suiza y Noruega, suma el 1,4 por ciento. Por tanto, en España, estos costes, que van ligados a la relación entre la política urbana y la política del transporte en las ciudades, suponen un 57 más que en el resto de la Unión Europea.

Los costes externos ligados a los procesos industriales de la fabricación y mantenimiento de vehículos y equipos de transporte, y los referidos a la construcción y conservación de las infraestructuras, tienen una cuota en España del 10,9 por ciento, mientras que la media de la UE se queda en el 8,6 por ciento. Es decir, en España estas actividades pesan sobre el total un 27 por ciento más que en el resto de la UE.

Respecto al impacto ambiental en la naturaleza, los costes externos suman en España el 3,1 por ciento del total, mientras que la media de la UE se sitúa en el 2,4 por ciento. Esto significa que en España el impacto ambiental del transporte sobre los espacios naturales y sobre el paisaje es un 29 por ciento superior al del resto de la UE.

En lo que respecta a otras causas generadoras de los costes externos del transporte, la contaminación del aire tiene un peso similar en España y en el conjunto de la Unión Europea, 20,1 y 20,4 por ciento, respectivamente; los accidentes suman el 25,8 por ciento en España y el 23,6 por ciento en la UE; el ruido alcanza el 5,4 por ciento en España y el 5,5 por ciento en la UE; y la congestión representa el 4,2 por ciento en España, mientras que la media de la Unión Europea se dispara al 19,5 por ciento.

Una medida establecida por el Consejo Europeo de Ministros en la Cumbre de Gotemburgo para reducir los costes externos derivados de las emisiones de gases con efecto invernadero, es la eliminación de las subvenciones que priman el consumo de energía ineficiente. Otra medida establecida es la introducción de impuestos energéticos relacionados con el contenido de dióxido de carbono en los combustibles.

La asunción de los costes externos por parte de cada uno de los modos de transporte, en lo que respecta a congestión del tráfico, deterioro de las infraestructuras, perjuicios para la salud e impacto en los espacios naturales y el paisaje, permitirá reequilibrar la actualmente distorsionada relación entre los diferentes modos y utilizar de forma más eficiente las infraestructuras

existentes, como señala la Comisión Europea en el documento de consulta referido a la preparación de la Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible.

Estrategia de la UE para el Desarrollo Sostenible

La Estrategia de la Unión Europea para el Desarrollo Sostenible aprobada en la Cumbre de Gotemburgo, junio de 2001, forma parte de los preparativos europeos ante la Cumbre Mundial de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible que se celebró en agosto y septiembre de 2002 en Johannesburgo (Sudáfrica), y se fundamenta en la convicción de que muchas de las amenazas actuales al medio ambiente y a la sostenibilidad provienen de decisiones tomadas en el pasado respecto a formas de producción y de consumo, pautas de utilización del suelo, e inversiones en infraestructuras.

El Consejo Europeo de Ministros, aunque pueda parecer imposible, ha llegado a la conclusión de que es necesario evaluar minuciosamente todas las consecuencias de una propuesta de actuación política antes de ser aprobada. Análisis de efectos que debe incluir las repercusiones, positivas y negativas, del impacto ambiental, económico y social, que encierra la propuesta, tanto dentro como fuera de la Unión Europea. Para evaluar las propuestas será necesario abandonar la clásica planificación y programación sectorial y conseguir un enfoque global, transectorial.

Dicho Consejo ha admitido que el desarrollo tiene tres dimensiones esenciales, una ambiental, otra económica, y otra social, y que sólo será sostenible si se logra el equilibrio entre dichos tres factores de máxima incidencia en la calidad de vida. Admitiendo, al mismo tiempo, que la generación actual tiene la obligación, respecto a las generaciones futuras, de dejar suficientes recursos medioambientales, económicos y sociales como para que puedan disfrutar de una calidad de vida, al menos, equivalente a la que nosotros poseemos ahora.

Como el Protocolo de Kioto ha perdido parte de su valor tras la Cumbre de Bonn sobre Cambio Climático, de julio de 2001, será necesario tomar aún más en consideración que dicho acuerdo sólo representa un primer paso, y que la Unión Europea deberá perseguir el objetivo de reducir las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero hasta conseguir una disminución del 40 por ciento en 2020, y del 80 por ciento en 2050, respecto al nivel de emisiones de 1990.

El nivel de conocimiento actual calcula que la temperatura se incrementará en la superficie terrestre de 1 a 6 grados centígrados de aquí al año 2100,

debido al efecto invernadero. Este cambio climático tendrá consecuencias graves e impredecibles como cambios radicales en los ciclos meteorológicos, en los periodos de sequía, en la pluviosidad, con diferencias importantes en función de la situación geográfica. Estas variaciones térmicas pueden provocar mayor número de huracanes e inundaciones con serias afecciones a la naturaleza, viviendas, infraestructuras, modelos agrarios, usos del suelo y disponibilidad de agua, además de provocar la necesidad de nuevas emigraciones.

Entre las medidas propuestas por el Consejo Europeo de Ministros para combatir el cambio climático se encuentra la adopción de la Directiva relativa a la fiscalidad de los productos energéticos durante el año 2002, en el proceso que lleve en 2004 a metas mucho más ambiciosas en la fiscalidad de la energía con el objetivo de que se asuman totalmente los costes externos. Al tiempo, se ha propuesto la eliminación de las subvenciones a la producción y consumo de combustibles fósiles antes de 2010, contribuyendo además al desarrollo de energías renovables. Junto a lo anterior, también se ha propuesto reducir la demanda de energía por medio de normas mínimas que conduzcan hacia una edificación bioclimática y por medio de requisitos estrictos en el etiquetado de los aparatos eléctricos con el objetivo de conseguir la máxima eficiencia energética.

La Cumbre de Gotemburgo ha logrado comprender que transporte y crecimiento económico no son conceptos indisolublemente unidos, y ha declarado que puede hacerse más con menos, y haber crecimiento económico sin necesidad de que se incremente la movilidad y el transporte. Para ello, entre otros objetivos, se debe lograr una transferencia importante del transporte por carretera al ferrocarril, de forma que la cuota del transporte por carretera en 2010 no supere la que existió en 1998. También se debe fomentar un desarrollo regional más equilibrado, reduciendo las disparidades territoriales en actividad económica y manteniendo la viabilidad de las comunidades rurales.

Entre las medidas para mejorar el sistema de transportes y la política territorial, la Comisión Europea propuso en 2002 un proceso para que los precios del transporte, incluido el aéreo, reflejen, en 2005, los costes reales que suponen al conjunto de la sociedad. A su vez, se ha dado preferencia a las inversiones en infraestructuras para el ferrocarril y el transporte público colectivo, y la potenciación del transporte multimodal de mercancías. En particular, la Comisión Europea ha propuesto una revisión de las orientaciones sobre las redes transeuropeas de transporte y ha provocado la revisión de los Fondos Estructurales, Feder, para reducir a cantidades mínimas el porcentaje financiero concedido al transporte por carretera.

El desarrollo sostenible no se puede lograr con una actividad productiva basada en la discriminación social, la explotación de unas personas por otras y el deterioro medioambiental. Hasta la Comisión Europea da por incorrecto aquel prejuicio que consideraba el desarrollo sostenible, por tener su origen en el movimiento ecologista, como un lujo que no debía ser pagado a costa del crecimiento económico. Durante el último cuarto del siglo XX las políticas adoptadas en la Unión Europea han tendido a infrautilizar el potencial laboral, el factor humano, y a sobreexplotar los recursos naturales, creando menos puestos de trabajo y más contaminación, provocando despilfarro de recursos y de talentos individuales, y fomentando la exclusión social y el desempleo.

Conclusiones

Una política ferroviaria coherente con el objetivo de la sostenibilidad pondrá la reducción de la necesidad de movilidad, en concordancia con una política territorial que aproxime la vivienda al puesto de trabajo, al centro de estudios, al hospital, a las tiendas y a los demás destinos habituales de la actividad diaria.

Dicha política ferroviaria sostenible se basará en un transporte integrado y multimodal donde los viajes a pie, en bicicleta y en tren, sean la columna vertebral del sistema, y donde los desplazamientos en automóvil, camión, moto, autocar y avión, sean meramente complementarios.

Por tanto, las claves esenciales de la sostenibilidad en el transporte son:

- reducir la movilidad obligada;
- asumir que la demanda de movilidad cambia en función de la política territorial y del modelo de usos del suelo, al depender de la localización relativa entre vivienda, centro de trabajo, centro de estudio, tienda, hospital, etcétera;
- establecer un sistema de transporte integrado y multimodal donde los viajes a pie, en bicicleta y tren son la columna vertebral y los demás modos, carretera y avión, son elementos complementarios;
- generar una red básica ferroviaria de líneas de tráfico mixto, viajeros y mercancías, con alto número de estaciones, gran diversidad de servicios, como trenes de cercanías, regionales, grandes distancias, etc., y capaz de admitir velocidades medias de 160 km/h;

- abandonar el sueño de implantar el insostenible y fracasado modelo francés de red de alta velocidad, caracterizado por la construcción de líneas ferroviarias de nueva implantación destinadas al transporte exclusivo de viajeros a más de 250 km/h;
- conseguir la máxima interconexión ferroviaria en los nudos de la red básica con trenes que coincidan en las estaciones durante un lapso de tiempo suficiente para favorecer el enlace de las diferentes y sucesivas etapas de un viaje y el rápido intercambio de viajeros;
- establecer el número adecuado de plataformas intermodales, puertos secos, estaciones de mercancías, etc., para desenvolver al máximo el transporte combinado;
- desarrollar un ferrocarril concebido como transporte público al servicio de la mayoría social, que absorba tráfico de viajeros y de mercancías de la carretera, esté integrado y conectado con los otros transportes públicos colectivos, reequilibre y cohesionese el territorio, y contribuya a reducir el despilfarro energético y la contaminación, en el camino que conduce a una sociedad mas justa, solidaria, cohesionada y sostenible;
- reintroducir el metro de superficie, metro ligero o tranvía en las ciudades;
- integrar el ferrocarril en las zonas urbanas tratando adecuadamente las estaciones y las arterias ferroviarias;
- someter a evaluación estratégica de impacto ambiental el Plan de Infraestructuras para el Transporte 2000-2007, y los programas adjuntos, Programa de Infraestructuras Ferroviarias 2000-2007, Programa General de Carreteras 2000-2007, Programa de Aeropuertos 2000-2007 y Programa de Puertos 2000-2007;
- establecer una moratoria inmediata en la construcción de autopistas y autovías;
- pacificar el tráfico en las ciudades, zonas urbanas y área metropolitanas;
- incrementar el espacio urbano disponible para las personas, a costa de reducir el espacio actualmente destinado al automóvil;
- potenciar el mundo rural y reducir la atracción de los grandes polos económicos como Barcelona y Madrid;

- reducir las emisiones a la atmósfera de gases con efecto invernadero hasta conseguir una disminución del 40 por ciento en 2020, y del 80 por ciento en 2050, respecto al nivel de emisiones de 1990;
- lograr una transferencia importante del transporte por carretera al ferrocarril, de forma que la cuota del transporte por carretera en 2010 no supere la que existió en 1995;
- revisar las orientaciones sobre las redes transeuropeas de transporte desde el punto de vista de la sostenibilidad;
- eliminar las aportaciones de los Fondos Estructurales, Feder, al transporte por carretera.

Aldo Leopold: Estética de la conservación

Exceptuando el amor y la guerra, pocas iniciativas se emprenden con semejante abandono, o por individuos tan diversos, o con una mezcla tan paradójica de avidez y altruismo, como ese conjunto de distracciones conocido como esparcimiento al aire libre. El consenso establecido dice que la vuelta a la naturaleza es una buena cosa para la gente. ¿Pero dónde estriba lo bueno, y qué puede hacerse para favorecer que sea alcanzado? Acerca de estas cuestiones reina la confusión, y sólo las mentes completamente acríicas están libres de duda.

El esparcimiento al aire libre se convirtió en un problema identificable en los días del viejo Roosevelt,¹ cuando los ferrocarriles que habían expulsado el campo de la ciudad comenzaron a llevar a habitantes de la ciudad, *en masse*, al campo. Se comenzó a observar que cuanto mayor era el éxodo, menor la ración *per capita* de paz, soledad, vida silvestre y paisajes, y más larga la migración hasta alcanzar esa exigua tajada.

1. Se refiere a Theodore Roosevelt (1858-1919), presidente de EE.UU. desde 1901 a 1908. Ha pasado a la historia por sustituir la tradicional política exterior aislacionista de su país por la política intervencionista llamada del *Big Stick* («Gran Garrote»), proclamando en su mensaje al Congreso de 1904 que EE.UU. se reservaba el derecho a «mantener el orden» en todo el hemisferio occidental. Los primeros garrotazos se los llevaron la República Dominicana (1905) y Cuba (1906) en sendas intervenciones militares. Gracias a ello, Roosevelt obtuvo en 1906 el premio Nobel de la paz. Dentro de su país, Theodore Roosevelt impulsó el aprovechamiento pleno de los recursos naturales y la racionalización de su explotación, teniendo en cuenta a las generaciones futuras (con lo cual se ganó una reputación de estadista preocupado por la naturaleza). No debe confundirse con su primo Franklin Delano Roosevelt (1882-1945), impulsor del *New Deal* y presidente del país entre 1933 y 1945. (N. del t.)

El automóvil ha extendido esta situación, antes local y de no tanta importancia, hasta los límites extremos de las buenas carreteras —ha hecho que escasee en el interior remoto del país algo que antaño era abundante en las cercanías. Pero ese algo tiene que ser encontrado a pesar de todo. Como fotones disparados por el sol, los excursionistas de fin de semana irradian desde cada ciudad, generando calor y fricción por doquiera que van. La industria del turismo proporciona alojamiento y desayuno como señuelo para más fotones, más deprisa, más lejos. Anuncios plantados en cada rincón revelan hasta al último mono dónde se encuentran los nuevos refugios, paisajes, cotos de caza y lagos de pesca, justo más allá de los que acaban de saturarse. Oficinas gubernamentales construyen nuevas carreteras al traspais, y después compran más traspais para absorber el éxodo acelerado por las carreteras. La industria del *gadget* acolcha los choques contra la naturaleza-en-bruto; el conocimiento de la vida en los bosques se convierte en el arte de usar *gadgets*. Y ahora, en la cima de la pirámide de las vulgaridades, el remolque. Para quien busca en las montañas y los bosques sólo las cosas que pueden obtenerse de la excursión o el golf, la situación presente es tolerable. Pero para quien busca algo más, semejante esparcimiento se ha convertido en un proceso autodestructivo de buscar sin encontrar, una de las máximas frustraciones de la sociedad mecanizada.

El retroceso de la naturaleza virgen ante la avalancha de turistas motorizados no es una cuestión local: la bahía de Hudson, Alaska, Méjico, Sudáfrica están abandonando, Sudamérica y Siberia vendrán a continuación. Los tambores a lo largo del Mohawk² son ahora bocinazos a lo largo de todos los ríos del mundo. *Homo sapiens* ha dejado de gaudular bajo su propia higuera y su propia viña; ha llenado su depósito de gasolina con la fuerza motriz almacenada de incontables criaturas que a lo largo de los milenios no dejaron de menearse, abriéndose paso hacia nuevos pastos. El ser humano cubre los continentes como una invasión de marabunta.

Esto es el Esparcimiento al Aire Libre, Último Modelo.

Ahora bien: ¿quién es el que busca esparcimiento, y qué busca exactamente? Unos pocos ejemplos nos lo recordarán.

Echemos una ojeada, primero, a cualquier humedal con patos. Una hilera de autos estacionados lo rodea. Agazapados en cada rincón del cañaveral se hallan numerosos pilares de la sociedad, con el arma automática dispuesta, y

2. El río Mohawk, en el estado de Nueva York, es afluente del Hudson; su amplio valle es la gran vía de comunicación entre la costa atlántica y los Grandes Lagos. En ese valle habitó la tribu iroquesa de los Mohawk, que formaba parte de la Confederación de las Cinco Naciones. Hoy sus restos viven en las cercanías de Montréal, en Canadá. (N. del t.)

el dedo del gatillo ansioso por quebrantar —si la necesidad obliga— cualquier ley de la *res publica* o el bien público con tal de matar un pato. El hecho de que los cazadores ya se hallen sobrealimentados de ninguna marea atenúa su avidez por recolectar su comida de manos de la Providencia.

Paseando por los bosques cercanos hallamos a otro pilar, a la caza de raros helechos o currucas jóvenes. Dado que su manera de cazar no suele atraer reproches de robo o pillaje, desdeña al matador. Y sin embargo, a lo mejor en su juventud fue uno de ellos.

En algún punto de veraneo cercano hallamos a otro amante de la naturaleza —del tipo que graba versos malos sobre la corteza del abedul. Y por todas partes se encuentra el automovilista no especializado cuyo esparcimiento es el kilometraje, que se ha pateado toda la gama de Parques Nacionales en un sólo verano, y ahora se encamina a Ciudad de Méjico y más al sur.

Por último tenemos al profesional, esforzándose a través de innumerables organizaciones conservacionistas para dar lo que quiere al público buscador de la naturaleza, o para hacerle querer lo que se le puede ofrecer.

Se podría preguntar: ¿y por qué agrupar a gente tan diversa bajo una única categoría? Porque cada uno de ellos, a su manera, es un cazador. ¿Y por qué cada uno de ellos se considera conservacionista? Porque los seres silvestres que intenta cazar han evitado su dominio, y porque espera lograr que sigan en el mismo sitio gracias a alguna nigromancia de leyes, apropiaciones, planes regionales, reorganizaciones administrativas o alguna otra forma de que-rencias masivas.

Habitualmente se habla del esparcimiento al aire libre como de un recurso económico. Comités senatoriales nos comunican, en cifras reverentes, los muchos millones que la gente se gasta en su persecución. Es cierto que tiene un aspecto económico —un chalé a la orilla de un lago de pesca, o incluso un puesto para cazar patos en un humedal, pueden costar tanto como la granja de al lado con sus terrenos.

También tiene un aspecto ético. En la arrebatfiña por los sitios intactos, evolucionan códigos y decálogos. Hablamos de los «modales al aire libre». Adoctrinamos a la juventud. Imprimimos definiciones de «¿Qué es un deportista?» y colgamos una copia de la pared de cualquiera que pague un dólar para la propagación de la fe.

Resulta obvio, sin embargo, que estos fenómenos económicos y éticos son resultados de la fuerza motriz, y no causas. Buscamos contacto con la natura-

leza porque con ello obtenemos placer. Como en la ópera, la maquinaria económica se emplea para crear y mantener instalaciones. Como en la ópera, hay profesionales que se ganan la vida creando y manteniendo tales instalaciones, pero sería falso decir que el motivo básico, la *raison d'être*, es económico. El cazador de patos en su parapeto y el cantante de ópera sobre el escenario, a pesar de la disparidad de sus avíos, están haciendo la misma cosa. Cada uno de ambos está reviviendo, como juego, un drama antaño intrínseco a la vida cotidiana. Si se analiza a fondo lo que hacen, ambos se libran a un ejercicio estético.

Las políticas públicas sobre el esparcimiento al aire libre dan origen a polémicas. Ciudadanos igualmente puntillosos mantienen puntos de vista opuestos sobre lo que constituye su base de recursos, y lo que habría que hacer para mantenerla. Así, la *Wilderness Society*³ quiere que no haya carreteras en el interior silvestre del país, y la Cámara de Comercio quiere aumentarlas, y ambas agrupaciones invocan el esparcimiento. El gestor de la caza mata halcones, y el amante de las aves los protege, en nombre de la caza con arma de fuego y de la caza con prismáticos, respectivamente. Tales facciones suelen estigmatizarse unas a otras con breves nombres injuriosos, cuando de hecho cada una de ellas está considerando diferentes componentes en el proceso de esparcimiento. Estos componentes *difieren sustancialmente en sus características o propiedades*. Una política concreta puede resultar correcta para una de ellas, pero equivocada para la otra.

Por todo ello, se diría que ha llegado el momento de separar los componentes, y de examinar las características o propiedades distintivas de cada uno.

Comencemos con lo más sencillo y evidente: los objetos físicos que el amante del aire libre puede buscar, encontrar, capturar y llevarse. En esta categoría entran las cosechas silvestres de la caza y la pesca, así como los símbolos o marcas de hazañas (tales como cabezas, pieles, fotografías y especímenes).

Todas estas cosas se basan en la idea de *trofeo*. El placer que proporcionan estriba —o debería estibar— tanto en la búsqueda como en la captura. El trofeo, ya se trate de un huevo de ave, un plato de trucha, una cesta de setas, la fotografía de un oso, una flor silvestre prensada, o una nota deslizada

3. Una de las mayores organizaciones conservacionistas estadounidenses, de la que el propio Aldo Leopold fue cofundador en 1935, y que ha seguido desplegando una intensa actividad hasta nuestros días. Su sede está en Washington, contaba con 400.000 afiliados a comienzos de los noventa (frente a 650.000 del Sierra Club, fundado en 1892), y edita la prestigiosa revista *Wilderness*. (N. del t.)

dentro del mojón de piedras que marca la cumbre de una montaña, es un *certificado*. Da fe de que su propietario estuvo en cierto lugar e hizo cierta cosa —que puso de manifiesto destreza, persistencia o discernimiento en la milenaria proeza de vencer, sobrepasar en ingenio o reducir a posesión. Tales connotaciones vinculadas al trofeo normalmente exceden con mucho su valor como objeto físico.

Pero los trofeos difieren en sus reacciones ante la persecución masiva. El rendimiento en caza y pesca puede incrementarse —mediante propagación o gestión de los recursos— de manera que pueda darse más a cada cazador, o lo mismo a un mayor número de cazadores. En el pasado decenio, apareció la profesión de gestor de la vida silvestre. Una veintena de universidades enseña sus técnicas, y realiza investigación para lograr mayores y mejores cosechas de animales salvajes. Sin embargo, si se llevan demasiado lejos las cosas, este avance de los rendimientos está sujeto a una ley de rendimientos decrecientes. La gestión demasiado intensiva de la caza y la pesca rebaja el valor unitario del trofeo al artificializarlo.

Consideremos, por ejemplo, una trucha criada en vivero y liberada recientemente en una corriente donde la pesca fue excesiva. La corriente ha dejado de poder producir truchas de modo natural. La contaminación ha malogrado sus aguas, o bien la deforestación y la erosión han elevado la temperatura y la carga de sedimentos. Nadie sostendría que esta trucha tiene el mismo valor que una completamente silvestre, atrapada en el curso alto intacto de algún río en las Montañas Rocosas. Sus connotaciones estéticas son inferiores, aunque su captura exija destreza. (Tiene el hígado tan destrozado por la alimentación en el vivero, según un autor, que puede presagiarse una muerte temprana). Sin embargo, varios estados donde se incurrió en sobrepesca ahora dependen casi por completo de semejante trucha manufacturada.

Existen todos los grados intermedios de artificialidad; pero a medida que el uso masivo aumenta, tiende a desplazar toda la gama de técnicas de conservación hacia el extremo del artificio, y toda la escala de valores de los trofeos hacia abajo.

Para proteger esta trucha cara, artificial, y más o menos inválida, la Comisión de Conservación se siente obligada a matar a todas las garzas y charranes que aparezcan por el vivero de cría, y a todos los mergánsares⁴ y nutrias que viven en la corriente de suelta. Acaso el pescador no sienta pérdida alguna

4. *Merganser* es en inglés el nombre vulgar de *Mergus merganser*; pato buceador característico de EE.UU. (N. del t.)

en este sacrificio de una clase de vida silvestre por otra, pero el ornitólogo se morderá las uñas. La gestión artificializada de la pesca, de hecho, ha proporcionado pesca a costa de otras formas de esparcimiento quizá más valiosas; le paga a un ciudadano dividendos a costa del *stock* de capital que pertenece a todos. El mismo tipo de disparate biológico prevalece en la gestión de la caza. En Europa, donde se dispone de estadísticas sobre cosechas de vida salvaje para series largas, incluso conocemos la «tasa de intercambio» de caza por depredadores. Así, en Sajonia cada halcón muerto supone siete aves de caza en el morral del cazador, y cada depredador de cualquier especie, tres piezas de caza menor en promedio.

Habitualmente, a la gestión artificializada de animales sigue el daño a la vida vegetal —por ejemplo, bosques dañados por ciervos. Esto se puede ver en el norte de Alemania, en el nordeste de Pennsylvania, en el Kaibab, y en docenas de otras regiones menos conocidas. En cada uno de estos casos los sobreabundantes ciervos, privados de sus enemigos naturales, han imposibilitado que sobrevivan o se reproduzcan las plantas de que se alimentan. Hayas, arces y tejos en Europa, pinabetes⁵ y cedro blanco en los Estados del este, caoba de montaña y *cliff-rose* en el Oeste, son alimento de ciervos amenazado por los ciervos artificializados. La composición de la flora, desde las flores silvestres a los árboles del bosque, se empobrece gradualmente, y a su vez los ciervos padecen enanismo por malnutrición. En los bosques de hoy no hay cornamentas como las que ornaban los muros de los castillos feudales.

En los brezales ingleses, la reproducción de los árboles se ve impedida por conejos sobreprotegidos en el proceso de cosechar perdices y faisanes. En docenas de islas tropicales tanto la flora como la fauna nativa han sido destruidas por cabras que se introdujeron para carne y caza. Sería difícil calcular las heridas mutuamente infligidas entre mamíferos desprovistos de sus depredadores naturales, y zonas privadas de sus plantas alimenticias naturales. Los cultivos agrícolas comprendidos entre estos hitos superior e inferior de mala gestión ecológica solamente se salvan al precio de indemnizaciones sin cuento y cercas de alambre de espino.

Generalicemos: el uso masivo tiende a diluir la calidad de trofeos orgánicos como la caza y la pesca, y a inducir daño a otros recursos (como los animales que no se cazan, la vegetación natural y los cultivos agrícolas).

Semejante dilución y daño no se muestra en el rendimiento de trofeos «indirectos», como las fotografías. Hablando en términos generales, un trozo de

5. *Ground hemlock* en el original: árboles de hoja perenne del género *Tsuga*. (N. del t.)

paisaje captado por una docena de cámaras de turistas al día no se deteriora físicamente por ello, y ningún otro recurso padece si la tasa se eleva a un centenar de instantáneas. La industria fotográfica es uno de los pocos parásitos inocentes de la naturaleza virgen.

De manera que, en lo que hace al uso masivo, tenemos una diferencia básica entre dos categorías de objetos físicos perseguidos como trofeos.

Consideremos ahora otro componente del esparcimiento, que es más sutil y complejo: el sentimiento de soledad en la naturaleza. Que está adquiriendo un valor de escasez muy elevado para algunas personas lo prueba la polémica sobre la naturaleza virgen. Los defensores de ésta han llegado a un compromiso con las instituciones «construyecarreteras» encargadas de la custodia de nuestros Parques y Bosques Nacionales. Se han puesto de acuerdo en la reserva formal de ciertas áreas sin carreteras. Por cada docena de zonas vírgenes que se explotan, una puede proclamarse oficialmente «naturaleza virgen», y las carreteras llegarán sólo hasta sus límites. Mucho antes de que sus senderos se congestionen, será engalanada con el fin de que trabaje para las CCC,⁶ o bien un incendio inesperado hará necesario dividirla en dos con una pista para los bomberos. O bien la congestión inducida por los anuncios estimulará los precios de guías y animales de carga, momento en el cual alguien descubrirá que la política de preservación es antidemocrática. O bien la Cámara de Comercio local, al principio reposada ante la novedad de un traspais oficialmente etiquetado «virgen», prueba la primera sangre de dinero de turistas. Entonces quiere más, con naturaleza virgen o sin ella.

En pocas palabras, la misma escasez de lugares silvestres, en interacción con los *siempre más* de la promoción y la publicidad, tiende a derrotar cualquier esfuerzo deliberado de impedir que se vuelvan aún más escasos.

Es evidente sin más que el uso masivo entraña una dilución directa de las oportunidades de soledad; que cuando hablamos de carreteras, zonas de acampada, sendas y retretes como «desarrollo» de recursos de esparcimiento, hablamos falsamente en lo que hace a este componente. Tales alojamientos para la multitud no desarrollan nada (en el sentido de añadir o crear). Por el contrario, son sencillamente más agua vertida en la sopa ya muy aguada.

A continuación contrastaremos el componente de aislamiento con otro, bien distinto aunque simple, que podemos llamar «aire fresco y cambio de aires».

6. Siglas de las *Civilian Conservation Corps*, Unidades Civiles de Conservación, una institución típica del *New Deal* para la cual el mismo Leopold desempeñó en los años treinta algunos trabajos de supervisión (en labores de control de la erosión). Las CCC fueron eliminadas en 1945. (N. del t.)

El uso masivo no destruye ni diluye este valor. El turista número mil que atraviesa la puerta del Parque Nacional respira aproximadamente el mismo aire que el primero, y experimenta el mismo contraste con la rutina de los días laborables. Incluso podría aventurarse que el asalto gregario a las afueras realza el contraste. Podemos decir, entonces, que el componente «aire fresco y cambio de aires» es como el trofeo fotográfico —soporta el uso masivo sin deterioro.

Abordemos ahora otro componente: la percepción de los procesos naturales a través de los cuales la tierra y los seres vivos sobre ella han desarrollado sus formas características (evolución), y por medio de los cuales mantienen su existencia (ecología). Lo que llamamos «estudio de la naturaleza», pese a que les pone los pelos de punta a los cargos electos, constituye el primer tanteo embrionario de la mente de la masa hacia la percepción.

La característica más sobresaliente de la percepción es que no entraña consumo ni dilución de ningún recurso. El descenso en picado de un halcón, por ejemplo, uno lo percibirá como el drama de la evolución. Para otro será sólo una amenaza contra la sartén llena. El drama puede estremecer a un centenar de testigos sucesivos; la amenaza sólo a uno —porque responde con un disparo.

Promover la percepción es la única fase verdaderamente creativa de la ingeniería del esparcimiento.

Este hecho es importante, y su potencial para mejorar «la buena vida» sólo se entiende imperfectamente. Cuando Daniel Boone⁷ penetró por primera vez en los bosques y las praderas del «suelo oscuro y sangriento», se apropió de la pura esencia de la «América del aire libre». No lo llamó así, pero lo que encontró es precisamente lo que nosotros estamos buscando, y aquí tenemos que habérmolas con las cosas, no con los nombres.

El esparcimiento, no obstante, no son los parajes al aire libre, sino nuestra reacción ante ellos. La reacción de Daniel Boone dependía no sólo de la calidad de lo que veía, sino de la calidad del ojo mental con que lo veía. La ciencia ecológica ha efectuado un cambio en el ojo mental. Ha revelado orígenes y funciones de lo que para Boone eran meros hechos. Ha revelado

7. Daniel Boone (1734-1820), colonizador estadounidense inmortalizado por Fenimore Cooper en sus novelas (con los nombres de *Carabina Larga*, *Ojo de Halcón*, etc.). En 1769 fundó en Kentucky, por entonces deshabitado, el primer establecimiento permanente, al que dio el nombre de Boonesborough. Al ser desposeído por el gobierno de la Unión, construyó una cabaña a orillas del Missouri, donde se retiró. (N. del t.)

mecanismos de los que para Boone eran atributos. No tenemos criterios para medir este cambio, pero podemos decir con seguridad que, en comparación con un ecólogo competente de nuestros días, Boone vio sólo la superficie de las cosas. Las increíbles complejidades de la comunidad de plantas y animales —la belleza intrínseca del organismo llamado América, por aquel entonces en todo el esplendor de su doncellez— eran tan incomprensibles para Daniel Boone como en nuestros días lo son para el señor Babbitt. El único auténtico desarrollo de los recursos de esparcimiento americanos es el desarrollo de la facultad perceptiva de los americanos. Todas las demás acciones a las que enaltecemos con el término «desarrollo» son, en el mejor de los casos, intentos para retrasar o enmascarar el proceso de dilución.

Que nadie se abalance sobre la conclusión de que Babbitt debe doctorarse en ecología antes de que pueda «ver» su país. Por el contrario, el doctor puede volverse tan insensible como un director de pompas fúnebres frente a los misterios donde oficia. Como todos los verdaderos tesoros de la mente, la percepción puede dividirse en fracciones infinitamente pequeñas sin perder su calidad. Las malas hierbas en un solar de ciudad enseñan la misma lección que el bosque de secoyas; el granjero puede ver en sus pastizales lo que acaso no le sea concedido al científico que se aventura en los mares del Sur. La percepción, en pocas palabras, no puede comprarse ni con enseñanza académica ni con dólares; crece en nuestro hogar igual que en tierras extrañas, y quien tiene una poca puede usarla con tan buen provecho como quien tiene mucha. En cuanto búsqueda de percepción, la estampida recreativa no tiene ni pies ni cabeza.

Queda, por último, un quinto componente: el sentido de cuidado de la tierra con manejo prudente.⁸ Le resulta desconocido al excursionista que trabaja en pro de la conservación con el voto más que con sus propias manos. Se realiza sólo cuando algún arte de buen manejo es aplicado a la tierra por alguna persona perceptiva. Es decir, su disfrute queda reservado a propietarios de tierra demasiado pobres como para comprar deporte, y a administradores de tierras con ojo agudo y mente ecológica. El turista que compra acceso a un paisaje se lo pierde por entero; igual que el deportista que paga al estado, o a alguno de sus subordinados, para que sea su guardabosque. El Gobierno, que intenta poner el funcionamiento de las zonas de esparcimiento en manos públicas más que privadas, sin darse cuenta está entregando a sus funcionarios sobre el terreno una buena porción de lo que intenta ofrecer a los ciudadanos. Nosotros, los forestales y guardas de caza, en buena lógica deberíamos pagar

8. *The sense of husbandry* en el original. *Husbandry* es un término muy rico: significa «labranza, agricultura», pero también —en sentido figurado— «buen gobierno, manejo prudente». He intentado verterlo con la perifrasis que arriba se lee. (N. del t.)

por nuestro trabajo como custodios de las cosechas silvestres, en lugar de ser pagados por ello.

Que el sentimiento de custodia de la tierra puesto en práctica en la producción de cosechas puede ser tan importante como las cosechas en sí mismas se observa hasta cierto punto en la agricultura, pero no en la conservación de la naturaleza. Los deportistas americanos tienen en poco el cultivo intensivo de los brezales de Escocia (para la caza) o de los bosques alemanes, y en ciertos aspectos no les falta razón. Pero ignoran por completo el sentido de cuidado de la tierra que desarrolla el terrateniente europeo en ese proceso de cultivo. Nosotros no tenemos nada parecido todavía. Cuando concluimos que debemos ponerle subvenciones como cebo al granjero para inducirle a plantar un bosque, o que cobre por la entrada a un coto para incitarle a criar animales de caza, simplemente estamos admitiendo que los placeres del cuidado de la tierra silvestre nos son todavía desconocidos, tanto al granjero como a nosotros mismos.

Los científicos tienen un epigrama: la ontogenia repite la filogenia. Lo que quieren decir es que el desarrollo de cada individuo repite la historia evolutiva de la especie. Eso es cierto tanto de las cosas mentales como de las físicas. El cazador de trofeos es el hombre de las cavernas redivivo. Cazar trofeos es la prerrogativa de la juventud, individual o de la especie, y no hay que disculparse por ello.

Lo inquietante en la situación moderna es el cazador de trofeos que nunca crece, en quien están subdesarrolladas —o caso perdidas del todo— las capacidades de soledad, percepción, y cuidado de la tierra. Es la hormiga motorizada que asalta los continentes como una marabunta antes de aprender a ver su propio patio trasero, y que consume, pero nunca repone, los recursos de la naturaleza. Para él, el ingeniero del esparcimiento diluye la naturaleza virgen⁹ y artificializa sus trofeos, abrigando la creencia indulgente de prestar un servicio público.

Quien busca esparcimiento en los trofeos tiene peculiaridades que contribuyen de una manera sutil a su propia ruina. Para disfrutar tiene que poseer, invadir, apropiarse. Por eso la naturaleza virgen que no puede ver personalmente carece de valor para él. De ahí el supuesto universal según el cual una

9. He optado por «naturaleza virgen» para traducir *wilderness* (un término clave en *A Sand County Almanac*, y en general en la cultura protoecologista estadounidense que esbozaron Thoreau y John Muir, y que culmina en Aldo Leopold). Otras opciones hubieran sido «naturaleza salvaje» o «naturaleza silvestre», o incluso «desierto» si la palabra hubiese retenido su sentido antiguo en castellano (*wild* significa «salvaje, silvestre, agreste, bravo»). (N. del t.)

zona remota que no se usa no está prestando ningún servicio a la sociedad. Para los desprovistos de imaginación, un espacio en blanco en el mapa es derroche y desperdicio; para otros, la parte más valiosa. (¿La porción de Alaska que me corresponde carece de valor porque nunca iré allí? ¿Necesito una carretera que me muestre las praderas árticas, los terrenos de los gansos en Yukon, el oso Kodiak, los prados de ovejas detrás del monte McKinley?)

En pocas palabras, se diría que las formas más rudimentarias de esparcimiento al aire libre consumen su base de recursos; en cambio las formas más elevadas, al menos hasta cierto punto, crean sus propias satisfacciones con escaso o ningún deterioro de la tierra o la vida. Es la expansión del transporte, sin un crecimiento correspondiente de la percepción, lo que nos amenaza con la bancarrota cualitativa del proceso de esparcimiento. El desarrollo de posibilidades de esparcimiento no es cosa de construir carreteras hacia los amables paisajes, sino de construir receptividad en la mente humana todavía poco amable.

Traducción de Jorge Riechmann

Anejo: vida de Aldo Leopold

por JORGE RIECHMANN

Aldo Leopold nace el 11 de enero de 1887 en Burlington (Iowa), a orillas del río Mississippi, y éste será el pueblo de su infancia. Recibe importantes influencias formativas de su abuelo Charles Starker (ingeniero y paisajista originario de Stuttgart, en Alemania), su padre Carl Leopold (cazador, naturalista y pionero en apreciar el valor moral de la deportividad) y sobre todo de su madre Clara Starker, dotada de una aguda sensibilidad estética, para quien Aldo será el favorito entre sus cuatro hijos. Ya de niño le fascina la naturaleza, practica como aficionado la ornitología y la historia natural, y en largos paseos, cacerías y excursiones se hacen patentes sus inusuales dotes de observación.

A partir de 1905 estudia gestión forestal en Yale, la primera universidad que había introducido estos estudios (en 1900, y gracias a un donativo de la familia de Gifford Pinchot); y en 1909 comienza a trabajar en el Servicio Forestal de los Estados Unidos (*U.S. Forest Service*) del mismo Pinchot,¹⁰ primero en

10. El sistema de los *National Forests* en EE.UU. se había empezado a construir en 1891, con la aprobación por el Congreso de la *Forest Reserve Act*, que facultaba al presidente para crear reservas forestales.

Arizona (Bosque Nacional Apache) y después en Nuevo Méjico. Forma parte de las primeras promociones de una élite de profesionales de la gestión forestal formados según el credo pinchotiano: eficiencia y racionalidad en el aprovechamiento de los recursos naturales.

En 1911 ya es supervisor de una zona de un millón de acres, el Bosque Nacional Carson en Nuevo Méjico. El mismo año se enamora de Estella Bergere, una acaudalada señorita hispana de Santa Fe,¹¹ y se casan en octubre de 1912. «Ella fue el centro de la vida de Leopold».¹² Después de una grave nefritis (en 1913) y dieciocho meses de convalecencia, pasa a hacer más trabajo de oficina y menos al aire libre; su interés se desplaza hacia la gestión faunística, donde será un verdadero pionero. En 1915 se convierte en la fuerza impulsora de la *New Mexico Game Protective Association*, organización que reclamaba la racionalización de la gestión de la caza y la pesca en el estado.

En 1917 Leopold ya es una figura reconocida por sus éxitos en el Suroeste, y comienza a publicar regularmente artículos sobre su especialidad en publicaciones periódicas de ámbito nacional. A finales de la década su pensamiento está evolucionando notablemente: desde su inicial concepción tecnocrática de la gestión forestal y faunística, va pasando a una visión preservacionista crecientemente preocupada por la pérdida de naturaleza silvestre en Norteamérica. Si en su programa inicial la maximización de la caza (ciervos, cabras montesas, etc.) implicaba el exterminio de los grandes predadores (lobos, pumas...), en años posteriores llegará a verlo como un grave error y se arrepentirá amargamente.¹³ Históricamente Leopold será considerado el «padre» del sistema de protección de la vida silvestre dentro de los Bosques Nacionales.

En 1924 deja el Servicio Forestal para convertirse en director asociado del Laboratorio de Productos Forestales de Madison (Wisconsin); antes ha logrado convencer a sus jefes para que otorguen protección a 500.000 acres del Bosque Nacional de Gila en Nuevo Méjico (que así se convierte en la primera área preservada del sistema de Bosques Nacionales estadounidense). Insatisfecho con su trabajo en el laboratorio, lo abandona en 1928. Entonces tra-

11. El patriarca de la familia, Solomon Luna, controlaba un verdadero imperio ovino, y hacía remontar su estirpe a la nobleza medieval española.

12. Curt Meine: «Aldo Leopold's Early Years», en J. Baird Callicott: *Companion to 'A Sand County Almanac'*, The University of Wisconsin Press, Madison 1987, p. 29.

13. Véase Susan Flader: *Thinking Like A Mountain. Aldo Leopold and the Evolution of an Ecological Attitude Toward Deer, Wolves, and Forests*. University of Missouri Press, Columbia. 1974. (Reedición en University of Wisconsin Press, 1994).

baja como consultor independiente para cuestiones forestales y faunísticas. En 1933 publica su obra *Game Management (Gestión de la fauna)*, trabajo pionero e interdisciplinar donde se combinan nociones procedentes de la agricultura, la ciencia forestal, la zoología, la ecología y la pedagogía con el objetivo de proporcionar una base sólida a la gestión de la fauna silvestre. Poco después de la publicación de este libro, la Universidad de Wisconsin crea para él una cátedra de gestión de la fauna, donde impartirá docencia hasta su muerte.

A mediados de los años treinta Leopold ya ha alcanzado la madurez de su pensamiento, y está en posesión de las líneas maestras de un revolucionario sistema ético donde la naturaleza se integra a la vez que los seres humanos (ideas que hallarán su expresión más acabada en *A Sand County Almanac*). En 1935, junto con otros ocho influyentes preservacionistas, funda la organización *The Wilderness Society*. El mismo año compra una granja muy deteriorada cerca de Baraboo, en Wisconsin, en una zona conocida como *los condados de arena (the sand counties)*.¹⁴ Con la ayuda de su familia —su mujer Estella y sus cinco hijos— quiere poner en práctica sus ideas de restauración ecológica recuperando aquella tierra degradada. Reconstruyen un gallinero como cabaña —*The Shack*, «la choza»— para sus estancias de fin de semana, durante las cuales plantarán miles de árboles en los años por venir, restaurando una rica biodiversidad. Tales experiencias alimentan la que será su obra más conocida, *A Sand County Almanac (Almanaque del Condado Arenoso)*, en la que trabaja desde 1941.¹⁵

Leopold muere de un ataque al corazón el 11 de abril de 1948, mientras intentaba apagar un incendio en la granja de un vecino que amenazaba sus propias repoblaciones forestales.¹⁶ Poco antes, había sido nombrado consejero para conservación de la naturaleza de las NN.UU. Su obra principal, el con-

14. Tiene interés recordar que inicialmente lo que buscaba la familia Leopold no era más que un refugio de caza, desde donde practicar la caza del ciervo con arco y flecha. Véase Leopold, prólogo de 1947 a *A Sand County Almanac*, en J. Baird Callicott: *Companion to 'A Sand County Almanac'*, op. cit., p. 287.

15. Aunque el origen de muchos materiales es más antiguo (por ejemplo, «Estética de la conservación» se había publicado en 1938). Hay que entender *A Sand County Almanac* como la obra de toda una vida de experiencia, estudio y reflexión.

16. Tras su muerte se creó una fundación, denominada primero The Aldo Leopold Sand County Trust, y a partir de 1983 The Aldo Leopold Foundation, con el objetivo de proseguir su trabajo y preservar la granja familiar junto al río Wisconsin (hoy convertida en la Aldo Leopold Memorial Reserve). La fundación desempeña tareas de educación ambiental, restauración ecológica e investigación científica. Su dirección: E-12919 Levee Road, Baraboo, Wisconsin, 53913 USA. Correo electrónico: leopold @@ baraboo.com

junto de ensayos *A Sand County Almanac*, que con una prosa a tramos no exenta de lirismo combina precisas observaciones de la naturaleza, valoraciones estéticas y razonamientos morales, se publica póstumamente en 1949, y en el mundo anglosajón ha ejercido una inmensa influencia en la orientación del movimiento ecologista, así como en la reflexión moral sobre cuestiones ecológicas.¹⁷

17. Un ejemplo puede hallarse en el libro seminal de Van Rensselaer Potter *Bioethics: Bridge to the Future* (1971), dedicado a Aldo Leopold. Por otro lado, hay que mencionar que en los años cuarenta Leopold tuvo dificultades al buscar editor para su manuscrito; sólo se vendieron unos veinte mil ejemplares hasta el despegue del moderno movimiento ecologista en los sesenta; y a partir de ahí tuvo lugar una verdadera explosión, con más de un millón de ejemplares de sus varias ediciones vendidos en los sesenta, setenta y ochenta.

México: 25 años después Hacia un nuevo entendimiento*

DAVID BARKIN

México ha vuelto ser el «milagro» de la economía latinoamericana. Después de sufrir la «década perdida» de los 80s, conjuntamente con la mayoría de los otros países de la región, el país se «reubicó» exitosamente, aparentemente, para enfrentar los retos de la globalización. No sólo reorganizó su estructura productiva para tomar ventaja de su refrendo del Acuerdo General de Tarifas y Comercio (ahora Organización Mundial de Comercio, u OMC) y emprendió una acelerada simplificación de su sistema de cuotas y otras barreras al comercio internacional, remplazándolo con reducidos impuestos que convirtió al país en uno de los más abiertos a la importación con un importante incremento del comercio internacional. También realizó los ajustes institucionales requeridos para su integración al Tratado de Libre Comercio de América del Norte.

El hemisferio está inserto en un mar de desastres económicos y sociales —desde la profunda crisis social de Argentina, los cambios que enfrenta Venezuela, la creciente dosis de violencia en Colombia, hasta los problemas aparentemente irresolubles para colocar a las repúblicas centroamericanas en el camino hacia el desarrollo económico. ¿Porqué enfocarme en los problemas que actualmente enfrenta México y las contradicciones que le auguran grandes conflictos para los años venideros? En lugar de atribuir este esfuerzo por desentrañar las contradicciones subyacentes en el modelo mexicano ac-

* Resumen de la Conferencia Magistral en la Conferencia Anual de la Sociedad de Estudios Latinoamericanos de Reino Unido, marzo de 2002. Se agradecen comentarios de los lectores: barkin@cueyatl.uam.mx.

tual a los caprichos de un «aguafiestas», pediría considerar mi análisis como una base para reflexionar acerca de los profundos estragos que están dejando en el país y sobre el peligro de continuar con la presente estrategia de desmesurada integración internacional. Por último, finalizaré con una nota positiva, al considerar varias posibles alternativas que algunos grupos en México intentan desde ahora implementar.

Una breve historia económica

Sin adentrarnos en detalles metodológicos o las nimiedades de los cambios en el significado social del salario mínimo durante los últimos 65 años, considero que una breve descripción de la evolución de su poder adquisitivo ofrece una conveniente metáfora para examinar la historia económica de México durante gran parte del siglo XX (Figura 1).¹



Basta decir, para éste propósito, que después de un prolongado período de prosperidad sin precedentes de 1935 a 1970 compartido por todos los segmentos de la población —caracterizado en su momento como «el milagro mexicano»—, una serie de crisis marcó el comienzo de una etapa —aparentemente intermi-

1. Muchos de estos detalles, son parte del análisis histórico en mi libro, *Un desarrollo distorsionado: México en la economía mundial*, (México: Siglo XXI, 1991).

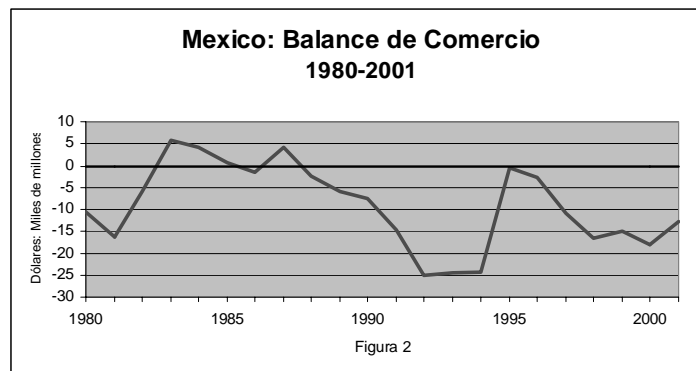
nable— de declive de los ingresos reales del pueblo, gráficamente representado por la evolución del valor real del salario mínimo hacia a su nivel más bajo desde que fue instituido en 1934. A pesar de que su significado social es diferente en nuestros días, de lo que era en su cenit en 1976, no hay duda de que con este declive, que ha durado más de un cuarto de siglo, ahora casi tres cuartas partes de la población se encuentra viviendo en la pobreza.²

El deterioro de los ingresos personales estuvo acompañado por un dramático cambio de la distribución geográfica de la actividad. Con el nuevo énfasis en las maquiladoras como la fuente de dinamismo para la integración de la economía en los mercados globales, comenzando a mediados de los años 80, la región de la frontera norte experimentó una nueva importancia que todavía en nuestros días no está preparada para manejar. Más de 3.000 firmas se establecieron allá, contratando algo más de 1.3 millones de personas en su apogeo, en los parajes del norte «semiárido» de México; concentradas en cuatro ciudades enormes (Tijuana, Cd. Juárez, Nuevo Laredo y Matamoros), y más de una docena de otras ciudades fronterizas más pequeñas, los gobiernos locales nunca han contado con los recursos fiscales o administrativos, ni la capacidad humana, para manejar este crecimiento desbordante. La migración interna se volvió una fuerza poderosa, polarizando al país al re-orientar el crecimiento de la población hacia el norte, restando recursos de otras regiones. Actualmente, con el repliegue de estas empresas, la región está comenzando a agregar los males asociado con el desempleo y el desmoronamiento social a sus demás problemas.

Una segunda fuente de dinamismo económico, el sector automotriz, también ha sido transformado profundamente por la integración. Pasó de ser una industria altamente protegida que elaboraba productos costosos para el mercado local del centro del país, a ser una parte importante de la industria de ensamblaje de vehículos con piezas producidas en los tres países del TLC, jactándose de contar con al menos una de las plantas más productivas a escala mundial. Esta industria también fue reubicada en nuevas instalaciones en los desiertos del norte de México para facilitar la importación de auto partes y la exportación de vehículos terminados; intensificó aún más la presión sobre los escasos recursos acuíferos y frágiles ecosistemas, fomentando la migración desde el centro y sur de México.

2. Uno de los principales académicos mexicanos, analista de las estadísticas sobre estándares de vida y niveles de ingreso, Julio Boltvinik, estima que una familia en la actualidad requiere de más de seis salarios mínimos para ser capaces de vivir sobre el nivel de pobreza establecido oficialmente, muy por encima del ingreso de más de tres cuartos de los hogares mexicanos. También sostiene que por encima del 40% de la población está actualmente viviendo en la pobreza extrema, un estándar de vida que no permite adquirir y/o producir los bienes mínimos indispensables necesarios para la mera supervivencia.

Irónicamente, en respuesta al dinámico crecimiento de estos dos sectores, el balance de comercio internacional ha estado en déficit desde inicios de los años 90 (Figura 2). Si bien se redujo de alguna manera en el reciente período debido al dramático descenso de los ingresos personales, la «des-construcción» del sector industrial obligó a un incremento muy importante en la importación de materias para la producción de bienes de consumo. Desafortunadamente, la política agrícola se sumó al proceso, alentando la importación masiva de alimentos básicos y agudizando las presiones contra los campesinos quienes, al igual que decenas de miles de pequeños empresarios, se encuentran incapaces de enfrentar a la competencia extranjera.³



El Balance Final

Resumiendo: Los mexicanos han transitado de una incipiente prosperidad hacia la pobreza. Durante las décadas que siguieron a la Revolución, México disfrutó de crecimiento industrial, la consolidación de una fuerza de trabajo industrial, y la modernización de su agricultura, con un sector campesino

3. La nueva estructura de las importaciones y exportaciones confirma los enormes cambios esbozados en el texto. La estructura de las exportaciones del país se transformó drásticamente, de productos primarios —agrícolas y del petróleo— a los productos manufacturados, provenientes de las maquiladoras y la industria automotriz. Paralelamente, los bienes «intermedios» para la industria nacional han incrementado su participación en las importaciones, para proveerse de partes y materiales necesarios para el consumo nacional y la manufactura de los productos que serán exportados, ya que pocas empresas nacionales las que se encuentran en condiciones a surtir las necesidades de los productores de manufacturas.

dinámico e innovador, al igual que de mejoras substanciales en el estándar de vida de casi todos sus grupos sociales, con una amplia disponibilidad de oportunidades educativas y servicios de salud. Es verdad que la desigualdad se incrementó considerablemente en México y que el autoritarismo político resultó cada vez más opresivo, pero para mediados de los 60's había un aura de optimismo que permeó a todo el país, incorporando virtualmente a todos los segmentos de la sociedad.

Los reveses dramáticos desde finales de los años 60 y el desorden político generado por la incapacidad del sistema de continuar cumpliendo con las promesas de la «revolución de expectativas crecientes» le abrieron la puerta a un largo período de crisis múltiples y lucha política. Durante la primera mitad de los 70, un segmento significativo de la clase capitalista incurrió en una guerra de clases abierta contra el gobierno central cuando éste intentó proteger los salarios, comenzando una interrupción sin precedente a la actividad de inversión lo cual provocó un proceso de conflicto social y económico. Tuvo que pasar más de una década para que la situación se tranquilizara, con profundos estragos que afectaron a todos, aunque de manera desigual. Al final, un nuevo grupo social tuvo el control y emprendió una serie de reformas institucionales y sociales para preparar la nación para su cabal inserción a la economía mundial.

El declive de los salarios reales y de la calidad de vida fue acompañado por el auge de la economía informal, el comienzo de un proceso de desintegración social y el surgimiento de la economía del narcotráfico. Le acompañó un período de tranquilidad social engañoso, resultado de una política de represión económica que congeló los salarios para lograr una mayor estabilidad de los precios; un paquete creativo de «apoyos» («sobornos») compró una amplia base de respaldo popular para las políticas que promovían la integración internacional.⁴ La pretensión de pertenecer al «primer mundo» fue simbolizada por su incorporación a la Organización de Cooperación Económica y Desarrollo (el «Club» de los países ricos), y la apertura de las negociaciones para su incorporación al Tratado de Libre Comercio de América del Norte. Los desequilibrios creados por una moneda sobrevaluada, impropiedades financieras y el desmantelamiento de la estructura productiva nacional provocaron la devaluación devastadora de Diciembre de 1994, que causó sufrimiento.

4. Estos «sobornos» incluyeron la importación masiva de ropa barata (zapatos tenis, ropa interior de algodón, y otros artículos provenientes de China) para las clases trabajadoras, alimentos industrializados y aparatos domésticos para las mujeres de clase media quienes se encontraban obligadas por primera vez a trabajar para completar el gasto familiar, créditos baratos para que las clases medias adquiriesen vivienda y productos electrónicos, y permisos para importar automóviles de lujo para los más acaudalados, entre otros programas.

miento entre toda la clase popular extendiéndose a la clase media y sectores mercantiles. El nuevo modelo depende de la inversión extranjera (en nuevas plantas, propiedades, y en la deuda interna y externa de México) y ofrece oportunidades atractivas a los jóvenes profesionistas dentro de los sectores financiero, de comunicaciones y de tecnología de la información. A finales de 2002 el futuro económico del país no es alentador: una nueva sobrevaluación cambiaría y la ausencia de una estrategia local para impulsar el aparato productivo, agudizado por los desequilibrios en el escenario mundial, contribuirán a un ambiente de incertidumbre e inestabilidad en todas las dimensiones de la vida nacional.

Modelos alternativos para la organización social y económica

No todos los mexicanos están esperando pasivamente ser arrojados al pantano del sector informal con el hundimiento de los salarios reales y el incremento de la miseria. Aunque parezca irracional, millones de familias campesinas continúan cultivando maíces nativos para su uso doméstico y el de sus comunidades.⁵ En los últimos años, ha emergido un grupo de hasta 15 millones de personas que reclaman membresía a comunidades étnicas, —aunque muchos de ellos ya no hablan una lengua indígena o de ninguna otra manera califican para este grupo de la población, según el censo oficial— (el cual reporta aproximadamente 6 millones de personas indígenas).

Después del levantamiento Zapatista en 1994, cientos —si no miles— de comunidades indígenas se afiliaron al Congreso Nacional Indígena y emprendieron programas locales y regionales para protegerse mejor de los problemas de la economía nacional. Estas comunidades están forjando sus propios caminos para implementar sistemas de auto-gobierno en sus organizaciones internas y en el manejo de sus territorios.

Sin entrar en mas detalle del que sería apropiado para esta corta presentación, es suficiente decir que comunidades indígenas y campesinas están buscando maneras de fortalecer sus organizaciones y su habilidad de sobrevivir al margen de la sociedad globalizada. Además de mantener relaciones con sus emigrantes y continuar produciendo sus necesidades básicas localmente, están encontrando muchas formas de diversificar su economía. Los sectores donde están adquiriendo mayor experiencia son: ecoturismo, producción

5. «Irracional» porque sembrar granos localmente cuesta más que importarlos desde países donde existen menores tasas de interés y mayores subsidios, como Estados Unidos. Para una discusión más extendida del nuevo valor del maíz en la sociedad mexicana, véase mi artículo: «The Reconstruction of a Modern Mexican Peasantry», *The Journal of Peasant Studies*, Vol. 30:1, 2002.

artesanal y administración del agua. Yo he estado trabajando con varios de estos proyectos y por lo tanto puedo resumir sus puntos más fuertes: involucran iniciativas que buscan identificar maneras de insertar innovaciones en las estructuras comunales existentes para producir nuevos bienes y servicios; estas iniciativas son más exitosas cuando los bienes pueden ser colocados en buenos mercados que protejan a los productores de la fuerza de la voraz competencia internacional o sistemas costosos de intermediación. En otras instancias, los proyectos ofrecen a las comunidades la oportunidad de producir servicios que se puedan comercializar (p.ej. culturales o de ecoturismo) o establecer programas de administración de ecosistemas que generen ingresos en un esfuerzo conjunto para implementar programas bajo la Convención de Kyoto para Combatir el Cambio Climático, o esfuerzos regionales para proteger o incrementar mantos acuíferos y bosques.

Los más exitosos de estos programas para construir alternativas a la globalización tienen un compromiso en común para no simplemente depender de nuevos productos o servicios. Explícitamente incluyen programas para fortalecer capacidades locales para la administración social, productiva y ambiental junto con algunas medidas de inversión para mantener o expandir la posibilidad local o regional de suplir las comodidades básicas requeridas para la supervivencia y bienestar de la comunidad. El proceso de la diversificación de la estructura productiva está cimentado en el fortalecimiento de las instituciones existentes y la defensa de las prácticas heredadas de producción y administración de ecosistemas. Estos son los elementos fundamentales para transportarse hacia una administración sustentable de los recursos regionales.⁶

*Traducción del original en inglés por Maya Delgado,
revisado por el autor*

6. Para mas información acerca de algunos de estos proyectos en los cuales estoy involucrado y que pretenden apoyar a las comunidades en aplicar estos principios, consultar los siguientes: *Innovaciones Mexicanas en el Manejo del Agua*, (México, Universidad Autónoma Metropolitana - Xochimilco, 2001); «Superando el Paradigma Neoliberal: Desarrollo popular Sustentable», en *¿Una Nueva Ruralidad en América Latina?*, Norma Giarracca, (comp.), CLACSO, Buenos Aires, 2000, pp. 81-99. (<http://www.clacso.org/libros/rural/rural.html>); «Producción de Carne de Puerco 'Lite' como Estrategia de Desarrollo Sustentable para Campesinos Michoacanos», *Espiral*, n. 26, (Ene.-Abr. 2003) (con Ma. de Lourdes Barón y Mario Alvizouri); «El desarrollo autónomo: Un camino a la sostenibilidad», en H. Alimonda (comp.), *Ecología Política: Naturaleza, sociedad y utopía*, CLACSO, Buenos Aires, 2002, pp. 169-202. (<http://www.clacso.edu.ar/~libros/ecologia.pdf>)

GIORGIO AGAMBEN: LA LUCIDEZ EN TIEMPOS DE EXCEPCIONALIDAD

GERARDO PISARELLO

Medios sin Fin. Notas sobre la política, Pre-Textos, Valencia, 2001.

El anuncio de guerra infinita profetizado desde los diferentes centros de operación del Imperio coloca al pensamiento crítico ante un riesgo evidente. De aquí en más, la oposición a la guerra puede convertirse en la más radical de las consignas. Pero también en la más superficial. Y es que, como el propio gobierno español se encargó de repetir mientras sus aliados bombardeaban Irak, «todos en el fondo queremos la paz». Hasta la extrema derecha italiana empapeló Roma con carteles que, sobre el manso aleteo de una paloma blanca, recordaban que «la paz no tiene colores». No basta, por tanto, con decir no a la guerra. Hay que rechazar también, y con todas sus implicaciones, el proceso de banalización de la guerra que intenta reducirla a un desagradable episodio aislado. A una irrupción temporal de violencia desconectada de otras formas cotidianas

de violencia. A un espectáculo, en definitiva, que una vez silenciado en los medios, autorizaría a todos los que se oponen a él a respirar con alivio y retomar sus tareas ordinarias.

Lo que los textos de G. Agamben persiguen es precisamente eso: cerrar paso a la vulgarización de lo intolerable repensando de manera radical las categorías tradicionales de lo normal y de lo excepcional. Como en el negativo de una fotografía, Agamben invierte el sentido de las reflexiones dominantes para demostrar cómo nociones gratas al oído, como Estado de derecho, derechos humanos, libertad o progreso, han perdido sustancia y centralidad hasta el punto de convertirse en figuras demediadas de las sociedades democrático-espectaculares en que vivimos. Con igual agudeza, explica de qué manera otras, concebidas originariamente como categorías marginales —Estado de excepción, guerra, refugiados, inmigrantes— constituyen conceptos cen-

trales e indivisibles sin los cuales la política de nuestro tiempo resultaría inexplicable.

Citando a Benjamin, en efecto, Agamben constata cómo desde el punto de vista de los oprimidos, de los *malhereux*, el Estado de excepción se ha convertido en regla. El poder sólo puede legitimarse apelando de manera constante a una situación de peligro grave que él mismo se esfuerza en producir secretamente. Y frente a esa producción de poder soberano, ilimitado, no hay rincón en el que mantenerse a salvo. El ámbito de lo privado se ha hecho indiscernible del ámbito de lo público. Por eso, el ejercicio del *ius belli* puede presentarse en el ámbito externo como una simple operación de policía, al tiempo que las actuaciones de policía, en el ámbito interno, se convierten en auténticas situaciones de guerra de baja intensidad.

En ese contexto, sugiere Agamben, no cabe preguntarse con tono hipócrita cómo pudieron cometerse los crímenes nazis o estalinistas. Tampoco cabe lamentar las atrocidades cometidas contra refugiados e inmigrantes en los países capitalistas o las muertes de miles de afganos e iraquíes como consecuencia de las nuevas guerras imperiales. Sería más honesto y útil indagar acerca de los procedimientos jurídicos y los dispositivos políticos que han permitido llegar a privar tan completamente de sus derechos a unos seres humanos, que emprender cualquier acción contra ellos no se considera ya un deli-

to. De ese modo, se advertiría que entre los campos de concentración nazis o estalinistas, los campos de detención de Guantánamo o los actuales centros de internamiento de inmigrantes, existe una incontestable relación de filiación. Y se advertiría también que todo ese proceso de deshumanización ha sido posible gracias a una profunda alienación y corrupción del lenguaje que, tras la caída del muro de Berlín, ha permitido que las sociedades del espectáculo concentrado (las del este) y las del espectáculo difuso (las occidentales) confluyan en un único espectáculo integrado. Este espectáculo global, hacia el que todas las formas de Estado se encaminan, abriga en su seno una de las formas más sutiles y devastadoras de tiranía que la humanidad haya conocido.

Nunca una época, asegura Agamben, ha estado tan dispuesta a soportarlo todo y a la vez a encontrarlo todo tan intolerable. Ahí residen la paradoja y el riesgo. Lo intolerable debe ser denunciado. Pero ¿cómo hacerlo sin reproducir el lenguaje alienado de la sociedad del espectáculo que todo lo ha tolerado? ¿Es posible oponerse a la guerra, es posible impugnar el nuevo estado de excepción internacional e interno con un lenguaje que no sea banal, con un lenguaje capaz de revelar sus complicidades profundas, su continuidad con otras formas trágicas y cotidianas de violencia? Las intuiciones de Agamben al respecto no son en ningún caso complacientes, pero tampoco apocalípticas. En su opinión, la sociedad del espectá-

culo contiene posibilidades que pueden utilizarse en su contra. Sin embargo, se trataría de formas que «siguen estando completamente por pensar».

Lo que las reflexiones de Agamben suscitan, en definitiva, puede resumirse en las mismas sensaciones que él asegura experimentar leyendo a Debord: no necesitan aclaraciones, ni

encomios ni menos aún prefacios. Ensalzar su independencia de juicio, su clarividencia profética o la limpieza clásica del estilo no serviría de nada. Sus ideas, más bien, han de ser utilizadas como manuales o herramientas de resistencia frente al poder, como armas acaso inadecuadas similares a las que el fugitivo, en su afán de libertad, recoge y desliza de forma presurosa en su cintura.

EL EXTREMISTA DISCRETO

Una vida no muy beata

En un nuevo país primermundista,
algo así como España entre dos guerras
coloniales, en una urbanización ilegal,
poseer una casita adosada, bastante pasta
y vergüenza ninguna. Leer editoriales de EL PAÍS
y no sufrir, no pensar, no pagar impuestos.
Apuntarse al PP, a CiU, al PSOE
y vivir como un viejo progre reciclado
entre las ruinas de mi ética.

BRUTUS XIRUQUERUS

En la muerte de Manuel Vázquez Montalbán

Cuando este número estaba ya cerrado para ir a la imprenta nos llega la noticia de la muerte de Manolo Vázquez. Como siempre que la muerte siega, prematuramente y en su plenitud, la vida de una persona querida y respetada, la noticia para todos nosotros ha sido una conmoción. Manolo ha sido para toda la izquierda de este país un referente sólido e inmovible, tanto en los años más duros de la dictadura —que le clavó las garras de la represión carcelaria y de la censura— como en los de la transición y en la prolongada travesía del desierto en que todavía nos movemos. Su curiosidad inacabable, unida a una capacidad notable para percibir con acierto por dónde iban los tiros, le dieron una aptitud excepcional para ser portavoz de todos nosotros, de toda la izquierda, sin excepciones. Intuición certera, enorme capacidad de trabajo, pluma fácil (o así lo parecía por su fecundidad), ironía, vitalidad y capacidad para conectar con el común de los mortales: estos fueron algunos de los ingredientes que hicieron de él este portavoz tan representativo.

Nacido, como él decía, en un barrio popular que perdió la guerra y en el seno de una familia que la perdió aún más, Manolo nunca olvidó sus orígenes, como ocurre a veces con quienes alcanzan altas cotas de popularidad y prestigio social. Al contrario, siempre asumió con tenacidad y seriedad el papel de *intelectual orgánico* —expresión que gustaba de usar— de las clases trabajadoras y populares. No renegó de su militancia comunista cuando llovían piedras contra todo lo rojo y muchos tomaron sus distancias. Para muchos de nosotros, abrir el periódico y encontrar la crónica, la columna o los reconfortantes exabruptos de Manolo era una satisfacción y un consuelo. Cuando se hacía oír tanto silencio desde la izquierda, la suya era la voz que no callaba nunca, la voz —a menudo— del que clama en el desierto. Aunque muchos luchaban cada uno desde su trinchera como podía, hubo momentos en que nos acometía la incómoda sensación de que tal vez lo estábamos dejando demasiado solo en su tarea incansable de prestarnos a toda la izquierda su voz demasiado solitaria. Queremos esperar que esta soledad de corredor de fondo no haya sido en balde, porque hay hoy más signos que ayer de que se están recomponiendo los hilos de la tradición emancipatoria, y la voz de Manuel Vázquez Montalbán habrá contribuido entre las que más para que así sea.

Además de su labor periodística, puso al servicio de los trabajadores y de la causa de la libertad una prolífica obra literaria sin estrecheces de estilo, con esa mezcla vitalista de inteligencia, ironía y de placer sensorial que es una de las claves de su éxito. En la obra de Manolo este éxito de público no se pagaba con renunciaciones ideológicas. Alguien calibrará algún día cuál ha sido su contribución al mantenimiento de una cultura popular de izquierdas en este país, pero sospechamos que habrá sido considerable. Gracias por todo, Manolo.

La redacción de mientras tanto

CITA

No son los derechos codificados los que garantizan el poder del pueblo,
sino el poder del pueblo el que puede consolidar derechos.

MANUEL SACRISTÁN LUZÓN, 1974

mientrastanto.e

Mientras tanto está publicando un boletín electrónico de periodicidad mensual, quienes deseen suscribirse gratuitamente a *mientrastanto.e* pueden solicitarlo a la dirección siguiente:

suscripciones@mientrastanto.org

BOLETÍN DE SUSCRIPCIÓN

Nombre

Dirección C.P.

Población Provincia

NIF Teléfono

Profesión Ocupación

SUSCRIPCIÓN POR 4 NÚMEROS
DESDE EL PRÓXIMO NÚMERO

- primera suscripción
 renovación

Tarifa:

- España 20 euros
- Europa 30 euros
- Resto del mundo 37 euros

NÚMEROS ATRASADOS QUE SE DESEA RECIBIR

.....

.....

Cada número atrasado en existencia 3 euros

REDACCIÓN

Apartado de Correos 30059, Barcelona

SUSCRIPCIONES

Apartado de Correos 857, Barcelona

e-mail: icariaeditorial@terra.es

Tel.: (34) 93 301 17 23/26 (Lunes a viernes de 9 a 17 h.)

Fax: (34) 93 317 82 42

Forma de pago:

- Talón adjunto a nombre de Icaria editorial
- Transferencia a la c/c de Icaria editorial n.º 2013 0717 61 0200380950, de la Caja de Ahorros de Cataluña - Girona, 15 - 08010 Barcelona.

Domiciliación bancaria:

lbta. o cc.

n.º

entidad

oficina

control

n.º lbta. o c.c.

VISA N.º tarjeta Fecha de caducidad

(Para facilitar la gestión bancaria, le rogamos que rellene cuidadosamente cada casilla con el dígito correspondiente. Consulte con su entidad bancaria sin tiene alguna duda.)

dirección

agencia

entidad

Giro postal a la cuenta corriente postal n.º 1302 9251 12 0017777887.

(Al usar esta forma de pago, el suscriptor debe enviar por carta a la secretaria de *mientras tanto* el resguardo de giro junto con su nombre. No podemos cobrar los giros que se envíen al Apartado de Correos, por lo que todos deben dirigirse a la cuenta corriente postal antes citada.)

ORDEN DE PAGO

Sr. director del Banco o Caja

Dirección

Sírvase atender hasta nuevo aviso, y con cargo a mi cuenta, los recibos que le sean presentados por la revista *mientras tanto*.

Titular de la cuenta

Dirección

Número de la cuenta

Atentamente,

(firma)